

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

59ª REUNIÓN — 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 1º/2 DE ABRIL DE 1992

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,  
doctor LUIS A. J. BRASESCO

y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,  
doctor JUAN RAMÓN AGUIRRE LANARI

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUIA

Prosecretarios: señores MARIO DÉLFOR FASSI y DONALDO ANTONIO DIB

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón  
AMOEDO, Julio A.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO, Leopoldo  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
COSTANZO, Remo José  
FIGUEROA, José Oscar  
GASS, Adolfo  
GENOUD, José  
GURDULICH de CORREA, Liliana  
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.  
JUÁREZ, Carlos A.  
LEÓN, Luis Agustín  
LOSADA, Mario Aníbal  
LUDUEÑA, Felipe  
MAC KARTHY, César  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARTÍNEZ, Daniel  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo  
MOLINA, Pedro E.  
NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
OYARZÚN, Juan C.

POSLEMAN, Eduardo A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.  
ROMERO, Juan Carlos  
ROMERO FERIS, José A.  
RUBEO, Luis A.  
SAADI de DENTONE, Alicia  
SAMUDIO GODOY, Wilfrido  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado  
TRILLA, Juan  
VACA, Eduardo P.  
VELÁZQUEZ, Héctor

### AUSENTES, CON AVISO:

BENÍTEZ, Alfredo L.  
CONCHEZ, Pedro A.  
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
SAPAG, Elías  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

### EN COMISION:

BITTEL, Deolindo F.  
BRITOS, Oraldo N.

## SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por Salta doctor **Horacio F. Bravo Herrera** procede al izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 5855.)

## 2. Asuntos entrados:

- I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdos. (P.E.-634/91.) (Página 5855.)
- II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre negociación colectiva de trabajo. (P.E.-635/91.) (Pág. 5855.)
- III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 23.551 (Asociaciones Sindicales de Trabajadores). (P.E.-636/91.) (Pág. 5861.)
- IV. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 5867.)
- V. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 5868.)
- VI. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 5868.)
- VII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5868.)
- VIII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 5868.)
- IX. Peticiones particulares. (Pág. 5869.)
- X. Proyecto de declaración del señor senador **Aguirre Lanari** por el que se expresa beneplácito por los resultados de un plebiscito en favor de reformas democráticas en Sudáfrica. (S.-1.362/91.) (Pág. 5870.)
- XI. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa complacencia por la realización de elecciones libres en la República de Albania. (S.-1.363/91.) (Pág. 5870.)
- XII. Proyecto de comunicación del señor senador **Brasesco** por el que se solicitan informes acerca de la construcción del Eje Vial del Cono Sur. (S.-1.364/91.) (Página 5870.)
- XIII. Proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicitan informes acerca de las acciones adoptadas para la prevención, control, tratamiento y vigilancia de la epidemia del cólera en nuestro país. (S.-1.365/91.) (Pág. 5871.)
- XIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca de la reglamentación de la ley 24.059 de seguridad interior. (S.-1.366/91.) (Pág. 5872.)

XV. Proyecto de comunicación del señor senador **Mazzucco** por el que se solicita se declare de interés nacional la I Reunión del Conurbano Sobre Organizaciones de Base y Salud Ambiental. (S.-1.367/91.) (Pág. 5873.)

XVI. Proyecto de ley del señor senador **Bravo Herrera** y demás integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por el que se reemplaza la denominación "El Pueblo Argentino" por la de "La Nación Argentina" en los artículos 3º a 7º y en el 10 de la ley 24.020 (Régimen de condecoraciones militares). (S.-1.370/91.) (Pág. 5873.)

XVII. Proyecto de comunicación del señor senador **Velázquez** por el que se solicita se declare de interés nacional la II Exposición Nacional e Internacional de la Industria de la Madera. (S.-1.371/91.) (Pág. 5874.)

XVIII. Proyecto de comunicación del señor senador **Brasesco** por el que se solicitan informes acerca de la actuación de la Cancillería respecto de la reforma de Salto Grande. (S.-1.372/91.) (Pág. 5874.)

XIX. Proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicita la realización con carácter de anual de una Semana de la Cultura dedicada a cada una de las provincias en la Capital Federal. (S.-1.373/91.) (Pág. 5875.)

XX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la creación de un archivo de la música popular argentina. (S.-1.374/91.) (Pág. 5875.)

XXI. Proyecto de comunicación del señor senador **Brasesco** por el que se solicita el mantenimiento de la tarifa telefónica de la Compañía Argentina de Teléfonos, por parte de la Empresa Telecom Argentina S.A., en Entre Ríos. (S.-1.375/91.) (Página 5876.)

XXII. Proyecto de comunicación del señor senador **Ludueña** por el que se solicita se intensifiquen las tareas para lograr un adecuado consenso para la reforma constitucional. (S.-1.376/91.) (Pág. 5876.)

XXIII. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se adhiere a la gesta reivindicatoria en las islas Malvinas del 2 de abril. (S.-1.377/91.) (Pág. 5877.)

XXIV. Proyecto de declaración del señor senador **Losada** por el que se expresa satisfacción por el respaldo de la población blanca de Sudáfrica a la política antisegregacionista del presidente **Frederik de Klerk**. (S.-1.378/91.) (Pág. 5877.)

XXV. Proyecto de resolución de la señora senadora **Rivas** por el que se recomienda la con-

- instrumentar las prescripciones de la ley ratificadora de la **Convención sobre los Derechos del Niño**. (S.-1.135/91.) Se aprueba. (Pág. 5945.)
34. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière por el que se solicitan informes sobre la suspensión del embarque de material nuclear a Irán.** (S.-1.216/91.) Se aprueba. (Pág. 5946.)
35. **Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de resolución del señor senador Bravo Herrera por el que se solicita el cumplimiento de la ley 12.108, por la que se dispuso el emplazamiento de un monumento en memoria de José Hernández.** (S.-647/91.) Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 5947.)
36. **Moción del señor senador Rodríguez Saá para considerar sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre reforma impositiva y modificaciones al régimen de procedimiento tributario.** (C.D.-154-158/91.) Se aprueba. (Pág. 5948.)
37. **Moción del mismo señor senador para pasar a cuarto intermedio hasta mañana en caso de no poder votarse por falta de quórum el proyecto a que se refiere el punto anterior de este sumario.** Se aprueba. (Pág. 5948.)
38. **Continúa la consideración sobre tablas del proyecto de ley a que se refiere el punto 36 de este sumario.** Se aprueba. (Pág. 5948.)
39. **Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Obras Públicas, de Transportes, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el proyecto de ley devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados sobre régimen nacional de puertos.** (P.E.-268/90.) Se aprueba. (Pág. 6001.)
40. **A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del señor senador Vaca y otros señores senadores por el que se crea en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral del Mercosur.** (S.-1.251/91.) (Pág. 6010.)
41. **A moción del señor senador Gass se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita se declare de interés nacional la II Exposición Nacional e Internacional de la Industria de la Madera.** (S.-1.371/91.) (Pág. 6011.)
42. **A moción del señor senador Romero Feris se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes sobre la aplicación de la ley 24.059, de seguridad interior.** (S.-1.366/91.) (Pág. 6012.)
43. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Brasesco por el que se solicita que la empresa Telecom mantenga el precio de sus tarifas en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y Salta.** (S.-1.375/91.) Se aprueba. (Pág. 6013.)
44. **A pedido del señor senador Vaca se resuelve incluir la firma de la señora senadora Gurdulich de Correa en el proyecto de ley por el que se crea la Comisión Bicameral del Mercosur.** (S.-1.251/91.) (Pág. 6013.)
45. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Brasesco por el que se solicitan informes acerca de lo actuado por la Cancillería en el proyecto de Salto Grande, como consecuencia de lo insertado en el punto 5º de la declaración suscripta entre los presidentes de Argentina y Uruguay.** (S.-1.372/91.) Se aprueba. (Página 6013.)
46. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se solicita se otorguen subsidios a quienes sufrieron daños con motivo del acto terrorista perpetrado a la Embajada de Israel.** (S.-1.350/91.) Se aprueba. (Pág. 6014.)
47. **Moción del señor senador Brasesco para postergar hasta la próxima sesión la preferencia acordada para la sesión de la fecha para el proyecto de declaración del señor senador Lafferrière y otros señores senadores por el que se repudia la represión contra periodistas televisivos en San Salvador de Jujuy.** (S.-633/91.) Se aprueba. (Pág. 6014.)
48. **Moción de preferencia formulada por la señora senadora Rivas para considerar en la sesión del 15 de abril o en la primera que se realice con posterioridad el proyecto de ley de educación.** (S.-1/90, 995, 1.275 y 1.380/91.) Se aprueba. (Pág. 6015.)
49. **A moción del señor senador Brasesco se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes acerca de la construcción del Eje Vial del Cono Sur, indicado en el punto 8 de la declaración conjunta de los presidentes de Argentina y Uruguay.** (S.-1.364/91.) (Pág. 6015.)
50. **A pedido del señor senador Brasesco se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto para el proyecto de ley del que es autor por el que se crea el Consejo Económico Social del Mercosur dentro del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.** (S.-1.381/91.) (Pág. 6016.)
51. **A pedido del señor senador Brasesco se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores y Culto para el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la realización de estudios de factibilidad para la construcción de una autopista que una el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo con el puente internacional Puerto Unzué-Fray Bentos.** (S.-1.382/91.) (Pág. 6016.)

## Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

## RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de que por intermedio del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cultura, proceda a dar inmediato cumplimiento a la ley 12.108 sancionada el 9 de octubre de 1934, que dispuso el emplazamiento de un monumento a la memoria de don José Hernández, en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, vería con agrado del cumplimiento a la comunicación de este Honorable Senado de la Nación de fecha 27 de junio de 1984, registrada en la Presidencia de la Nación bajo actuación 26.038/84, en lo que respecta al lugar de emplazamiento, nacionalidad del escultor, llamado a concurso público de proyectos y fecha de su inauguración.

Horacio F. Bravo Herrera.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 12.108 dispuso en su artículo 1º el emplazamiento de un monumento a la memoria de don José Hernández, en la ciudad de Buenos Aires.

El texto legal fue sancionado por el Congreso de la Nación el 9 de octubre de 1934.

Esta ley nunca fue ejecutada por los distintos gobiernos de turno pese a ser José Hernández harito merecedor de tan justiciero homenaje.

Así, la Honorable Cámara de Senadores sancionó el 27 de junio de 1984 una comunicación que tenía por objeto poner en funcionamiento aquella ley y en principio así ocurrió, pero la realidad permite afirmar que no obstante ello, la ciudad de Buenos Aires no cuenta a la fecha con el emplazamiento del monumento a José Hernández.

Hablar del ilustre autor del Martín Fierro llevaría páginas enteras. Sus cualidades son por demás conocidas por todos nosotros, creo que el mejor reconocimiento es la inmediata ejecución de aquella ley.

Y es ese el espíritu de este proyecto.

Por los breves fundamentos expuestos, solicito su aprobación.

Horacio F. Bravo Herrera.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

36

## REFORMA TRIBUTARIA

**Sr. Presidente (Menem).** — Según el plan de labor acordado, corresponde el tratamiento del

proyecto de ley en revisión sobre reforma tributaria.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: es a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa. Si dicho tratamiento resultara aprobado y llegado el momento de la votación del proyecto se hiciera muy tarde y nos quedaríamos sin quórum, solicito que se pase a un cuarto intermedio para continuar mañana por la mañana.

**Sr. Brasesco.** — Que se vote el pedido de cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Menem).** — En primer término, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se procederá en consecuencia.

37

## CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración el pedido de que en el supuesto de que la Cámara se quede sin quórum al momento de la votación, se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las...

**Sr. Brasesco.** — A las 10 de la mañana.

**Sr. Presidente (Menem).** — ...once.

**Sr. Cass.** — Que se empiece a llamar a las diez.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En el supuesto mencionado, se pasará a cuarto intermedio hasta mañana a las 11.

38

## REFORMA TRIBUTARIA (Continuación)

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley en revisión sobre reforma tributaria.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (Lee)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

## Título I

## Modificación del impuesto a las ganancias

Artículo 1º — Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, de la forma que se indica a continuación:

1. Reemplázase el artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º. Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de emergencia que establece esta ley.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la ganancia fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior.

Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el título V.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 33.

2. Derógase el segundo párrafo del artículo 5º.

3. Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

3.a) Incorporase como penúltimo párrafo el siguiente:

Por su parte, los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina, sólo podrán compensarse con ganancias de esa misma condición.

3.b) Sustitúyese en el último párrafo la expresión "en el párrafo anterior" por la expresión "en los párrafos anteriores" y la expresión "operaciones" por "operaciones y actividades".

4. Derógase el inciso a) del artículo 20.

5. Sustitúyese en el artículo 37 la expresión "cuarenta y cinco por ciento (45%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)".

6. Sustitúyese el inciso g) del artículo 45 por el siguiente:

g) Los dividendos en dinero y en especie que distribuyan a sus accionistas las sociedades comprendidas en el artículo 69, inciso a).

7. Derógase el artículo 46, excepto su tercer párrafo.

8. Sustitúyense en el artículo 69: en el inciso a) la expresión "veinte por ciento (20%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)"; en el inciso b) la expresión "treinta y seis por ciento (36%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)".

9. Derógase el artículo 70.

10. Derógase el segundo párrafo del artículo 73.

11. Sustitúyese en el inciso c) del artículo 81 la expresión "diez por ciento (10%)" por la expresión "cinco por ciento (5%)".

12. Elimínase en el primer párrafo del artículo 91 la expresión "a que se refiere el artículo 70".

13. Reemplázase en el primer párrafo del artículo 91 la expresión "treinta y seis por ciento (36%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)".

14. Reemplázase en el artículo 92 la expresión "treinta y seis por ciento (36%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)".

Art. 2º — Las disposiciones de este título regirán a partir de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y tendrán efectos:

a) Las de los puntos 1, 2 y 3: para los ejercicios que cierren con posterioridad al 1º de abril de 1992 y para el período fiscal 1992 para las personas físicas y sucesiones indivisas;

b) La del punto 8: para los ejercicios que cierren con posterioridad al 1º de abril de 1992;

c) Las de los puntos 4, 6, 7, 9, 10 y 12: para los dividendos cuya distribución se apruebe por asamblea celebrada con posterioridad a la finalización del primer ejercicio que cierre a partir del 1º de abril de 1992;

d) Las de los puntos 5, 11, 13 y 14: a partir del 1º de abril de 1992.

## Título II

## Impuesto sobre los activos

Art. 3º — Modifícase el título I de la ley 23.760, impuesto sobre los activos y sus modificaciones, de la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º: Establécese un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación sobre los activos, valuados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, resultantes al cierre de los diez (10) ejercicios anuales iniciados a partir del 1º de enero de 1990, inclusive.

2. Sustitúyese en el artículo 3º el texto del inciso g) e incorpórase un inciso h), con las siguientes texturas:

g) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea igual o inferior a diez mil pesos (\$ 10.000). Cuando existan activos gravados en el exterior dicha suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo gravado del exterior, respecto del activo gravado total.

Quando el valor de los bienes supere la mencionada suma o la que se calcule de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según corresponda, quedará sujeto al gravamen la totalidad del activo gravado del sujeto pasivo del tributo.

- h) Los bienes inmuebles pertenecientes a sujetos a que se refiere el inciso d) del artículo 2° cuando tales inmuebles estén afectados exclusivamente a finalidades sociales y de saneamiento y preservación del medio ambiente.
3. Sustitúyese en el capítulo II el subtítulo "Valuación de bienes" por "Valuación de bienes situados en el país".
4. Modifícase el artículo 4° de la forma que se indica a continuación:
- a) Sustitúyese el enunciado del primer párrafo por el siguiente:
- Los bienes gravados del activo en el país deberán valuarse de acuerdo con las siguientes normas.
- b) Sustitúyese el enunciado del inciso a) por el siguiente:
- Bienes muebles amortizables, incluso reproductores amortizables.
- c) Incorporáse como último párrafo del inciso e), el siguiente:
- Del total de créditos podrá descontarse el importe de los que se mantengan en gestión judicial contra el Estado-deudor (nacional, provincial o municipal), en los que no se haya producido transacción judicial o extrajudicial.
5. Incorporáse a continuación del artículo 4°, los siguientes:
- "Artículo .... Cuando las variaciones de activos operadas durante el ejercicio, hicieran presumir un propósito de evasión del tributo, la Dirección General Impositiva podrá disponer que, a los efectos de la determinación del activo gravado, dichas variaciones se proporcionen en función del tiempo transcurrido desde que se operen estos hechos hasta el fin del ejercicio, modificando el activo establecido conforme a las normas de esta ley.
- Artículo .... A los fines de la liquidación del gravamen, no serán computables los dividendos, en efectivo o en especie, excluido acciones liberadas, percibidos o no a la fecha del cierre del ejercicio, correspondientes a ejercicios comerciales de la sociedad emisora que hayan cerrado durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el tributo, cualquiera fuera el ejercicio en el que se hayan generado las utilidades.
- Tampoco serán computables las utilidades acreditadas o percibidas por las participaciones en el capital de otros sujetos pasivos del impuesto, correspondientes a ejercicios comerciales de los mismos cerrados durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el tributo, salvo que formen parte de dichas participaciones al cierre de este último.
6. Elimínase en el capítulo II el subtítulo "Activos no computables".
7. Sustitúyese el artículo 5°, por el siguiente:
- Artículo 5°: A los efectos de este impuesto se entenderá que están situados en el país los

bienes que, de conformidad al artículo siguiente, no deban considerarse como situados con carácter permanente en el exterior.

8. Sustitúyese en el capítulo II el subtítulo "Bienes situados con carácter permanente en el exterior" por "Valuaciones de los bienes situados con carácter permanente en el exterior".
9. Incorporáse a continuación del artículo 6°, el siguiente:

Artículo .... Los bienes gravados del activo situado con carácter permanente en el exterior deberán valuarse de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Los bienes a que se refieren los incisos a), b), c), f), g) y h) del artículo 4°, por aplicación de dichas normas excepto en lo relativo a la actualización de valores, el cómputo de diferencias de cambio y a las que toman como referencia los impuestos inmobiliarios o tributos similares vigentes en el país. No obstante, si las valuaciones resultantes fueran inferiores al valor de plaza de los bienes, deberá tomarse este último;
- b) Los créditos, depósitos y existencias de moneda extranjera, incluidos los intereses y ajustes devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio; al valor a esa fecha.

Para la conversión a moneda nacional de los importes en moneda extranjera de las valuaciones respectivas se aplicará el valor de cotización, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina de la moneda extranjera de que se trate a la fecha de cierre del ejercicio.

10. Sustitúyese en los párrafos tercero y cuarto del artículo 10, la expresión "veinte por ciento (20%)" por la expresión "treinta por ciento (30%)".
11. Sustitúyese en el último párrafo del artículo 11 la expresión "al mes de diciembre de 1989" por "al mes de marzo de 1991".
12. Incorporáse en el capítulo III "Otras disposiciones", a continuación del artículo 11, el siguiente:
- Artículo .... Cuando los contribuyentes de este impuesto sean titulares de bienes gravados situados con carácter permanente en el exterior, por los cuales se hubieran pagado tributos de características similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o el activo en forma global, de acuerdo con lo que al respecto establezca la reglamentación, podrán computar como pago a cuenta los importes abonados por dichos tributos hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los citados bienes del exterior.
13. Deróganse los artículos 12 y 13.

Art. 4° — Reemplázase en el artículo 6° de la ley 23.427, modificada por la ley 23.760, la expresión "siete períodos fiscales" por la expresión "catorce períodos fiscales".

Art. 5° — Las disposiciones de este título serán de aplicación a partir del primer ejercicio comercial o período

fiscal que cierre a partir de la publicación de la presente ley.

### Título III

#### Exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior

Art. 6° — Las personas físicas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, inscriptos o no, podrán normalizar su situación tributaria mediante la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y de moneda extranjera en el país, en las condiciones previstas en el presente título.

La referida normalización comprende los períodos fiscales no prescritos a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y finalizados hasta el 1º de abril de 1991, inclusive, salvo respecto de los impuestos sobre los activos y a las ganancias, en los que —únicamente respecto de la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior— se extenderá a los finalizados hasta la fecha de la exteriorización efectuada de acuerdo con lo que dispone el artículo 8°, primer párrafo.

Art. 7° — Quedan excluidos del presente régimen los sujetos a quienes se hubiera denunciado o querrelado penalmente por delitos que guarden conexión con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de cualquier origen.

Art. 8° — La exteriorización a que se refiere el artículo 6° se efectuará:

- a) Para la tenencia en el exterior de moneda extranjera y divisas, mediante su transferencia al país dentro de los cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de este título, a través de las entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526.

Están incluidos en este inciso los depósitos en cuenta corriente, en cuentas de ahorro, a plazo fijo y similares;

- b) Para los demás bienes ubicados en el exterior, mediante la presentación de una declaración jurada en la que deberá efectuarse la individualización de los mismos, dentro de los cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de este título.

Asimismo, podrá exteriorizarse la tenencia de moneda extranjera en el país en tanto se trate de importes iguales o inferiores al equivalente a quinientos mil dólares estadounidenses (us\$ 500.000) para cada uno de los sujetos mencionados en el artículo 6°, mediante la presentación de una declaración jurada dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de este título.

Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo será válida la normalización aun cuando los bienes exteriorizados o que se pretenda exteriorizar se encuentren anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad.

Art. 9° — El importe expresado en pesos de la moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen

estará sujeto al impuesto especial que resulte de la aplicación de las siguientes alícuotas:

- |   |      |
|---|------|
| a) Bienes exteriorizados dentro del primer año .....  | 1%   |
| b) Bienes exteriorizados dentro del segundo año ..... | 1,5% |
| c) Bienes exteriorizados dentro del tercer año .....  | 2%   |
| d) Bienes exteriorizados dentro del cuarto año .....  | 3%   |

Para la determinación del importe en pesos deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización efectuada conforme lo prescripto en el artículo anterior siendo de aplicación complementaria las normas de valuación para el impuesto a los activos, con las modificaciones de la presente ley inclusive.

Art. 10. — Sin perjuicio del pago de las alcótas establecidas en el artículo anterior en oportunidad de la exteriorización, deberá ingresarse mensualmente la alícuota adicional del ciento sesenta y seis milésimos por ciento (0,166%), que se elevará al trescientos treinta y dos milésimos por ciento (0,332%) cuando se trate de sujetos alcanzados por el impuesto sobre los activos, aplicada sobre el importe en pesos del valor de los bienes, considerando el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día hábil de cada mes.

Este ingreso corresponderá ser efectuado por los meses calendario que transcurran desde el comenzado el 1º de enero de 1992, inclusive y la fecha en que se produzca la exteriorización en la forma dispuesta en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 8°.

Art. 11. — Quedan comprendidas en las disposiciones de este título exclusivamente la moneda extranjera y divisas que se encuentren depositadas en instituciones bancarias del exterior al 1º de abril de 1991 y los demás bienes existentes en el exterior a la fecha antes indicada.

Para el caso de moneda extranjera existente en el país quedará comprendida aquella que se encuentre depositada en las entidades regidas por la ley 21.526 el trigésimo día corrido contado desde la fecha de entrada en vigencia de este título, siempre que el depósito se hubiera constituido desde el 1º de abril de 1991, inclusive, en adelante.

También quedará comprendida la moneda extranjera que se haya encontrado depositada en alguna de las entidades regidas por la ley 21.526 o entidades bancarias del exterior durante un período no inferior a los noventa (90) días corridos, que incluyan el 1º de abril de 1991 y pueda demostrarse que con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley:

- a) Fue utilizada en la adquisición de cosas inmuebles o muebles no fungibles, o
- b) Acreditarse que con posterioridad al 31 de marzo de 1991 se ha incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en el país. Debe además cumplirse que se mantengan en cualquiera de tales situa-



ciones a la fecha de vigencia de esta ley y continúan en la misma condición por un plazo no inferior a los ciento ochenta (180) días corridos desde la citada fecha.

Art. 12. — Para gozar de los beneficios a que se refiere el artículo 16, el importe correspondiente a la moneda extranjera y divisas transferidas deberá permanecer depositado a nombre de su titular por un lapso no inferior a ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de la transferencia.

La moneda extranjera a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 8º, deberá cumplir igual condición, contándose el plazo desde el trigésimo día a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior.

En ambos casos los depósitos deberán efectuarse en el Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 que adhieran expresamente a la aplicación de los fondos depositados a una línea especial de créditos al sector productivo, según la determine la reglamentación que dicte el Banco de la Nación Argentina.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir la alícuota definida en el artículo 9º para aquellas colocaciones cuyo plazo supere el establecido en el primer párrafo de este artículo.

Art. 13. — La Dirección General Impositiva establecerá la forma y condiciones en que deberá acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12.

Art. 14. — En el caso de la moneda extranjera y divisas las entidades a que se refiere el inciso a) del artículo 7º deberán, en oportunidad de la transferencia, extender un certificado en el que conste:

- Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
- Identificación de la institución bancaria del exterior;
- Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
- Número de las boletas de depósitos que acrediten el ingreso del impuesto especial previsto en el artículo 9º y en el artículo 10, monto y fecha de los depósitos efectuados e institución bancaria en que se realizaron;
- Lugar y fecha de la transferencia.

Art. 15. — La normalización a que se refiere el artículo 6º producirá efectos respecto de los impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales; a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, sobre los capitales, sobre el patrimonio neto, sus respectivos gravámenes de emergencia, sobre los activos, contribución solidaria ley 23.740, contribución especial de emergencia ley 23.764, especial, a la revaluación de hacienda, de emergencia sobre los activos financieros, sobre la transferencia de títulos, valores, internos (excepto el rubro tabacos), al valor agregado, sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, de sellos establecido por el primer artículo incorporado a continuación del artículo 60 de la Ley de Impuesto de Sellos, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, gra-

vamen sobre servicios financieros, gravamen de emergencia sobre las utilidades de las entidades financieras y contribución especial sobre el capital de las cooperativas. Asimismo, producirá efectos con relación al ahorro obligatorio establecido por la ley 23.256 y por la ley 23.549.

Art. 16. — Los sujetos que efectúen la normalización e ingresen el impuesto especial que se establece por los artículos 9º y 10, conforme a las disposiciones de este título, gozarán de los siguientes beneficios:

- No estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias y bienes que se exteriorizan, ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridos;
- No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso c) del artículo 25 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, con respecto a los bienes exteriorizados;
- Quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal —incluida la ley 23.771—, administrativa y profesional que pudiera corresponder, los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y por transgresiones que tuvieron origen en aquellas. Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas y profesionales certificantes de los balances respectivos.

Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante dichas transgresiones;

- Quedarán liberados del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales comprendidos en la presente normalización, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- Liberación del pago de los impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales y a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen.
- Liberación de los impuestos internos (excepto del rubro tabacos) y al valor agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias o bienes exteriorizados por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas —o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de la utilidad bruta correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.
- Liberación de los impuestos sobre los capitales, sobre el patrimonio neto y sobre los

activos, respecto del impuesto originado por incrementos del capital imponible o del patrimonio neto sujeto a impuesto, por un monto equivalente en pesos a las tenencias o bienes exteriorizados.

- Liberación del impuesto a las ganancias por las ganancias netas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior correspondientes a los bienes que se exteriorizaron y no declaradas, obtenidas hasta el período fiscal de la exteriorización a que se refiere el artículo 8º.
- Liberación del ahorro obligatorio establecido por la ley 23.256 y del establecido por la ley 23.549 respecto del ahorro en función de la renta y en función del patrimonio, originado por incrementos de la renta y patrimonio, respectivamente, por un monto equivalente en pesos a las tenencias o bienes exteriorizados.
- Liberación de los demás impuestos enumerados en el artículo 15, respecto de las diferencias de impuesto que reconozcan como causa la incorporación de materia imponible por un monto equivalente en pesos a las tenencias o bienes exteriorizados.

A los fines del presente artículo, el valor en pesos de las tenencias o bienes exteriorizados será el que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9º.

Art. 17. — La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, liberará el impuesto a las ganancias del período fiscal al cual se impute la liberación, correspondiente a los socios que hubieran resultado contribuyentes en dicho período, en la proporción de la materia imponible que le sea atribuible de acuerdo con su participación en la misma.

Art. 18. — Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este título, podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.

Art. 19. — A los fines de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 16, los sujetos que efectúen la exteriorización a que se refiere el artículo 6º, podrán imputar la misma a cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en este régimen. Una vez realizada dicha imputación, ésta tendrá carácter definitivo.

Los montos que se hubieran imputado a los impuestos a las ganancias o sobre los beneficios eventuales o a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas no podrán ser imputados a la liberación de los restantes.

La imputación de las tenencias o bienes exteriorizados contra la materia imponible deberá practicarse considerando valores en moneda de igual poder adquisitivo, aplicando la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, entre el mes de la exteriorización y el mes de cierre del período fiscal al cual se impute.

Art. 20. — La liberación establecida en el inciso d) del artículo 16 no podrá aplicarse a:

- El impuesto resultante de declaraciones juradas presentadas a la Dirección General Impositiva con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley o de determinaciones de oficio iniciadas por dicho organismo mediante el otorgamiento de la vista respectiva.
- Las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas.

Art. 21. — La acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 y el certificado a que se refiere el artículo 14 será exigible en oportunidad de efectuarse la imputación de la normalización a los fines de la liberalización prevista en el artículo 16.

Art. 22. — El ingreso del impuesto especial que se fija por los artículos 9º y 10, deberá efectuarse mediante depósito bancario, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General Impositiva y en las oportunidades siguientes:

- En la fecha de transferencia a que se refiere el inciso a) del artículo 8º;
- En la fecha de presentación de la declaración jurada a que se refiere el inciso b) del primer párrafo y el penúltimo párrafo del artículo 8º;
- La alícuota adicional establecida en el artículo 10 deberá ingresarse, en todos los casos, hasta el día 15 del mes siguiente al que corresponda.

En los casos de ingresos correspondientes a los incisos a) y c) precedentes, las respectivas boletas de depósito serán inominadas y numeradas.

La mora en el pago de los importes a que alude el inciso c), dará lugar a la aplicación de los intereses resarcitorios establecidos en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

La mora acumulada de más de cinco (5) días por cada uno de los pagos mensuales que en definitiva deban ingresarse, que no podrá exceder de treinta (30) días corridos en un pago, dará lugar a que se consideren incumplidos los requisitos para acceder a los beneficios previstos en este título, no procediendo la acreditación de los pagos efectuados.

Art. 23. — A los fines de la liquidación del impuesto sobre los activos, las incorporaciones que se realicen en los activos gravados con motivo de la normalización que se establece por el presente título, no serán computables en el ejercicio de la incorporación y en el siguiente.

Art. 24. — El producido del gravamen establecido por los artículos 9º y 10, se coparticipará de acuerdo con el régimen de la ley 23.548.

Art. 25. — El gravamen del presente título se registra por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección General Impositiva.

Art. 26. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

## Título IV

## Impuesto al valor agregado

Art. 27. — Modifícase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el punto 2 del inciso e) del artículo 3º, por el siguiente:

2. Efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares.

2. Sustitúyese el inciso h) del artículo 6º, por el siguiente:

h) Aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a esas actividades. También estarán exentas las embarcaciones siempre que sean destinadas al uso exclusivo de actividades comerciales así como también las utilizadas en la defensa y seguridad.

3. Sustitúyese el punto 17 del inciso j) del artículo 6º, por el siguiente:

17. Las colocaciones y prestaciones financieras. Esta exención no altera el tratamiento aplicable a las operaciones que generan los ingresos a que se refiere el artículo 9º, en el punto 2 de su quinto párrafo, ingresos que forman parte del valor de la operación atribuible a los hechos impositivos establecidos por la ley.

4. Incorpórase al inciso j) del artículo 6º, los siguientes puntos:

25. Los servicios de sepelio. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales.

26. Los servicios prestados por establecimientos geriátricos. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales.

27. Los trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de embarcaciones contempladas en el inciso h), y de las aeronaves matriculadas en el exterior, los que tendrán, en ambos casos, el tratamiento del artículo 41.

5. Incorpórase a continuación del artículo 6º, el siguiente:

Artículo 31. A efectos de lo dispuesto en el punto 17 del inciso j) del artículo anterior, se entenderá por colocaciones y prestaciones financieras:

a) Los depósitos de efectivo en moneda nacional o extranjera, en sus diversas formas y las demás operaciones relacionadas con los mismos;

b) Los servicios y operaciones, exceptuados la recepción de depósitos y la gestión, relativos a acciones, a títulos valores y a participaciones en sociedades y cooperativas;

c) La concesión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera sea la condición del prestatario y la forma en que se instrumente, incluso mediante efectos financieros, así como las demás operaciones, incluida la gestión, relativas a créditos o préstamos efectuados por quienes los concedieron;

d) La prestación de fianzas, avales, cauciones, garantías y créditos documentarios, incluida la gestión efectuada por quienes concedieron los créditos o préstamos garantizados o las propias garantías;

e) Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de compra o de crédito. Las operaciones indicadas precedentemente no incluyen el servicio de cobro de letras de cambio o demás documentos recibidos en gestión de cobro;

f) Las operaciones de pases de títulos valores, acciones, divisas o moneda extranjera;

g) La negociación y mediación, en las operaciones comprendidas en los apartados precedentes, excepto los servicios a que se refiere el inciso g) del artículo 3º;

h) La gestión de fondos comunes de inversión y las operaciones de ahorro y capitalización;

i) Otras financiaciones no comprendidas en los apartados anteriores.

6. Incorpórase como último párrafo del artículo 24, el siguiente:

En los casos en que el Poder Ejecutivo hiciera o haya hecho uso de la facultad de reducción de alcuotas a que se refiere el párrafo anterior, podrá proceder al incremento de las alcuotas reducidas, hasta el límite de las establecidas en los dos primeros párrafos.

7. Sustitúyese el punto 9 del inciso j) del artículo 6º, por el siguiente:

9. Las prestadas por las Bolsas de Comercio, así como los servicios prestados por los agentes de bolsa y los agentes del mercado abierto y cajas de valores.

8. Modifícase el primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 49 de la siguiente forma:

Artículo 49. Se encuentran exentos del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, los ingresos obtenidos por la prensa escrita, las emisoras de radio y televisión, las agencias informativas y la publicidad en la vía pública, en razón del desarrollo de sus actividades específicas. En cuanto a los ingresos de la comercialización de espacios publicitarios en los referidos medios de expresión comprende a todos los sujetos intervinientes por los ingresos provenientes de tal proceso comercial hasta el valor de las ta-

rifas fijadas por los respectivos medios de difusión.

Art. 28. — Las disposiciones de este título regirán para los hechos impositivos que se perfeccionan a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

## Título V

## Procedimiento tributario - Ley 11.683

Art. 29. — Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente manera:

1. Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Agrégase al segundo párrafo del inciso d) la expresión "a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate";

b) Incorpórase el siguiente inciso:

d) En el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlos con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la Dirección General Impositiva, de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma que se prescribe en los apartados 1 y 2 del último párrafo del inciso d) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcaran un período fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará, del modo allí previsto, sobre los años no prescriptos.

c) Incorpórase a continuación del último párrafo, los siguientes:

También la Dirección General Impositiva podrá efectuar la determinación calculando las ventas o servicios realizados por el contribuyente o las utilidades en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada y aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios o utilidades proporcionales a los índices en cuestión. La carencia de contabilidad o de

comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuada por la Dirección General Impositiva en base a los índices señalados u otros que contengan esta ley o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta, sin perjuicio del derecho del contribuyente o responsable a probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basada en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la Dirección General Impositiva sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo.

2. Incorpórase a continuación del último párrafo del artículo 40, el siguiente:

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registros con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La Dirección General Impositiva podrá limitar esta obligación en atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de la actividad o el servicio y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.

3. Sustitúyese el artículo agregado a continuación del artículo 41 por el artículo 9º de la ley 23.314, por el siguiente:

Artículo 9. Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registros mediante sistemas de computación de datos, deberán mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, por el término de dos (2) años contados, a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado.

La Dirección General Impositiva podrá requerir a los contribuyentes, responsables y terceros:

a) Copia de totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar la Dirección General Impositiva los elementos materiales al efecto;

b) Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.

Asimismo, podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los len-

guajes y/o utilitarios utilizados, así como también listados de programas, carpetas de sistemas, diseño de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de información;

- c) La utilización, por parte del personal fiscalizador del organismo recaudador de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.

Lo especificado en el presente artículo también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros. Esta norma sólo será de aplicación en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación.

La Dirección General Impositiva dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente artículo.

4. Incorporarse, a continuación del segundo artículo agregado a continuación del artículo 44 por la ley 23.314, el siguiente:

Artículo... En los casos en que por dos (2) veces no se emita factura o documento equivalente de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios, o de emitirse no fueran los habitualmente utilizados por el responsable para cumplimiento de sus obligaciones respecto del impuesto al valor agregado y siempre que en cada caso el acta de comprobación respectiva esté asimismo suscrita en forma voluntaria por el adquirente, locatario o prestatario, debidamente identificado, el funcionario interviniente procederá, en ese mismo acto, a la clausura del o los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios en los que se hubiere producido la omisión.

Dicha clausura será de tres (3) a diez (10) días corridos, y deberá ordenarse en el acta que se libre, donde constarán los hechos que configuren la comisión de las conductas mencionadas en el primer párrafo y podrán agregarse los datos, constancias o comprobantes que correspondan. El acta que ordene la clausura deberá estar suscrita por un funcionario que posea a ese fin el carácter de juez administrativo, carácter que a tal efecto será otorgado directamente por el director general, no siendo de aplicación el requisito establecido en el segundo párrafo del artículo 10.

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán aun cuando por la primera de las omisiones se hubiera aplicado la clausura a que se refiere el artículo 44 o estuviera en trámite el procedimiento respectivo.

Una vez que se cumpliera una clausura en virtud de las disposiciones del presente artículo,

la existencia de un solo incumplimiento posterior dará lugar a la aplicación de la clausura prevista en el mismo.

A los fines del presente artículo, la apelación prevista en el artículo incorporado a continuación del artículo 78 se otorgará, en todos los casos, al solo efecto devolutivo, no siendo de aplicación lo establecido en el último párrafo del citado artículo en lo que hace al otorgamiento de efecto suspensivo al recurso.

5. Incorporarse como segundo párrafo del artículo 68 el siguiente:

Se suspenderá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 24, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del capítulo incorporado a continuación del capítulo XIII por la ley 23.905. La suspensión alcanzará a los períodos no prescritos a la fecha de la vista referida.

Art. 30. — Las disposiciones de este título regirán a partir de la fecha de su publicación en el Boletín oficial.

#### Título VI

##### Quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991

Art. 31. — Todos los quebrantos a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, que a la fecha de vigencia de la presente ley no resultaran compensables o no hubieran sido ya compensados con ganancias de ejercicios siguientes, cerrados hasta el 31 de marzo de 1992, y que tengan su origen en ejercicios fiscales cerrados hasta el 31 de marzo de 1991, serán transformados en créditos fiscales conforme se dispone en el presente título.

Lo dispuesto precedentemente no alcanza a los contribuyentes que hayan sido declarados en quiebra con acuerdo resolutorio ni a los que hubieran cesado en su actividad o hubieran cancelado su clave única de identificación tributaria. Para los contribuyentes que no hubieran presentado sus declaraciones juradas del impuesto, correspondientes a los períodos fiscales cerrados hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive, el derecho al crédito fiscal está supeditado a la previa regularización de su situación.

Art. 32. — Los sujetos pasivos que tengan derecho a la obtención del crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior deberán presentar — hasta la fecha que al efecto fije la Dirección General Impositiva — una solicitud de reconocimiento y una declaración jurada en la que consignen el monto de los quebrantos no compensados y la fecha de origen de los mismos.

El aludido monto se actualizará conforme las disposiciones de la ley del impuesto hasta el 31 de marzo de 1991, y el veinte por ciento (20%) de dicho importe constituirá el monto del crédito fiscal.

Art. 33. — Los créditos fiscales a que se refiere el presente artículo se considerarán deudas del Estado nacional al 31 de marzo de 1991 una vez confirmado su importe por la Dirección General Impositiva.

Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de los bonos de cancelación de deudas en pesos creados por la ley 23.982, siendo de aplicación dicha norma legal y su reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto en este título.

Vencido el plazo que establezca la Dirección y que no será menor de ciento ochenta (180) días, los créditos se considerarán de oficio como controvertidos y los reclamos correspondientes se deberán realizar según los procedimientos de la mencionada ley 23.982.

#### Título VII

##### Otras disposiciones

Art. 34. — Facilitase al Poder Ejecutivo nacional para disminuir las respectivas alícuotas vigentes o dejar sin efecto total o parcialmente, en la medida en que estime que los ingresos provenientes de los restantes tributos así lo permite, a los siguientes gravámenes:

- Impuesto de sellos;
- Impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operativas.

Art. 35. — Facilitase al Poder Ejecutivo para disminuir las alícuotas de los siguientes gravámenes, cuando las condiciones de estabilidad económica así lo aconsejen:

- Tasas judiciales;
- Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Art. 36. — Facilitase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten procedentes como consecuencia de la sanción de esta ley.

Art. 37. — Modifícase la ley 23.898, de la siguiente forma:

- Suprímese el inciso a) del artículo 3º.
- Incorpórase como nuevo inciso del artículo 13, el siguiente:
  - Las ejecuciones fiscales.

Art. 38. — Elimínase de la planilla II anexa al inciso b) del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos — texto ordenado en 1979 y sus modificaciones — la partida 97.06, su texto y observaciones.

Art. 39. — A los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzadas por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992 inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).

El Poder Ejecutivo nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones, deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior.

Art. 40. — La recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá de la siguiente forma:

- Un diez por ciento (10%) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
- Un dos por ciento (2%) a refuerzo de la cuenta especial 550 "Fondo de aportes del Tesoro nacional a las provincias".
- El cuatro por ciento (4%) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires, conforme al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
- El ochenta y cuatro por ciento (84%) restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.

Art. 41. — Los trabajadores con goce de beneficios previsionales cuyo vínculo laboral se regularice en el marco de la ley 24.013 no serán objeto de ninguna sanción o disminución de su haber hasta el vencimiento del plazo que se fija en el párrafo siguiente.

La registración espontánea y comunicación fehaciente al trabajador a que se refiere el artículo 12 de la ley 24.013 podrá realizarse hasta el 30 de junio de 1992, manteniéndose los beneficios del régimen de regularización hasta esa fecha excepto en cuanto a los aportes, contribuciones e intereses y recargos, incluyendo obras sociales, atribuibles a la ampliación del plazo que se dispone en el presente párrafo.

La regularización del empleo no registrado realizada conforme a lo dispuesto en el título II de la ley 24.013 no podrá ser utilizada, directa ni indirectamente, por la Dirección General Impositiva u otros organismos fiscales para fundar determinaciones de oficio, y hará aplicable lo dispuesto en el artículo 16, inciso c) de la presente ley, incluso con respecto a cualquier infracción vinculada con las omisiones regularizadas.

#### Vigencia

Art. 42. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán los efectos que en cada caso indican los títulos que la conforman.

Art. 43. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. Dios guarde al señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente, corresponde analizar el proyecto que impulsará el Poder Eje-



cutivo y que fuera aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha elaborado un dictamen que obra en Secretaría. Vamos a comenzar el análisis haciendo el informe en general sobre este proyecto de ley, para luego entrar a considerar su articulado en particular.

Si bien es cierto que el proyecto del Poder Ejecutivo comprendía una reforma más vasta que incluía el impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas y el impuesto sobre el excedente primario a las empresas, conocido como IEPE, esos capítulos fueron extraídos del texto original; sin embargo, esta circunstancia por todos conocida no ha significado ninguna pérdida en la armonía de este proyecto de ley que conserva tanto la autonomía en la materia que aún queda remanente, como los fines por los cuales la comisión recomienda su tratamiento y aprobación.

Creemos que esta iniciativa continúa la marcha iniciada por otras reformas impositivas con vistas a lograr dentro del sistema tributario argentino una estructura armónica respecto del conjunto de las normas. Además facilita la aplicación de cada una de las materias de los tributos que aquí encontramos modificados.

En este sentido, los impuestos a las ganancias, a los activos y al valor agregado constituyen los aspectos más importantes de esta modificación.

Es novedoso en esta materia el tratamiento que se da a la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior. De esta forma se trata de rever una distorsión que hubo en la lucha contra la evasión, y además se tiende hacia la repatriación de los capitales que se han fugado por distintos motivos en los últimos años.

La reforma tributaria tiende en primer lugar y como primer objetivo a crear un sistema tributario equilibrado y ajustado a la estructura económica y jurídica que rige en la Nación en estos momentos.

Como segundo aspecto, se trata de evitar lo que otras veces sucedió: que las urgencias presupuestarias, la urgencia por la recaudación, o a veces la inestabilidad monetaria, se superpusieran a la finalidad básica que era la de apuntar a la norma impositiva.

Por eso muchas veces hemos criticado reformas impositivas que perdían el objetivo de neutralidad de los impuestos, pero en algunos casos se hablaba de la inequidad de impuestos que afectaban a un sector más que a otros. Uno

de ellos fue el impuesto a los débitos bancarios, que afectó notablemente la fluidez del intercambio comercial a partir de un instrumento idóneo como es el cheque.

No es el caso de esta reforma, ya que tiende en muchos aspectos a mejorar la aplicación y percepción del tributo, como en el caso de la unificación del impuesto a las ganancias con una tasa del 30 por ciento. Si bien esto contribuye a un propósito recaudatorio, no excede de lo razonable y evita las distorsiones que existían en las tasas diferenciadas que regían hasta el momento.

En lo que se refiere al nuevo régimen del impuesto a las ganancias en materia de quebrantos anteriores a marzo de 1991, la propuesta tiende a distribuir con mayor justicia los costos de saneamiento fiscal, ya que cuando por ley 23.982 consolidamos las deudas a través de los bonos para deudas previsionales y para los acreedores del Estado, hicimos cargar en un sector de la sociedad el peso de la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.

Creemos que en esta materia estamos generando un cierto equilibrio cuando establecemos en el capítulo VI un reparto del sacrificio al impedir el traslado de los quebrantos de un ejercicio a otro.

De esta manera el Estado incrementará notablemente su recaudación. Además, creemos que es equitativo para las provincias el hecho de que la consolidación de estos quebrantos, que pueden significar unos 4.000 millones de pesos, constituya al momento de su vencimiento obligaciones a cargo del Tesoro nacional.

También merecen destacarse dos modificaciones que traen estas normas. Una consiste en la introducción del concepto de renta mundial en el impuesto a las ganancias, y la otra es la gravabilidad a los efectos del impuesto a los activos de los bienes situados permanentemente en el exterior. De esta manera se extiende un criterio introducido para el impuesto a los bienes no incorporados al proceso económico, que quedaría falto de la debida integridad si no se avanzara en la misma dirección en los impuestos ahora reformados. Creemos que de esta manera se da armonía al sistema tributario.

Asimismo, en concepto de renta mundial, que permite gravar los bienes que se poseen en el exterior, proporciona el marco legal que corresponde a una etapa en la cual tratamos de insertar la economía argentina en la economía del mundo a través de la apertura. Si bien para algunos puede resultar utópico el pretender gravar

bienes que los argentinos tengan en el exterior, lo cual puede no tener un impacto beneficioso directo a los efectos recaudatorios, estamos preparando las normas para que en algún momento se cumplan los objetivos de la comunidad internacional de evitar los paraísos fiscales, en los que pueden refugiarse aquellos que no tienen voluntad de contribuir con impuestos donde están obligados a hacerlo. Creemos que los sistemas de información entre los distintos países en materia impositiva van a ir armonizándose. Con esto estamos preparándonos para esa etapa en la que va a ser muy difícil, tanto para argentinos como para extranjeros, sustraerse a las obligaciones fiscales.

En cuanto al régimen especial tendiente a facilitar el ingreso al país de fondos que con anterioridad fueron girados al exterior —lo que se llamó "fuga de capitales", que afectó gravemente a nuestra economía—, se trata de una propuesta por la cual se procura que esos fondos vuelvan para ser colocados en el mercado de capitales, y que los poseedores de los fondos que se repatrien —con un costo que vamos a explicar cuando analicemos el proyecto en particular— los vuelquen, por algún mecanismo previsto en el proyecto, hacia la generación de un mercado de capitales que el país está edificando paulatinamente.

Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que no sólo con la sanción de normas o con su dureza vamos a acabar con la evasión, sino que también hacen falta un marco de estabilidad monetaria, que el país está transitando, y un perfeccionamiento en los mecanismos de fiscalización para sancionar la evasión. Aquí también hemos avanzado sobre los procedimientos de fiscalización y de sanción, por lo que creemos que estamos contribuyendo en favor del objetivo de mayor recaudación que todos deseamos.

En este conjunto de normas existe la posibilidad de que el contribuyente que ocultó ciertos ingresos, y por ende determinados patrimonios, dentro y fuera del país, hasta una suma equivalente a los 500 mil dólares, pueda regularizar esa situación.

En el régimen de procedimientos se incrementan los requisitos exigidos; por ejemplo, es el caso de la obligatoriedad de exhibición de los mecanismos de registración, si fueran computarizados. Se prevé un caso preciso, en el cual se procede a la inmediata clausura del local sujeto a verificación. Con esto creemos que vamos achicando la cifra de la "economía negra", que en su momento se consideró que ascendía al 40 por

ciento del producto bruto. Creemos que ese índice va bajando y que la presión impositiva debe estar distribuida entre mayor cantidad de contribuyentes. Para lograr este fin no sólo se está mejorando la administración sino también los mecanismos con los cuales dicha administración pueda acabar con el perverso sistema de evasión, que obviamente castiga a aquellos que tienen la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Con estos objetivos se hicieron mejoras cualitativas y cuantitativas en la Dirección General Impositiva, dotándola de medios para lograr tales fines. Es evidente que tales cambios requieren un período más largo que el que hasta ahora vamos transitando. De cualquier modo, desde hace años el Congreso viene asumiendo la responsabilidad de dotar a la administración de los instrumentos idóneos para lograr los fines buscados.

Además de lo mencionado, tenemos la percepción de que la comunidad se va concientizando acerca de la necesidad del cumplimiento de la obligación tributaria; se trata de un objetivo que debe ser defendido por todos, y esto se advierte en los principios que rigen las normas de control y de autocontrol, por lo que la misma comunidad debe tomar conciencia de la necesidad de contribuir con los mecanismos recaudatorios.

En todo esto también ha influido favorablemente la voluntad del Estado —lo que ha quedado reflejado en el último presupuesto nacional— de ajustar los gastos a los recursos de que dispone.

En cuanto a las consideraciones en particular, el artículo 1º del proyecto de ley se refiere al impuesto a las ganancias. Si bien este gravamen es uno de los más tradicionales en el país, en los últimos años y por diversas causas todos sabemos que su recaudación fue realmente baja, si bien en el período 1981/1988 su recaudación alcanzaba al 1,6 por ciento del Producto Bruto Interno, en 1991 esta recaudación cayó al 0,78 por ciento. Por supuesto que este porcentaje es inferior a los ingresos por impuesto a las ganancias de otros países, sean éstos desarrollados o no.

Frente a ello la propuesta toma distintos recaudos para incrementar la percepción de este tributo. Y para ello, en el punto primero se modifica el principio de vinculación de la renta con la potestad tributaria del país, adoptándose el criterio jurisdiccional subjetivo, según el cual los contribuyentes deberán tributar sobre su renta mundial. De esta manera, los residentes del país

tributarán sobre la totalidad de sus ganancias, obtenidas tanto en la Argentina como en el exterior, pudiendo computarse como pago a cuenta el monto abonado por gravámenes análogos en el exterior y hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior.

Se consideran residentes las personas que vivan más de seis meses en el país durante el transcurso de un período fiscal. Los no residentes tributarán exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Al cambiar el concepto de fuente de ganancia se pretende primero medir adecuadamente la capacidad contributiva global y también evitar interferencias en la preferencia y decisiones de los inversores. Asimismo, se quiere desalentar la salida encubierta de capitales, máxime frente a la existencia de países que no gravan los intereses de depósitos en entidades financieras realizados por no residentes.

En función de lo recién expresado se deroga en el párrafo segundo del artículo 5º lo referido a las actividades ocasionales, porque ahora quedan gravadas todas las actividades.

Se incorpora en el artículo 19 del proyecto un párrafo mediante el cual se establece que los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina sólo podrán compensarse con ganancias de esa misma condición.

El inciso a) del artículo 2º establece que todas las modificaciones que acabo de apuntar regirán para los ejercicios que cierren con posterioridad al 1º de abril de 1992, para el período fiscal 1992, para las personas físicas y sucesiones indivisas.

En el inciso 8) del artículo 1º se eleva la alícuota del gravamen para sociedades de capital, del 20 al 30 por ciento, para los ejercicios cerrados con posterioridad al 1º de abril de 1992. También se unifica la tasa en el 30 por ciento para beneficiarios del exterior.

Asimismo, se fija el mencionado porcentaje en la alícuota aplicable a las salidas no documentadas, que anteriormente estaban gravadas en un 45 por ciento. Recordemos que esta última situación es de aplicación cuando una erogación carece de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.

Por medio del inciso 11 del artículo 1º se reduce del 10 al 5 por ciento de los beneficios el límite para la deducción de las ganancias

El título VI se ocupa del tratamiento de los quebrantos. Pero como está relacionado con la materia referida a ganancias, lo vamos a tratar a continuación del título I. La gran parte de los quebrantos, que era una de las principales causas que relativizaban la recaudación de este gravamen es el fruto que el Estado debía recibir por este tributo, ya que había una inadecuada técnica de ajuste impositivo por inflación que se utilizó en nuestro país para contemplar el envilecimiento que tenía la moneda como consecuencia del flagelo de la inflación.

También ha habido una serie de maniobras fiscales evasivas, y la idea es que solamente se reconozcan aquellos quebrantos legítimos. Por eso se transforman en créditos fiscales aplicando la tasa del 20 por ciento sobre el importe de los quebrantos actualizados al 31 de marzo de 1991, no compensados al 31 de marzo de 1992. Esto obviamente comprende a los quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991 no compensados al 31 de marzo de 1992.

La citada transformación no será aplicada a los contribuyentes que se encuentren en proceso de quiebra, hayan cancelado su número de CUIT o cesado en su actividad.

El importe del crédito fiscal que van a obtener las empresas deberá ser solicitado a la Dirección General Impositiva, la cual hará una fiscalización, y se transformarán en deuda del Estado. O sea, una deuda que el Estado nacional abonará una vez conformado su importe por la DGI.

En efecto, los sujetos que tengan derecho a la obtención de un crédito fiscal deberán presentar en la Dirección General Impositiva una solicitud de reconocimiento y una declaración jurada en la que consignarán el monto de los quebrantos no compensados y la fecha de origen de los mismos.

Por esos créditos se entregarán bonos de cancelación de deudas en pesos que hemos creado por la ley 23.982 con las aplicaciones previstas en la ley.

Se estima que a partir de ahora, al no poder trasladar las empresas sus pérdidas o quebrantos de un año a otro, el Estado obtendrá un real incremento en la recaudación del impuesto a las ganancias, cuyo monto total se estima en 2.800 o 3.000 millones de pesos. Al respecto, la misma ley prevé un sistema de distribución especial.

En efecto, la nueva recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá de la siguiente manera: 10 por ciento para un fondo nacional que atenderá los problemas del conurbano bonaerense

rense en programas sociales y obras de saneamiento; 2 por ciento para el Fondo de Aportes del Tesoro nacional a las distintas jurisdicciones para atender situaciones de emergencia; 4 por ciento para las jurisdicciones —excluida la provincia de Buenos Aires— en función del índice de necesidades básicas insatisfechas. El 84 por ciento restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias conforme lo establecen los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, de coparticipación de impuestos.

Obviamente, este régimen específico de coparticipación del impuesto a las ganancias deberá contar con la adhesión de las pertinentes Legislaturas provinciales mediante leyes.

Debe destacarse que la Nación se hace cargo de una deuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares por estos quebrantos —según lo establece el artículo 33—, los cuales, en caso contrario, disminuirían la recaudación futura y por ende la coparticipación para las provincias. De esta manera aumenta la masa coparticipable recibiendo las provincias en consecuencia por esta vía una suma adicional.

Pasaremos a analizar ahora el título II, que se refiere al impuesto sobre los activos. Esto lo contempla el artículo 5º al decir que para el primer ejercicio comercial o período fiscal que cierre a partir de la publicación de la presente ley regirán las siguientes modificaciones a los impuestos sobre los activos: 1) Se incorporan como activo gravado los bienes situados con carácter permanente en el exterior. En este sentido, se prevén normas que contemplen la metodología de valuación y la adecuación del mínimo exento y el cómputo en este impuesto, como pago a cuenta, de los gravámenes análogos pagados en el exterior hasta el incremento de la obligación fiscal, originados por la incorporación de dichos bienes en el exterior.

Todo esto es compatible, como dijimos, con el concepto de renta mundial que se propone para el impuesto a las ganancias. El punto 2 de este artículo incorpora una norma que permite a los acreedores del Estado evitar la imposición sobre los créditos por los que se mantengan juicios contra el Estado —deudor—, en los cuales no se haya producido transacción judicial ni extrajudicial.

En el artículo 3º, punto 5 se tiende a evitar la duplicación en la tributación en caso de cobro de dividendos y utilidades por participaciones en el capital de otros sujetos pasivos que correspondan a ejercicios comerciales de la sociedad

emisora que hayan cerrado durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el gravamen.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

**Sr. Romero.** — Por último se ratifica el retorno a la alícuota del 1 por ciento, elevándose a diez años la vigencia de este impuesto.

El título III se denomina "Exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior". Podrá exteriorizarse la tenencia de moneda extranjera en el país mientras se trate de importes iguales o inferiores al equivalente a quinientos mil dólares. Esto está contemplado en el artículo 6º. Como lo señalé al referirme a la parte general, se pretende como objetivo la repatriación paulatina de fondos y la normalización de la situación fiscal, ya sea en moneda extranjera, divisas o demás bienes en el exterior: inmuebles, aeronaves, títulos, créditos, etcétera. Se refiere a quienes posean bienes de este tipo y los hayan sustraído del alcance del fisco nacional durante las distintas etapas vividas por nuestra economía. Se intenta posibilitar de esta forma el ingreso al país de fondos de una manera genuina, evitando o tratando de impedir el artificio del autopréstamo, fondos que en su momento fueron girados al exterior, privando a nuestra economía de los mismos para su crecimiento y al fisco de la percepción del impuesto que sobre ellos correspondía.

Para que esto suceda la ley establece una serie de condiciones que incentivan la repatriación paulatina de estos fondos; y es de esperar que constituya el motor de una política de inversión y fomento del mercado de capitales.

Para lograr este objetivo se establece que quien traiga divisas o depósitos del exterior deberá mantenerlos depositados durante 180 días corridos a partir de la fecha de transferencia en una cuenta del Banco de la Nación Argentina o de otras entidades financieras que adhieran expresamente a la aplicación de los fondos depositados o al régimen que se establecerá, para que dichos fondos sean aplicados a préstamos a través de líneas especiales de créditos al sector productivo, de acuerdo con la legislación que el banco citado elaborará al respecto. Se han fijado alícuotas de distinto tipo para conseguir este fin, que no tienen un carácter puramente recaudatorio sino que buscan en forma razonable alentar la normalización.

El período que la ley establece es de cuatro años a partir de su sanción; es decir, que en los cuatro años siguientes se podrán repatriar estos fondos pagando una alícuota durante el primer año del 1 por ciento; durante el segundo, del 1,5 por ciento; en el tercero, del 2 por ciento y en el cuarto, del 3 por ciento de costo para lograr dicha normalización.

El artículo 10 dispone el pago de una alícuota adicional, teniendo en cuenta el hecho de que al extenderse la posibilidad de la normalización a cuatro años, en dicho lapso ya regirá el criterio de renta mundial para el impuesto a las ganancias y la gravabilidad de los bienes en el exterior sobre los activos, generándose en consecuencia las obligaciones tributarias desde la sanción de este proyecto de ley.

También se establece que para el caso de personas físicas o sucesiones indivisas, la normalización será válida aun cuando los bienes exteriorizados o que se pretenda exteriorizar se encuentren anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en primer grado.

En el párrafo tercero del artículo 11 se establece también la posibilidad de que se normalice la situación de aquellos que posean en el país moneda extranjera y que puedan demostrar que contaban con ella con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley cuando, como dice en el apartado a), fuera utilizada en la adquisición de cosas inmuebles o muebles no fungibles.

Por último, esta normalización de que hablamos producirá efectos respecto de los tributos que recauda la Dirección General Impositiva, inclusive con relación al ahorro obligatorio establecido por las leyes 23.256 y 23.549.

Asimismo, por esta norma se excluyen a los sujetos que efectúen la normalización e ingresen el impuesto especial, de la obligación —entre otros aspectos— de declarar la fecha de compra de las tenencias y bienes que se exteriorizan y quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional, incluida la ley penal tributaria 23.771, a los efectos de que quienes, por ejemplo, hayan certificado o auditado un balance no se vean sujetos a las penas que la ley establece si es que solamente exceptuamos al titular o titulares del bien.

El título IV se refiere al impuesto al valor agregado. El artículo 28 establece las disposiciones que regirán para los hechos imponible que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta

ley. Se gravan los apart-hoteles, que antes no lo estaban, cuando la hotelería y otros servicios estaban gravados. También se establece una excepción para los servicios de sepelios y los prestados por establecimientos geriátricos, siempre y cuando los prestadores sean obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales.

El artículo 29 se refiere al procedimiento tributario, establecido por la ley 11.683. A través de esta modificación se pretende lograr un mejor y más efectivo accionar de la Dirección General Impositiva. Para ello se fija, entre otros aspectos, la necesidad de que en el procedimiento de determinación de oficio establecido en el artículo 25, inciso d), se tomen debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate. Ello representa un avance muy importante en la formulación de esta presunción y en el perfeccionamiento de la norma, satisfaciéndose además los requerimientos que la Justicia ha hecho a través de distintos fallos. Si se tiene en cuenta la estacionalidad o el ciclo económico, se afianza el principio de justicia y equidad en la evaluación y determinación del monto a tributar.

Asimismo, el artículo 29 establece que en el caso de comprobarse operaciones marginales durante el período fiscal que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararla con las registradas o declaradas, aplicado sobre las ventas de los últimos doce meses, operará como presunción, salvo prueba en contrario en el sentido de que existan diferencias de ventas para los meses involucrados. Esto faculta para que después de una inspección esta presunción se pueda extender en un período mayor al mes verificado. Así, facilitamos la labor del fisco ya que al comprobar que existe un período en el que hay operaciones marginales, se presume que las mismas se extienden hacia atrás por un período de doce meses.

Otra manera de perfeccionar este proyecto radica en una presunción referida a la determinación de oficio respecto de la obligatoriedad de llevar registraciones con comprobantes de todas las personas o entidades que realizan actividad retributiva que no sea en relación de dependencia, y también en las facultades otorgadas a la Dirección General Impositiva respecto de aquellos supuestos de contribuyentes, responsables o terceros que efectúen registraciones contables mediante el sistema de computación de datos. Esta reforma perfecciona el sistema de verificación y fiscalización de esos mecanismos de registración contable, sin descuidar aspectos cen-

triales. Por ello se limita la aplicación de esta norma sólo en relación con los sujetos que se encuentran bajo verificación.

Por último, se prevé la acción sancionatoria, tal vez la más dura y necesaria que se aplica aquí, que es la clausura, la que se aplica en los casos en que por dos veces no se emita factura o documento equivalente de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios. La sola verificación de este incumplimiento hará pasible al sujeto de la correspondiente clausura.

El título VII establece otras disposiciones, entre las cuales se encuentra aquella por la cual se faculta al Poder Ejecutivo para disminuir las respectivas alícuotas o dejar sin efecto total o parcialmente el impuesto de sellos. Este tributo, en muchos casos, es de difícil aplicación práctica y, muchas veces, por su complejidad jurídica, ha dificultado la aplicación en los actos que se pretenden gravar. También induce a una inadecuada instrumentación de las operaciones, lo cual conlleva a una inseguridad jurídica. Muchas veces se ha llegado a la instrumentación ineficiente de operaciones para tratar de eludir o evitar el pago de este impuesto.

También se faculta al Poder Ejecutivo para disminuir las respectivas alícuotas o dejar sin efecto, total o parcialmente, el impuesto sobre los débitos y otras operaciones. Obviamente, este tributo interfiere en el normal desenvolvimiento de la actividad económica y financiera. Cabe mencionar que es altamente complejo, fruto de las sucesivas modificaciones a las que se vio sometido en virtud de las elusiones o evasiones que la realidad comercial o financiera imponían en el gravamen.

También se faculta al Poder Ejecutivo para disminuir las alícuotas de las tasas judiciales y por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

En el artículo 41 se establece también una facilidad para quienes tienen que regularizar las situaciones del personal empleado, a través de lo que se conoce como blanqueo laboral, sancionado a través de la Ley de Empleo. Para asegurar el éxito de este blanqueo laboral es también necesario que cuando alguien lo produzca, esa conducta no reciba una sanción desde el punto de vista de la Dirección General Impositiva. La información referida a los datos del blanqueo laboral no podrá ser utilizada para fundar sanciones, ya sea de los ámbitos civil, comercial o penal, e incluso no se podrá imputar a quienes hagan el blanqueo laboral bajo el régimen de la ley penal tributaria.

Señor presidente: creemos que estas propuestas resultarán eficaces, no sólo en la integración del sistema tributario sino también en cuanto a la práctica jurídica cotidiana, restableciendo el equilibrio que se había perdido en favor del evasor contumaz, consuetudinario.

Creemos que la reforma propuesta culmina un ciclo y abre la expectativa de una creciente estabilidad en materia tributaria, tantas veces reclamada por el oficialismo y por la oposición. Es decir que dicha estabilidad es deseada por todos. Entonces, no sólo habrá estabilidad en lo que a normas se refiere sino también mayor recaudación y mejor administración de los tributos.

Por lo expuesto, señor presidente, propongo y solicito a la Cámara la pertinente aprobación en particular, tal cual lo expresa el dictamen correspondiente.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor miembro informante de la primera minoría, senador Trilla.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: hemos escuchado con mucho detenimiento la exposición y las explicaciones vertidas por el señor miembro informante del bloque de la mayoría acerca de este proyecto de ley. Ha expresado minuciosamente los detalles, particularidades y perfiles de los grandes temas incorporados en esta reforma. De tal manera que procederemos a tratar los asuntos desde un punto de vista global en lo que se refiere a las modificaciones sustanciales de algunos aspectos relacionados con la legislación impositiva.

Estamos en presencia de una nueva reforma tributaria. Esto es lo único en que no coincido con el miembro informante de la mayoría: creo que se proyecta otra. Esto fue manifestado por el propio ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos y por el subsecretario de Recursos Tributarios. Se va a insistir nuevamente en la creación del impuesto denominado comúnmente IEPE. También se vuelve a considerar la reforma de la ley de ganancias para gravar las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas.

Tengo mi particular punto de vista sobre estos dos conceptos fundamentales para la transformación que el Poder Ejecutivo desea efectuar.

Creo que si el tema se enmarca dentro de una nueva situación, teniendo en cuenta las dificultades con las cuales se tropezó, se entienden con mayor profundidad los beneficios técnicos que en materia impositiva aportaría el IEPE. Estimo que si se insiste con la claridad suficiente en la exposición de los conceptos necesarios para comprender el tema, es factible que pueda conside-

rarse nuevamente una situación de esta naturaleza, capaz de transformar a fondo el régimen impositivo y a su vez de ir eliminando los impuestos a los sectores de ingresos fijos.

En mi caso, me he opuesto permanentemente a la reforma tributaria, no solamente en aquellos aspectos en que hemos tenido que conciliar posiciones con el actual gobierno sino también en aquellos puntos en los que luego explicitamos que debían ser aprobados.

Según mi criterio, lo que importa en primera instancia para considerar en el futuro una reforma a fondo es el conocimiento exacto de la situación impositiva de la República a través de una buena administración de los impuestos.

Creo que hay en este momento algún pincelazo de una mejor administración. Pero los impuestos requieren una larga aplicación a través del tiempo para poder ser incorporados a la mentalidad, a la inteligencia y a la costumbre de ser pagados. Esto es así porque cuando el contribuyente comienza a comprender bien cómo debe liquidar el impuesto, se produce un nuevo cambio y debe recurrir otra vez a solicitar consejos que le permitan saber cómo va a ser la administración tributaria.

Para una transformación fiscal es necesario presentar el paquete impositivo de manera de revertir lo que viene ocurriendo desde hace muchos años con un sistema impositivo regresivo. Esto no es novedad; insisto en que fue sucediendo así a través del tiempo y fueron aumentando paulatinamente los llamados impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, y disminuyéndose paulatinamente los impuestos directos, es decir, a las ganancias y a los activos, los patrimonios o los capitales.

Es cierto, señor, presidente, y quiero dejarlo bien aclarado, que las teorías de los impuestos indirectos y directos, de los impuestos regresivos y progresivos van transformándose en razón de la nueva dinámica económica — no argentina sino mundial — donde ya hay una idea clara que se expresa en palabras simples: "Recaudemos como podamos los impuestos" — aún para los conceptos intelectuales — más progresivos — y definamos con claridad y enfatizamos cuáles son los gastos del presupuesto que tienden a aumentar la calidad de vida de los sectores más necesitados. Es decir, se trata de la necesidad de imprimir en todo proyecto económico un concepto progresista.

Esta transformación, o mejor dicho estas modificaciones que estamos tratando ahora, han atravesado en el curso de su tratamiento en

Diputados una serie de circunstancias que las convierten en una reforma más.

También es cierto que algunos elementos que se destacan como focos encendidos se ponen de manifiesto con toda claridad y que son fundamentalmente aquellos que se refieren a la renta mundial, que por primera vez se introduce en el lenguaje impositivo de la República, al nuevo fuero judicial, al que se refería recién el senador Romero, donde se establecen juicios administrativos por delegación del director de la Dirección General Impositiva; a la alteración del régimen de coparticipación federal avasallado en la redacción de este proyecto, y también además al hecho de convertir un eventual crédito a través de los quebrantos solamente liquidables, si existen utilidades, en un crédito fiscal definitivo. A mi criterio — y luego lo aclararemos con mayor profundidad — se trata realmente de un regalo que se les hace a las empresas.

Por eso, señor presidente, a estos cuatro puntos, desde mi óptica, los colocamos — como en el fútbol — la tarjeta roja.

A los títulos también discriminados y explicitados, como dije con anterioridad, por el señor senador Romero, los voy a tratar solamente desde el enfoque de las observaciones a que nos referíamos antes. Desde ya, al título I lo vamos a votar favorablemente. Por lo menos, éste es el consejo del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, plasmado en el dictamen en minoría.

En el título I se producen fundamentalmente modificaciones al impuesto a las ganancias en dos aspectos principales: en la concepción de la renta mundial y al darle mayor énfasis a dicho impuesto.

El impuesto a las ganancias fue siempre un impuesto considerado peyorativamente por la poca recaudación, ya sea por evasión o bien por elusión, que son los dos caminos por el que el contribuyente no paga estrictamente lo que corresponde.

Para la evasión hay una penalidad. La elusión se da cuando el contribuyente adopta — y con razón — la interpretación más favorable para su propia liquidación impositiva. Y esto se debe, casualmente, a la mala administración de los impuestos, porque las propias leyes impositivas no están redactadas con precisión ni son capaces de evitar interpretaciones distintas, debido a las cuales se filtran importantísimas recaudaciones impositivas como consecuencia de las elusiones.

El de renta mundial es un concepto nuevo en nuestra legislación, y muy común en los países

centrales. Pero está escasamente tratado en los países periféricos. Esto les interesa a los países que exportan capitales, fundamentalmente a través de las multinacionales, y no les preocupa a los que no exportan capitales para la producción. En nuestro país alcanzan los dedos de una mano para determinar las multinacionales que tienen inversiones en el exterior.

Nosotros no nos oponemos a este tratamiento — por eso dije que vamos a votar afirmativamente en este punto —, porque desde luego no podemos dar lugar a las interpretaciones erróneas en el sentido de que no se graven las ganancias por las inversiones de argentinos que llevaron capitales al exterior. Pero sucede que es de ilusos creer que se va poder cobrar el impuesto a las ganancias sobre ese tipo de capitales que hubieron para escapar de rigores fiscales o por otros motivos.

Se pone énfasis entonces en un impuesto que en el proyecto original del Poder Ejecutivo tendía a desaparecer. Pero en razón de la eliminación del IEPE por los señores diputados — prácticamente de todas las bancadas — y de la eliminación de otras disposiciones que determinaron un retroceso en las posibilidades de recaudación, se incrementa del 20 al 30 por ciento la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas. En consecuencia, este impuesto, que había sido depreciado en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, puede resultar ahora uno de los impuestos fundamentales. Pero repito que seguramente perderá trascendencia si el Poder Ejecutivo insiste en el IEPE o en el impuesto a la distribución de utilidades.

El título II, que va del artículo 3º al 5º, trata del impuesto a los activos. También aquí, señor presidente, vamos a votar a favor pero igualmente tenemos algunas observaciones que formular. Por ejemplo, el artículo 3º establece un impuesto sobre activos resultantes al cierre de diez ejercicios anuales iniciados a partir del 1º de enero de 1990. Pero en verdad se tendría que haber establecido una prórroga hasta el 31 de diciembre de 1995, para que haya coincidencia con la vigencia del impuesto a las ganancias. Entiendo que esto se les ha escapado a quienes redactaron el proyecto.

En este artículo hay varias disposiciones que aplican el concepto de renta mundial, que fue introducido para el impuesto a las ganancias, fundamentalmente en lo que se refiere a la valuación de los bienes. En esta dirección, el inciso 3, dice: "Sustitúyese en el capítulo II el subtítulo 'Valuación de bienes' por 'Valuación de bienes situados en el país'". El problema, señor

presidente, es que no hay ningún tipo de indicación articulada en este proyecto que permita determinar la valuación de los bienes en el exterior para aplicar el concepto de renta mundial. Esto me hace pensar que ni siquiera los propios autores de este proyecto creen que las recaudaciones pueden hacerse efectivas y que todos los capitales del exterior van a ser declarados.

El título III concierne a la declaración de bienes y supone un blanqueo. Se titula "Exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior". Acá nosotros vamos a votar en contra. No porque seamos puritanos o porque no queramos encontrar alguna manera para permitir una repatriación cómoda de bienes del exterior. Tampoco vamos a votar en contra porque no estemos de acuerdo con los blanqueos; durante el gobierno anterior hicimos un ajuste para posibilitar que se regularizaran las situaciones de contribuyentes que estaban en infracción.

Vamos a votar en contra porque se aplica un mecanismo que a nuestro juicio no es equitativo. En efecto, a los contribuyentes que quieran regularizar patrimonios en el exterior o depósitos en moneda extranjera realizados en el país, hasta la suma de 500 mil dólares, se les libera de toda acción en lo civil, comercial, penal, penal tributario, administrativo y profesional, que les pudieran corresponder por transgresiones a normas fiscales. Entonces, prácticamente quedan liberados de pagar todos los impuestos que se dejaron de ingresar en su oportunidad y que debieron haber sido abonados en la instancia pertinente.

Hay un caso en que se admite el blanqueo para bienes radicados en el país: los depósitos en moneda extranjera realizados en bancos de la Argentina. Como dije, el monto que se blanquea es equivalente a 500 mil dólares.

Nuestro criterio es que el blanqueo debe hacerse de una manera total, por lo que habría que modificar determinadas normativas de este proyecto. Los blanqueos fueron necesarios cada vez que hubo continuados períodos de importante inflación y las llamadas hiperinflaciones; situaciones que hacían diluir los montos de los tributos. Entonces, era necesario superar ese tipo de situaciones.

Ahora bien, no les podemos dar mayor autenticidad a quienes han llevado sus capitales al exterior, que ahora podrían blanquear hasta los 500 mil dólares, frente a los argentinos, que si bien han evadido impuestos tienen bienes materiales radicados en la Argentina; los que no po-

drían ser blanqueados conforme a la normativa de este proyecto, con excepción —como dije— de los depósitos en moneda extranjera.

Si aprobamos este proyecto de ley y se produce una inspección impositiva a esos malos contribuyentes que evadieron impuestos por bienes radicados en la Argentina, ellos correrán con todos los riesgos de haber tergiversado las disposiciones impositivas, resultando punibles según lo dispuesto por la ley penal tributaria.

Estas son las causas por las cuales creemos que no hay una equidad total para con los contribuyentes con bienes radicados en el país y al votar en contra queremos poner una suerte de "tarjeta roja" a esa situación.

Estamos de acuerdo con que hay que considerar este tipo de situaciones, pero hagámoslo con todos los argentinos, no sólo con los que tienen moneda extranjera en el exterior o en el país. El que tiene un depósito a plazo fijo en un banco argentino en moneda nacional, de acuerdo con este proyecto de ley, no lo puede blanquear si oportunamente lo ocultó.

No obstante lo que acabo de mencionar, como querríamos colaborar con una mejor redacción y con una clarificación de conceptos dentro del texto legal —le pido al señor senador presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que por favor me escuche—, cuando en el artículo 14 se hace referencia a un artículo anterior, el 7º, debe decirse artículo 8º. Esto es muy importante a efectos de evitar lo que decíamos, o sea, que al no haber una clara redacción en materia de legislación impositiva siempre se encuentra un camino por el cual se hace perder pesos al Tesoro de la Nación.

En el artículo 16, donde dice que quedarán liberados de distintos impuestos, se han olvidado del impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso productivo, que tiene vigencia desde diciembre de 1991, y que debe ser incluido porque hay posibilidades de justificar 500 mil dólares hasta cuatro años en el futuro con un pago minúsculo que va del 1 por ciento en el primer año hasta el 3 por ciento.

El título IV vamos a votarlo afirmativamente. En él quedan incorporadas algunas actividades que antes no estaban gravadas, como los servicios de apart hotel, y se exigen otras, mientras que otros conceptos se precisan con mayor detalle, como es el caso de los servicios funerarios y de los geriátricos.

En el inciso 7 del artículo 27 observamos la ausencia de un concepto que si bien no tiene gran implicancia en cuanto a la recaudación, si la

tiene con relación a una situación de equidad; esto salvo que se entienda que la cuestión queda comprendida en la concepción global. Me refiero a los servicios prestados por bolsas de comercio, agentes de bolsa, agentes de mercado abierto y cajas de valores. Aquí debe considerarse incluido el mercado de valores. No sé si la situación se salvará al momento de la reglamentación. De no ser así, creo que deberían darse los argumentos pertinentes para que no se discrimine contra la entidad.

El título V se refiere al procedimiento tributario referido a la ley 11.683. En todas las reformas tributarias que ha habido y que seguramente va a haber, o cuando la Secretaría de Hacienda proyecta una modificación de carácter impositivo, ya sea creando un nuevo impuesto o modificando los existentes, se le ocurre reformar siempre la ley 11.683. Esto es así a tal extremo que en la reunión que tuvimos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el secretario de Recursos Tributarios le manifesté: "Señor secretario: nos estamos manejando con la ley 11.683 según el texto ordenado de 1976. Desde entonces hasta ahora ha habido alrededor de diez reformas parciales de mayor o menor profundidad, pero siempre se le fueron dando —sin mayor éxito— más atribuciones a la Dirección General Impositiva. Dada la situación actual sería necesario un nuevo texto ordenado". Me respondió que afortunadamente estaban trabajando en el tema porque habían observado las dificultades que existen para manejarse entre tanta maraña de leyes modificadas y que se pretendía llegar a un concepto único. Lo que importa es que paulatinamente se han ido incrementando las atribuciones de la Dirección General Impositiva para poder tener —según dicen— mayores posibilidades de recaudación y limitar la factibilidad de evasión de los contribuyentes.

Una de las últimas reformas fue precisamente la contenida en lo que se dio en llamar la ley penal tributaria, donde no estuvimos de acuerdo en varios puntos.

—Sugiera la campanilla de orden.

Sr. Trilla. — Entre ellos, no compartimos el relativo a la clausura de locales donde hubiese una infracción impositiva porque pensábamos que se rompía el sentido constitucional de la defensa en juicio. Pero ahora con la modificación que tratamos se va mucho más lejos. Se crea prácticamente un nuevo fuero no judicial y una distinta designación de jueces, también con una diferente calidad profesional. Sencillamente,

por delegación en el director general de la Dirección General Impositiva se designan jueces a empleados que no necesitan ser abogados ni contadores. A partir de allí tienen la capacidad de aplicar directamente sanciones cuando interpreten que el contribuyente inspeccionado ha cometido algún error de fondo en sus liquidaciones o en la administración de sus negocios en lo que se refiere a las leyes impositivas.

No estamos absolutamente de acuerdo con esa ley y aquí es necesario reconocer que el avance paulatino que se viene haciendo no es de ahora sino también del pasado en la vida económica de la República; siempre se pensó así.

Debemos recordar que quienes propusieron el proyecto —es decir, no otro que el ministro de Economía a través de la Secretaría de Hacienda— dijeron: "Señores legisladores, apruébenos estas nuevas disposiciones porque así vamos a recaudar más".

¿Qué sucedió, en definitiva cuando se aprobó la ley penal tributaria? ¿Qué se dijo? Que no se iba a proyectar ninguna reforma más y que si nosotros aprobábamos la ley no sería necesario el incremento del IVA del 16 al 18 por ciento por ciento por cuanto el Poder Ejecutivo tenía la atribución brindada por el Congreso para poder aumentar dos puntos. No obstante, sucedieron las dos cosas: se aumentó la alícuota del IVA del 16 al 18 por ciento y se proyectó otra modificación como la que tratamos, que es de naturaleza muy importante, porque al margen de toda la legislación existente se crearon fueros y atribuciones para quienes no tienen la suficiente ilustración de derecho como para que puedan realizar una tarea eficiente, más allá de sus condiciones morales y de honestidad que de ninguna manera pongo en duda.

Sr. Presidente (Brasero). — Les ruego a los señores senadores que están conversando que lo hagan en voz baja o que se retiren a hacerlo al Salón de los Pasos Perdidos, porque la Presidencia no puede escuchar al orador.

Sr. Trilla. — Gracias señor presidente. A veces me cuesta seguir con la idea debido a la situación a la que usted acaba de hacer mención.

Dentro de este título, quiero referirme particularmente al punto 3. del artículo 29, que es otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta puesto que se podría llegar a cometer un delito contra la propiedad intelectual. Me refiero al caso del inspector de la Dirección General Impositiva que tiene facultades para hacerse cargo, en forma directa y por imperio de la norma, de los disquetes del software en los

cuales está incorporada toda la materia intelectual que atañe a la información, a la contabilidad, a la gestión de los negocios y a las posibilidades de acceder a los elementos que le permita obtener una mayor ventaja competitiva frente a sus adversarios. Estas son funciones de un juez y no de alguien que tiene como misión inspeccionar, y que no puede tener atribuciones para llevarse un disquete, que contiene programas de propiedad de quien los utiliza y que para obtenerlos ha hecho un esfuerzo profesional y pecuniario.

Me pregunto qué seguridad tenemos si no son los jueces los que llevan adelante estos procedimientos, sin entrar a cuestionar, desde luego, la honorabilidad de quien se lleva el disquete del software. Y no solamente puede venderse el sistema registrado en ese disquete sino también los secretos lógicos que todo empresario debe guardar ante sus competidores.

Estamos ante un tema serio que no puede ser abordado superficialmente. Es una cuestión que motiva gran preocupación profesional. Tanto es así que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se encuentra abocado a un análisis profundo del tema; ha realizado mesas redondas, en las que hemos tenido participación.

Parecería que esto configurara un avasallamiento del manejo de los asuntos del contribuyente y a la propiedad privada. Esto independientemente de que si se le detectan fallas en sus liquidaciones impositivas se le cobre con todas las cargas posibles establecidas por ley...

Sr. Romero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Trilla. — Existen dos asuntos distintos: uno es el problema de la clausura por un empleado de la DCI, y el otro la recepción por imperio de quien está revisando la contabilidad y sustrae el disquete externamente a las necesidades de la empresa.

Señor presidente: le concedo la interrupción al señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Quiero recordar al señor senador, con respecto a la inquietud que plantea, que el capítulo a que hace mención, de procedimientos tributarios, en el punto 3, último párrafo, establece que esta norma de la verificación o solicitud de los elementos soportes del registro contable por mecanismos inherentes a la informática —que se conoce como software— solamente es aplicable con relación a los sujetos que se encuentran bajo verificación.

Usted, que es conocedor de las normas, sabe que no toda inspección es una verificación. Es decir, que tiene que existir un procedimiento



iniciado en el cual intervenga no sólo el primer inspector, sino que debe existir una mayor seguridad en el procedimiento.

Tampoco podemos caer en la otra posición, por la cual el misterio de la computadora sea un mecanismo permisible para la elusión o evasión. Entonces, un sujeto que se encuentra bajo verificación, que no es cualquier situación rutinaria, como usted conoce, no puede argumentar la privacidad de sus elementos a fin de no exhibirlos. No se trata, reitero, de cualquier inspección rutinaria que obliga a entregar documentación o tecnología que pueda ser privada. Aquel que está bajo una verificación, obviamente podrá apelar ante la justicia.

En cuanto a la clausura, no es para cualquier caso sino para aquellos en que por dos veces consecutivas alguien no entregara factura o comprobante similar.

Entiendo el rigor y el celo de los profesionales. Pero tenemos que admitir que no sólo la conducta o la indisciplina contributiva es propia de los empresarios sino que también los profesionales —y no quiero generalizar— contribuyeron con los mecanismos elusivos o evasivos.

También nosotros, unos en la elaboración de las leyes y otros en la ciencia de la contabilidad, muchas veces hemos contribuido con las engorrosas normas legislativas o de procedimientos, al establecimiento de un mecanismo dificultoso para quien tiene la voluntad de contribuir.

**Sr. Presidente (Brasero).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Quiero rebobinar el tema para expresar que de ninguna manera dije que no se tenía que revisar en profundidad al contribuyente en todo aquello que sea significativo, para poder saber si hubo evasión o no.

A lo que me referí fue al tema de hacerse cargo directamente de los disquetes de informática para llevarlos a la Dirección General Impositiva. Creo que se debe verificar y profundizar el análisis de los mismos en la propia casa del contribuyente. Pero si por alguna razón hay que trasladarlos, que se haga a través de un juez que diga que es necesario introducirse en el secreto íntimo de un software, ya que ello es importante para el interés general. Esto con referencia a la necesidad imperiosa de que todo el mundo pague lo que corresponde, y que ese disquete vaya para su análisis al juzgado; obviamente con la presencia de la DGI, y de esa manera se cubran todas las inspecciones necesarias. A esto fue a lo que me referí. Por esa razón votaremos en contra del título V.

El título VI se refiere a los quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991. Se trata de un tema en el que no podemos decir que no estamos de acuerdo, ya que en el gobierno anterior, durante el tiempo en el que el doctor Brodersohn era secretario de Hacienda nos propuso, y lo votamos en su momento, que durante algún lapso se calculará una deducción del 50 por ciento y en otro momento se suspenderá totalmente.

Dijo en su oportunidad el senador Romero que el problema de los quebrantos acumulados había significado fundamentalmente el deterioro del impuesto a las ganancias y que por cierto había muy pocos contribuyentes que pagaban —principalmente los grandes contribuyentes— como consecuencia de liquidaciones profesionalmente bien llevadas, con todos los recaudos técnicos del problema; acumularon quebrantos enormes y ahora van a ser beneficiados en forma directa.

No decimos que no a la forma como está planteado este tema, pero proponemos reformas que permitan mayor concreción, definición y circunscripción a la realidad. ¿Por qué razón? Porque este proyecto permite considerar la acumulación de los quebrantos como un crédito fiscal, y peor aún una deuda cualquiera del Estado. Entonces se dice: hemos calculado —no sé por qué vehículo de información, pero no tengo ninguna razón para dudar— que la sumatoria de los quebrantos acumulados por cada una de las empresas según la Dirección General Impositiva está alrededor de los 20 mil millones de dólares. Quiere decir, que si se tienen que ir cancelando con la nueva ganancia, evidentemente no existirá ese ingreso determinado. Y las necesidades imperiosas tributarias son importantísimas.

Además, el impuesto a las ganancias es uno de los coparticipables y hace años que produce un bajo rendimiento.

Entonces, señor presidente, se hace el cálculo; ahora ha sido elevado al 30 por ciento, pero cuando se hizo el proyecto el impuesto a las ganancias referido a las empresas estaba en el 20 por ciento. Y el 20 por ciento de 20 mil millones es de 4 mil millones. Y en lugar de considerarse como cálculo de compensación al tiempo de producirse, se toma directamente como crédito fiscal. Y esto es prácticamente un regalo, señor presidente. Porque, en primer lugar, se requiere que cada una de las empresas vaya diciendo qué utilidad tiene para verificar si realmente debe recurrir a esa acreencia de tipo

impositivo calculada a través de situaciones matemáticamente establecidas. Se hace el cálculo global, se presentan las empresas, se darán los bonos correspondientes de la deuda del Estado, como si fueran aquellos que nosotros en su momento aprobamos. Esta es nuestra propuesta. Claro está que se dice: es un bono que va a valer poco. No sé, porque la gran mayoría va a ir a parar a las grandes empresas, ya que los pequeños contribuyentes han ido liquidando como han podido, con errores o sin ellos, pero sus quebrantos han sido compensados o bien han quebrado y no existen.

Pero los bonos de la deuda del Estado van a ser utilizados, porque son aptos para el manejo de las privatizaciones, para entregarlos a cuenta de precio. Entonces, las grandes empresas, con significativas acreencias fiscales, los van a utilizar para ese negocio.

Tampoco quiero pensar mal porque creo que hay que solucionar las cosas. Además, estoy convencido de que no hay que compensar esos créditos con las nuevas utilidades, para que realmente ingrese el impuesto a las ganancias como corresponde. Pero debe haber un elemento capaz de permitir que se vayan entregando bonos en cada una de las liquidaciones donde el contribuyente pague realmente el porcentaje, pague realmente el impuesto a las ganancias; que en cada ejercicio pague lo que corresponde por ganancias y reciba del Estado bonos por valor equivalente, porque recién ahí se produce un crédito real y fiscal. Esta es la explicación que quiero dar.

Quiero hacer llegar a Secretaría la redacción de los artículos que permiten el manejo de esta otra idea que es para nosotros más equitativa, más justa y menos bondadosa o esplendorosa con relación a cifras de esta naturaleza. Por otra parte, también se evita el uso facilista que en un momento determinado pudiera dársele a aquellos bonos que se utilizarían para la compra de cualquier bien del Estado que se ponga en venta.

Repito que la ley dice que quien quiera acogerse a este tipo de privilegio con relación a los bonos, deberá ser objeto de una inspección que permita saber si realmente merece lo que está exigiendo.

He dicho que son las grandes empresas las que tienen este tipo de crédito. Están perfectamente encuadradas dentro de estas disposiciones legales. Cuentan con la suficiente capacidad de profesionales de la especialidad como para saber cuál es el camino que tienen que

tomar para pagar menos, sin apartarse de las proyecciones rigurosas exigidas por la ley; es lo que se llama elusión.

De tal forma, voy a hacer llegar a la Secretaría las modificaciones que propongo, para que en el momento de tratarse el título VI se lean los artículos sustitutivos de los que figuran en el dictamen.

— Así procede el señor senador.

**Sr. Trilla.** — El título VII consta de diversas disposiciones. Algunas son de importancia, como las referidas a la coparticipación; otras son casi ridículas.

No estamos de acuerdo con los artículos 34 y 35. ¿Cuáles son las razones? Se autoriza lisa y llanamente al Poder Ejecutivo nacional a disminuir o dejar sin efecto impuestos, tarifas y alcótuas que fueron oportunamente establecidos por el Congreso. Es el caso, por ejemplo, del impuesto a los sellos y a los débitos bancarios.

Aclaro que personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de impuestos, porque complican enormemente el panorama fiscal y no tienen un sentido real en la promoción económica.

En el momento de considerarse la modificación del impuesto al valor agregado dijimos que el Poder Ejecutivo podía aumentarlo en dos puntos. Así lo hizo: lo elevó de 16 a 18. No dijimos que podía aumentar el impuesto como quiera. En el artículo 35 se le da una facultad semejante sin decir en qué porcentaje. Disminuir alcótuas puede llegar a significar alcótuas cero en las tasas judiciales y en la del Tribunal Fiscal y se afecta la legalidad.

Vamos a votar a favor de los artículos 36 y 37, no tienen mayor trascendencia.

El artículo 38 contiene una disposición que es inaceptable en una ley de esta naturaleza, que se introduce en el tema de la renta fiscal, modifica aspectos de la coparticipación, enfatiza nuevamente el impuesto a las ganancias, producen situaciones importantísimas como las del blanqueo, que ya hemos explicado.

¿Saben qué dice el artículo 38? Que se exime de impuestos internos, en una tasa del 17 por ciento, la partida 97.06 de la ley respectiva. Veamos entonces qué dice dicha partida:

Por ésta se exime de los impuestos internos a los artículos y artefactos para juegos al aire libre, gimnasia y otros deportes. Pero ocurre que ya están dadas las eximiciones naturales para el Estado y otras entidades que manejan estas cosas relacionadas con los deportes.

Este artículo no pertenece al proyecto, del Poder Ejecutivo. Hubiera sido un error grueso si así fuera; se lo hubiéramos dicho al secretario de Hacienda cuando nos atendió para explicarnos algunas cosas; hubiéramos pedido una explicación directa. ¿Cómo puede ponerse una cosa así?

En ese mismo capítulo de impuestos internos hay una serie de eximiciones vinculadas con la venta de artículos o artefactos para juegos al aire libre, de tipo privado. Esto fue incluido en la Cámara de Diputados; mi deber es advertirlo.

Desde luego que el oficialismo, por razones lógicas, aunque entienda este tema no va a anular lo dispuesto, porque el proyecto en ese caso tendría que volver a la Cámara de Diputados. No obstante, honradamente, quiero dejar sentado que se trata de una anomalía muy importante. Si se produjera una modificación en lo relativo a los impuestos internos y se reajustara convenientemente lo que se exige y lo que no, me parecería bien; pero en este proyecto tan importante...

**Sr. Romero.** — ¿Me permite una interrupción, con la anuencia de la Presidencia?

**Sr. Trilla.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasescó).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: en cuanto a la exención de impuestos internos referida por el señor senador por la Capital, quiero resaltar que la misma inclusión fue efectuada por la Cámara de Diputados, ya que no estaba en el proyecto original.

Respecto de la gratuidad del quebranto, deseo hacer algunas consideraciones para ver si las comparte. Propongo este ejemplo: supongamos que una empresa tiene cien pesos de quebranto. Obviamente, no le van a dar el bono y como no está verificado por la DGI, está sujeto a control. Admitamos que pasa el control y le dan un bono de veinte pesos. Ese bono ingresa al patrimonio de la empresa, o sea que ingresa al activo, y como contrapartida también ingresa en la cuenta de ganancias para el cálculo de las mismas. Entonces debe pagar el 30 por ciento de ese ingreso patrimonial; por lo tanto, va a tributar seis pesos, con lo cual la utilidad que genera la recepción de los bonos —interpretado— estará gravada. Con esto quiero atender la expresión de que el impuesto significa una gratuidad, porque al estar en el activo va a tributar con el tiempo el impuesto a las ganancias.

**Sr. Presidente (Brasescó).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Vamos a votar afirmativamente el artículo 39 del título que estamos considerando.

Ahora tenemos que tratar el artículo 40. Lamento que no esté presente el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires para interesarse por su aprobación o no, aunque desde luego va a ser aprobado.

Sin embargo, por lo menos en mi caso —no sé cuál será la opinión de los senadores de mi bloque por la provincia de Buenos Aires—, debo decir que no estoy de acuerdo con esta norma, no porque no se necesiten mayores fondos para las zonas suburbanas del Gran Buenos Aires, que requieren cosas elementales como agua potable, etcétera, sino porque se produce una modificación importantísima en la ley de coparticipación y no se ha dado la intervención natural que deben tener las provincias, como ha ocurrido en cada oportunidad en que votamos en este recinto la coparticipación y cuando se pretendía introducir alguna modificación tal como, por ejemplo, en el caso de la transferencia de las escuelas.

En las sucesivas reuniones a las que asistieron los representantes de las provincias se introdujeron inclusive modificaciones fundamentales en razón de los intereses lógicos de cada una de las provincias de mantener, por lo menos, sus porcentajes en la ley. Sin embargo, en medio de un proyecto tan importante como éste se modifica lisa y llanamente la ley de coparticipación, y en esto no han tenido intervención los gobernadores de provincia ni sus secretarios de Hacienda. En efecto, se produce una alteración en los porcentajes de la recaudación que por participación primaria y secundaria van recibiendo las provincias.

De acuerdo con un cálculo a priori del secretario de Hacienda, la recaudación por impuesto a las ganancias será incrementada de modo que redondeará el dos por ciento del producto bruto, estimado ahora en 150 mil millones de pesos. Es decir que va a ser un impuesto importante, que generará alrededor de 3.000 millones de pesos. Estos son datos de la Secretaría de Hacienda.

Ahora bien, lisa y llanamente se dice que el 10 por ciento de ese monto va a ir a la provincia de Buenos Aires para ser utilizado en los servicios que correspondan, como el de agua potable. La suma destinada a tales efectos será, pues, de unos 300 millones de pesos.

Sabemos que toda la recaudación irá al fondo de coparticipación en los porcentajes determinados por la ley respectiva. El 2 por ciento, que representa algo así como 60 millones de pesos,

se destina al Ministerio del Interior para integrar el fondo de ayuda a las provincias necesitadas o lo que fuere. Las decisiones políticas que en este ámbito se puedan tomar no tienen por qué motivar nuestro escozor, pero debemos puntualizar este aspecto ya que se trata de fondos sujetos a la discreción del ministro del Interior. Antes tenía el uno por ciento del total de la recaudación, y ahora se suma este dos por ciento del impuesto a las ganancias, con lo cual la cifra va a ser mucho mayor.

Hay un tercer elemento que también modifica la distribución por coparticipación a las provincias. El proyecto establece que el 4 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá entre todas las provincias menos la de Buenos Aires, conforme a un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Pero, ¿quién determina las necesidades básicas insatisfechas? Me está mirando el señor senador por Santa Fe, y yo me pregunto quién determinará las necesidades básicas insatisfechas en el Gran Rosario o en Santa Fe.

El 84 por ciento restante va al fondo global de coparticipación, y se distribuye como hasta ahora.

No sé qué dirán los senadores de las distintas provincias, tan absorbidos por la defensa de los intereses provinciales frente a las dificultades que siempre hubo para determinar los índices correspondientes a cada jurisdicción, y tan celosos por que en la reforma que determinó la transferencia de las escuelas intervinieran todas las provincias; además, consiguieron modificar el porcentaje diferencial que se había querido fijar para la provincia de Buenos Aires. En cierto sentido, no se trataba de un porcentaje mayor para Buenos Aires, porque todas las provincias reciben menos de lo que precisan para cubrir las necesidades básicas insatisfechas.

Por estas razones, voy a proponer el voto contrario a esta disposición.

Estamos frente a un proyecto muy importante, pero no una real reforma. Pronto vendrá creemos, la real y profunda transformación del sistema impositivo argentino para colocarlo en los niveles que tienen los países del llamado Primer Mundo, en el que estamos deseosos de ingresar o ya hemos ingresado. Este nuevo sistema impositivo tendrá que servir, dentro de un programa económico, para dar respaldo a un programa político progresista en el que en definitiva las asignaciones de los gastos beneficien al interés social.

La gran deuda que tiene el país no es la interna ni la externa, ahora afortunadamente en camino de solución. La gran deuda que tiene el país es la social, la que se tiene con grandes sectores de la ciudadanía. Casi la tercera parte de las familias argentinas tienen un ingreso que no les permite cubrir sus necesidades primarias. Esta es la gran deuda de la Argentina, repito.

Todo programa económico debe tener la suficiente valentía para defender la riqueza de la Nación, pero también debe defender la calidad de vida de los argentinos.

**Sr. Presidente (Brasescó).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, Partido Automonista, doctor Romero Feris.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente, señores senadores: antes de comenzar a expresar mi opinión sobre el tema tan trascendente que estamos considerando, debo decir que hace pocos minutos el señor prosecretario parlamentario me informó que ya se había practicado la votación en general de este asunto.

Esto realmente me llamó la atención porque, salvo que haya estado distraído en ese momento, creo que lo que habíamos votado y aprobado era el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley. Para votar en general un asunto, reglamentariamente se tendría que haber preguntado con anterioridad si algún señor senador iba a hacer uso de la palabra, después de ponerlo en consideración.

Por todo ello, quiero preguntar a la Presidencia cuál fue el trámite que se siguió en este caso.

**Sr. Presidente (Brasescó).** — La Presidencia le va a informar, señor senador, leyendo la versión taquigráfica de la parte pertinente, que obra en nuestro poder. Su texto es el siguiente:

**"Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: es a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa. Si dicho tratamiento resultara aprobado y llegado el momento de la votación del proyecto se hiciera muy tarde y no quedaríamos sin quórum, solicito que se pase a un cuarto intermedio para continuar mañana por la mañana.

**Sr. Brasescó.** — Que se vote el pedido de cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Menem).** — En primer término, se va a votar la moción de tratamiento

sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración el pedido de que en el supuesto de que la Cámara se quede sin quórum al momento de la votación, se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las...

**Sr. Brasesco.** — A las 10 de la mañana.

**Sr. Presidente (Menem).** — ...once.

**Sr. Cass.** — Que se empiece a llamar a las diez.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se procederá en consecuencia.

— Luego de una pausa en que se trata un cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley en revisión sobre reforma tributaria.

**Sr. Secretario (Piuizzi).** — (Lee).

— A esta altura se inserta en el Diario de Sesiones el texto del proyecto.

— La versión taquigráfica prosigue así:

**"Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador por Salta. En ese instante comienza su exposición el señor senador por Salta.

Esto es lo que dice la versión taquigráfica, que se encuentra en la Presidencia.

Continúa en uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Pido disculpas por haber molestado al señor presidente para que leyera la versión taquigráfica. Pero estaba totalmente convencido de que no habíamos votado en general. Tanto es así que se estaban haciendo las exposiciones propias de los miembros informantes.

De cualquier modo, quiero que quede expresa constancia de mi desacuerdo con la aprobación en general.

Voy a iniciar mi exposición...

**Sr. Cass.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Romero Feris.** — Cómo no, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cass.** — Señor presidente: hay leyes que no tienen por qué ser escritas. Generalmente, después de que hablan todos los señores senadores se procede a la votación en general. Luego se pasa a la consideración en particular artículo por artículo.

Debo confesar, señor presidente, que tal vez se ha debido a una desatención; pensé que lo que estábamos votando era el tratamiento sobre tablas. Por eso posteriormente me levanté de mi banca. Quizás sea mi culpa.

Pero debo insistir en que la norma que aquí se utiliza es que cuando todos terminan de hablar se procede a la votación en general. Y por eso es precisamente que se habla de la consideración en general. Si no, no sé por qué se tardó tanto tiempo informando por la mayoría... aunque a lo mejor no fue tanto ese tiempo. Se podría haber dicho directamente que se estaba de acuerdo con unos artículos y en desacuerdo con otros.

Es más, los dos señores senadores que hicieron uso de la palabra en primer término se refirieron en sus exposiciones a la metodología y la filosofía del proyecto. Eso es justamente lo que se discute en general. Después es cuando se debate artículo por artículo. Confieso que estoy sorprendido.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: quiero expresar lo mismo que lo manifestado por el señor senador preopinante. Nosotros habíamos tomado la decisión de votar en general con las observaciones hechas. Pero debo decir, en verdad, que está fuera de todo reglamento y consideración normal la metodología empleada, el hecho de que ya se haya votado en general, antes de escuchar a los miembros informantes en mayoría y en minoría.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia quiere recordar a los señores senadores que toda versión taquigráfica se convierte en documento público cuando es aprobada por el Senado. En segundo lugar, desea agregar que si los hechos han ocurrido como lo expresa la versión taquigráfica, queda la vía reglamentaria de la reconsideración de la votación, para lo cual hay en el recinto diecisiete señores senadores y hacen falta los dos tercios.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cass.** — Nosotros no queremos obstaculizar. Tanto es así que hemos dado nuestro apoyo para que hubiera dos tercios de votos y se pudiera tratar el proyecto. Además, si se persigue la reconsideración de la votación, ahora evidentemente no hay número.

Deseo que se busque un mecanismo, y después de que hayamos hablado todos los señores senadores se pase a votar en general y luego en particular.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Deja manifestado la Presidencia que va a tomar razón de lo que se está diciendo, y cuando se termine con las exposiciones el asunto tendrá que ser considerado.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Romero Feris.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: el señor senador por Corrientes ha introducido un elemento nuevo. No quiero que quede flotando en el aire que esto es una confusión. Acá no hubo sorpresa y no dudo de que nuestro bloque, llegado el momento en que tengamos número suficiente para votar, tomará en cuenta el planteo de reconsideración, si corresponde.

Pero no creo que tengamos que sorprendernos de algo que está en claro en la versión taquigráfica, precisamente en un momento en que la Cámara de Diputados la semana pasada fue escenario de una situación absurda. No quiero que por una discusión como ésta se produzca aquí algo parecido.

Pienso que el caso no merece que estemos discutiendo una votación que hicimos entre todos y sin ánimo de que alguien resultara sorprendido. Por eso digo que no debemos confundir distracción con confusión.

El señor senador por Corrientes ha traído el tema y quiero que quede aclarado, para que no se produzca una simetría entre las dos Cámaras, cosa que no corresponde.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Solicito a los señores senadores que se dirijan a la Presidencia.

Tiene la palabra, para iniciar su exposición, el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: el señor senador preopinante no entendió la consulta que hice.

Creo que como senador de la Nación, que representa a una provincia hago uso de un derecho al efectuar una consulta cuando tengo dudas, y sobre todo cuando el prosecretario parlamentario me manifiesta algo que yo desconocía.

De ninguna manera quiero echarle la culpa a nadie. Por el contrario, me hago responsable porque a lo mejor estuve distraído. Pero no tiene derecho el señor senador Romero a formular las imputaciones que me acaba de hacer de que yo no tenía por qué traer este tema. Si me entero de que el proyecto fue votado en general cuando yo creía que eso no había ocurrido no voy a señalar mi discrepancia con esa actitud. Puedo tener culpa y no lo discuto; no eludo responsabilidades, como no las he eludido nunca. Asumo mi responsabilidad pero quiero dejar perfectamente en claro, con la mejor buena voluntad y al solo efecto de aclarar la situación, que lo ocurrido en absoluto empaña esta sesión del Senado de la Nación, como quiere hacer aparecer el senador Romero.

Continúo con mi exposición, señor presidente.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — La Presidencia entendió perfectamente el pedido del señor senador.

**Sr. Sánchez.** — ¿Me permite una interrupción el señor senador?

**Sr. Romero Feris.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Pida la palabra, señor senador.

**Sr. Sánchez.** — El señor senador por Corrientes me ha concedido una interrupción.

Indudablemente todas estas cosas ocurren porque pareciera que nos ha llegado la fatiga en este ya largo trajinar. Estamos nerviosos, nos levantamos, nos vamos... etcétera. Se rinde un homenaje a un hecho trascendente para la vida de la Nación y mientras habla el orador el resto de los senadores charlan, no sé si sobre un partido de fútbol o de qué va a pasar mañana en el mercado. Pareciera que no tiene ninguna importancia un tema como el que acabamos de tratar, referido a las Malvinas, que nos duele. Por supuesto, necesitamos destacar el relieve que este hecho tiene en la vida del país porque ha sido un acontecimiento trascendente. Más allá de que se hable de su oportunidad o no, de las actitudes de tales o cuales personajes, hay que tener presente que fue un hecho que se aplaudió y ante el que

la Nación se puso de pie gritando su emoción hasta las lágrimas.

Señor presidente: debo decir con profundo dolor que iba a hacer uso de la palabra para rendir mi homenaje a este acontecimiento y a quienes protagonizaron el hecho armado, a mis hermanos que pelearon y murieron por mí. Lamentablemente, y sin hacer imputaciones a nadie, debo decir que este tema ha sido tomado con ligereza como consecuencia quizá, de la crisis en la que estamos inmersos.

Ahora surge un malentendido que ha sido perfectamente aclarado. Debe quedar perfectamente establecido que el señor senador por Corrientes ha dicho lo que tenía que decir para clarificar la situación y que aquí las cosas no tienen un sentido distinto al expresado.

Estamos en el más alto foro parlamentario. Cuidémoslo, como lo hemos dicho; cuidemos las instituciones para que mañana no volvamos a llorarlas y a pelear por ellas aun cuando seamos responsables de perderlas por nuestras actitudes.

Seguramente noticias malintencionadas no van a dejar en claro mañana esta situación que se ha planteado aquí y que ya fue clarificada.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Sánchez.**—Hace unos días tuvimos un episodio desgraciado —que ya se aclarará— en la Cámara de Diputados. No puede ser que el Senado se vea arrastrado en igual sentido.

Esto lo digo porque no estamos caminando como debe hacerse en un foro parlamentario de este nivel. Aquí se dictan y se modifican las leyes que regirán la vida de la República. Y esto es así porque en la Cámara de Diputados está la representación del pueblo, y la de las provincias en la de Senadores, para así manejar los negocios de la Nación.

Y ahora resulta que también estamos apurados, señor presidente, porque hay una "picada". En efecto, nos vamos a comer y después nos van a tener que llamar con el timbre para votar, como ha ocurrido muchas veces:

Creo que todas esas cosas deben desterrarse de una buena vez. Quien tenga apetito que se levante y vaya a comer y se terminó; pero no podemos seguir en este tren sin caer en la ligereza o pisar el terreno de la irresponsabilidad.

**Sr. Presidente (Menem).**—Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.**—Señor presidente: antes de fijar la posición del bloque Autonomista, creo oportuno y necesario delimitar algunas cuestiones respecto de este proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

En primer término, conviene recordar que el año pasado, aproximadamente para esta época, con mayor precisión el sábado 16 de febrero, el Senado se reunió para debatir un proyecto de ley tributaria que había sido sancionado horas antes por la otra Cámara. Me opuse a su tratamiento por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque este cuerpo había carecido del tiempo mínimo para realizar un adecuado examen del mismo, y en segundo término, porque los gravámenes que se instituían y acrecentaban no eran los más adecuados para el reordenamiento fiscal ni para el crecimiento y desarrollo de la economía de la Nación, sino simples parches de una propuesta con una mera finalidad recandatoria. Esos impuestos eran, en especial, el que grava los activos de una empresa, que entonces fue duplicado en su tasa y el establecido a los débitos bancarios, que fue cuadruplicado en su alícuota, pasando del 3 al 12 por mil. Muchas veces desde aquel entonces las autoridades nacionales reconocieron los efectos perniciosos de estas gabelas sobre la economía en su conjunto, justificando su aplicación como disposición de emergencia puramente coyuntural para cubrir los déficit del Tesoro nacional.

Ulteriores medidas y nuevos tributos fueron ordenando el sistema fiscal. Y así hemos comprobado que la administración pública ha ido alcanzando la meta de superávit que se fue proponiendo. Según el análisis realizado al finalizar el pasado año en oportunidad de tratar la ley de presupuesto nacional, dichas metas son más que ambiciosas para este ejercicio; lo que no impide, sin embargo, que a diario nos enteremos de que la recaudación supera constantemente las metas previstas, todo lo cual es motivo de lógico reconocimiento para la administración tributaria.

Ahora bien, en aquel debate de febrero de 1991 dije lo siguiente: "No puede haber una seria política fiscal si no se cuenta en tiempo y forma con un presupuesto estudiado, analizado y aprobado por el Congreso. Tampoco puede haberla si previamente a las medidas fiscales el gobierno no tiene un plan definido en términos económicos y con el suficiente respaldo para que en el conjunto de esa política se implementen las que correspondan como parte de un programa global que hoy está ausente de este recinto."

Resulta que en el presente se han dado estas condiciones. Es decir que existe un presupuesto sancionado por el Congreso con metas claramente fijadas, un plan concreto en lo económico —más allá de si compartimos sus términos o no— y una estructura fiscal que, como lo señale, está proveyendo de suficientes fondos al Tesoro con relación a los montos presupuestados.

Paralelamente, en mayo del año pasado se intentó una reforma sustancial que no fue debatida suficientemente y de hecho fue retirada antes de que este Congreso la tratara. En agosto pasado se sancionó un nuevo gravamen: el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico, vulgarmente llamado impuesto a las riquezas, que recreó el derogado impuesto sobre el patrimonio neto. A comienzos de diciembre el Poder Ejecutivo remitió su proyecto anterior sustancialmente modificado en aspectos principales, introduciendo una nueva contribución denominada impuesto al excedente primario de las empresas. Se profundizaban los conceptos del impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas, se derogaba el impuesto a las ganancias, se extendía la base del impuesto a los activos y se instituía el régimen de exteriorización de capitales, se incluían reformas al impuesto al valor agregado, agregándose nuevas facultades a las autoridades y funcionarios de la Dirección General Impositiva, insistiéndose en acordar la potestad de clausurar un comercio o establecimiento ante la comprobación de infracciones formales, como son la no emisión de factura o la emisión de documentos no habituales en su lugar en dos ocasiones, facultades que habían sido rechazadas dos veces en el pasado por la Cámara de Diputados, por cuanto otorgan facultades al Poder Ejecutivo especialmente vedadas por el artículo 95 de la Constitución Nacional y porque se violaría el derecho a la defensa, pilar de nuestra Carta Magna en su artículo 18.

Sucedía que al hallarse demorada la sanción de la reforma propuesta, al advertirse que las resistencias que generaban en la sociedad eran muy sólidas, de modo imprevisto y sin justificación pública alguna, el Poder Ejecutivo eleva la alícuota del Impuesto al Valor Agregado del 16% al 18%, incrementando la presión impositiva en un 12,5% que van a pagar los consumidores finales, que como bien sabemos no son otros que los integrantes de los sectores de menores ingresos.

Como dijimos, si había presupuesto aprobado y recaudación superior a la prevista, entonces la pregunta obligada es: ¿qué razones lleva a este aumento de la carga fiscal sobre los consumos?

Ahora, ante la inminencia del fracaso de la primera propuesta en su tratamiento parlamentario, aquella es sustituida como por arte de magia, a través de sucesivos dictámenes por otra diametralmente opuesta, donde se refuerza considerablemente un impuesto que iba a ser derogado, es decir, el impuesto a las ganancias y se excluyen los impuestos al excedente primario de las empresas y a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas.

Señor presidente: cuando se plantea una reforma impositiva los presupuestos a considerar son: o se lo hace para modificar la distribución de la presión fiscal, partiendo de principios de justicia tributaria, o bien se procura perfeccionar los mecanismos que deben hacer efectiva dicha justicia, adoptando los recaudos para que los alcanzados por los gravámenes sean exactamente aquellos que la legislación fijó, evitando las distorsiones que generan los cuadros de evasión o elusión que inevitablemente se producen por errores de técnica legislativa, que como veremos también ocurre en este proyecto.

Pero en este caso, lo que descuello es el aumento de la carga, que se traduce por una parte en el retorno de la tasa del impuesto a las ganancias al 30%, siendo que esta propia administración la había reducido al principio de su gestión del 33% al 20%. La eliminación, por otro lado, de los quebrantos fiscales como deducción —a lo que me referiré en detalle al examinar los diferentes capítulos— acrecentará también de modo importante la recaudación por este impuesto, habiendo estimado la Secretaría de Ingresos Públicos tal incremento en 0,65 puntos del PBI en lo que resta del corriente año, es decir, en 1.000 millones de dólares, lo que significarían 110,3 millones más al mes, de los cuales unos 50 millones ingresarán al Tesoro nacional.

La ampliación de la base imponible, tanto en este tributo como en el impuesto a los activos, que pese a su notable falta de equidad y a estar considerado como inconveniente por el propio ministro de Economía se lo prorroga por 7 años más, de los réditos obtenidos de fuente extranjera y de los patrimonios habidos en el exterior, respectivamente, contribuyen al mismo fin recaudatorio, aun cuando son aspectos que debieron conciliarse con las legislaciones tributarias de aquellos países con que se firmaron convenios de reciprocidad fiscal.

Pero, volvemos al punto planteado: ¿cuál es el destino a asignar al producido adicional que proporcionarán estos aumentos, incluyendo el recargo del IVA antes mencionado, en lo que hace

al Presupuesto Nacional, toda vez que ni el mensaje 981 del 23 de mayo ni el 2.540 se refirieron a ello?

En su momento me explayaré sobre la distribución de la recaudación a que alude el artículo 40 del proyecto. Pero es por todos sabido que tal alteración en las normas de coparticipación federal fue incorporada por la Cámara de Diputados primero, sobre el futuro producido del impuesto al excedente primario de las empresas, el famoso IEPE, que no alcanzó a nacer, razón por la cual fue trasplantado a este nuevo aumento que reeditará el impuesto a las ganancias.

La múltiple propuesta que examinamos incluye, como la de mayo anterior, un capítulo destinado a la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior, por el cual se propicia el reingreso al circuito económico legal de aquellos capitales que se refugiaron en el exterior en los últimos siete años, desalentados por inseguridades jurídicas en nuestro país en un clima de descontrol de las variables económicas, que desembocaron en el proceso hiperinflacionario.

Este tema fue siempre motivo de especial preocupación para mí, y en tal sentido propicié en julio del 89 —pocos días antes de la asunción del actual gobierno— un proyecto en tal sentido. A través de esa propuesta se procuraba una efectiva repatriación de capitales, justificando su reinserción en el proceso económico mediante la inversión en bienes de capital de producción nacional que tendieran a ampliar las capacidades productivas de los sectores de la industria, el comercio, el campo y los servicios.

Como contrapartida de estas facilidades, los beneficiarios de la ley debían repatriar títulos de la deuda externa en relación con esos capitales, lográndose de este modo un triple efecto: regreso de los capitales, que se incorporaban al proceso de producción, incremento de la actividad económica por la demanda que agregaban dichos retornos y disminución de la deuda externa.

Pero el proyecto oficial dista de encauzar estos objetivos o de coincidir con ellos. Por el contrario, a mi criterio facilita la exteriorización de capitales financieros mediante su simple depósito en bancos y crea un intrincado sistema de ofertación de esos fondos hacia las actividades productivas, a tenor de lo dispuesto por el artículo 12 en su tercer párrafo.

Debo señalar que todo planteo en esta materia vulnera principios de justicia distributiva respecto de aquellos que cumplieron puntualmente

sus deberes fiscales. Pero así como en la ocasión se elige a éste como mal menor, y de tal modo concebí mi propuesta en su momento, no parece admisible que se efectúen discriminaciones respecto del hecho que violó las leyes vigentes en su momento, sin perjuicio de la racionalidad del acto económico que motivaba tal actitud respecto del destino acordado a los fondos que eludieron el o los impuestos aplicables.

De este modo, la propuesta legal que examinamos permite incluir en este régimen a los bienes adquiridos o la incorporación como capital de empresas, o todavía más que se hayan otorgado en préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias, domiciliados en el país, volviéndose a privilegiar a mi criterio lo financiero sobre lo productivo.

Es decir que quien al día 1º de abril justifique una imposición en moneda extranjera en bancos de este país o en entidades bancarias del exterior por noventa días corridos que incluyan esa fecha, blanquean —porque ésa es la palabra— operaciones posteriores por tales montos, con la única condición de que se encuentren en sus patrimonios y permanezcan en ellos por ciento ochenta días.

También, quienes posean bienes en el exterior, no declarados, pueden regularizar su situación incluyéndolos en su patrimonio, con la posibilidad de meditar su decisión por cuatro años, al costo financiero del uno por ciento anual.

Es tan notoria la diferencia respecto de aquellos que estando de igual modo en infracción a las leyes tributarias ocultaron sus rentas al no declararlas, pero de igual modo las invirtieron en el propio país, sea comprando nuevas máquinas o construyendo ampliaciones de sus negocios e industrias o acrecentando sus existencias de mercaderías o cualquiera sea la manera, agregando riqueza y bienes al patrimonio del país, que llega al punto de irritativa.

Caen entonces en una gran oscuridad los conceptos y principios permanentemente enunciados por las autoridades respecto de la igualdad de los contribuyentes y la negativa a la posibilidad de un blanqueo, habida cuenta —como se repitió incansablemente— de las facilidades acordadas por la llamada presentación espontánea.

Hay un blanqueo absoluto para aquellos que tienen bienes en el exterior preexistentes al 31 de marzo de 1991 y para los que tenían dinero en moneda extranjera colocado en bancos —sea en nuestro país o en el exterior— durante 90 días

que incluyeran el 1º de abril de 1991. Para un blanqueo total, una tasa realmente ridícula de regularización.

Aquellos que, en cambio, ocultaron sus rentas invirtiéndolas en el país seguirán sometidos a la espada de Damocles de la ley penal tributaria o deberán hallar las combinaciones que el inciso b) del 3er. párrafo del artículo 11 habrá de posibilitar, transformando en nulo el costo de blanqueo de supuestos prestamistas.

Creemos correcto que se adopten las medidas para facilitar el reingreso de los capitales expatriados, pero no compartimos la filosofía adoptada de justificar indiscriminadamente todo lo que esté vinculado con el exterior —sea en forma de tenencias de monedas o divisas, sea en inversiones—, en la medida en que no se dé idéntico tratamiento a las colocaciones realizadas en nuestro país, en especial aquellas sumas invertidas en procesos productivos o en bienes inmuebles, de manera de respetar los principios constitucionales de igualdad ante la ley.

Paso a referirme a la normativa relativa al impuesto al valor agregado, que constituye el capítulo IV de este proyecto de ley.

En primer lugar, quiero señalar dos aspectos que incluía la propuesta del Poder Ejecutivo que no fueron aceptados por la Cámara de Diputados. Uno se refería a aplicar el gravamen a los transportes de carga, eximiendo únicamente los correspondientes a transportes de pasajeros. Comparto el criterio aprobado de excluir del ámbito de este impuesto a todo lo vinculado con el transporte, toda vez que las enormes distancias que separan importantes centros de producción con el consumo determinan fletes caros que deben ser absorbidos por los productores en los casos de bienes transables, puesto que el valor de mercado está en vinculación con los precios internacionales.

Del mismo modo, una importante proporción de los bienes de consumo de las poblaciones del interior proviene de los centros industriales vecinos al gran conglomerado metropolitano, lo cual aumentaría sus precios de costo en detrimento de su nivel de vida, ya de por sí más que insuficiente.

El segundo aspecto rechazado por la Cámara baja fue la autorización al Poder Ejecutivo nacional para dejar sin efecto exenciones al impuesto que legisló este Congreso de la Nación.

Por un lado es obvio que si el Poder Legislativo tiene la atribución de distribuir la carga impositiva, autorizar al administrador a dejar sin efecto las eximiciones acordadas importa renegar

de esa facultad que le otorga la Constitución Nacional. En este caso, más que facultad constituye una obligación irrenunciable.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan R. Aguirre Lanari.

**Sr. Romero Feris.** — Por tal motivo, expreso mi rechazo al decreto 171/92, del 23 de enero de 1992, por el cual el Poder Ejecutivo nacional, invocando razones de necesidad y urgencia, dispuso incluir en el régimen del impuesto al valor agregado a las operaciones de seguros y reaseguros, incurriendo así en el defecto legal a que recién nos referíamos.

Dicho decreto, posteriormente modificado por el decreto 355/92, relativo a la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros, acaba de ingresar a este Congreso por haber sido incluido en el Decreto 485, del 24 de marzo de 1992, que dispone su inclusión para su tratamiento en las sesiones extraordinarias que llevamos a cabo. Pero lo cierto es que a partir del presente 1º de abril se aplica el impuesto al valor agregado a todo el ramo asegurador en virtud de una norma dictada por el Poder Ejecutivo, reiterándose de modo permanente la invasión de la esfera del legislador. Bien podría haber sido tratado en este momento y así ser aprobado o rechazado por este Parlamento, antes de una dudosa vigencia.

Observamos también que la nueva propuesta extiende a todo el ámbito de la intermediación y prestación financiera la exención del impuesto antes sólo aplicable a las operaciones realizadas por bancos y otros entes sujetos a las normas de la ley 21.526. Se privilegia de este modo lo referente a los costos financieros, en busca de disminuirlos para hacerlos compatibles con niveles internacionales, pero no se adoptan similares recaudos en los demás aspectos que inciden fundamentalmente sobre estos factores de costo, tales como los niveles de encaje que regulan los sistemas bancarios que llevan a dichas entidades a triplicar la tasa, para cubrir su costo, siendo mínima la reducción dispuesta el pasado lunes.

En el Título V, relativo al procedimiento tributario, se amplían nuevamente las facultades de la Dirección General Impositiva. Algunas de estas extensiones han sido propuestas ya a este Congreso y rechazadas.

Así surge de las páginas 1428 y 2019 del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, por lo cual no correspondería este tercer tratamiento en razón de las disposiciones del artículo 71 de la Constitución.



Además, resultan excesivas las atribuciones allí acordadas en cuanto a que durante un período fiscal que puede ser inferior a un mes, una inspección —que de este modo puede durar una semana, un día o menos aún si se toma literalmente la expresión de la norma— puede proyectar diferencias de ventas por todo un período que puede incluso alcanzar a 6 años.

De igual manera, la facultad de determinar el monto de las ventas por aplicación de cualquier índice o pauta, diciendo la norma propuesta que los allí señalados son meramente enunciativos, coloca al contribuyente en un estado de indefensión, dada la imposibilidad de efectuar la prueba de lo "no vendido".

El punto 2 del Título incorpora la obligación de llevar registros y conservar los documentos o comprobantes que los respalden, delegando en la Dirección General Impositiva la limitación de esta normativa respecto de aquellos contribuyentes de menor tamaño económico.

Dado que se fija de este modo una carga económica al posible inculcado por los impuestos, que puede llegar a ser varias veces superior al monto a abonar, entiendo que debe ser este Congreso el que establezca el importe de las operaciones a ser alcanzado para hacer efectiva la medida. Tenemos el reciente ejemplo de la reducción de \$500.000 a \$300.000 del valor de los edificios cuyas administraciones deberán estar sujetas a las disposiciones relativas a inscripción en el impuesto al valor agregado en carácter de agentes de retención, como muestra de la discrecionalidad de la DGI.

Estimo que el monto mínimo a fijar no debería ser inferior a dos veces el mínimo no imponible para un contribuyente con familia tipo, cifra cuya prudencia se evaluará en el transcurso del futuro.

El punto 3 introduce, mejor dicho perfección, exigencias relativas al mantenimiento y tenencia a disposición de la Dirección General Impositiva de soportes magnéticos utilizados en la actividad del contribuyente así como a informar toda característica técnica de *software* y *hardware*, tanto en equipos propios o de terceros.

Es por todos conocido que muchos de estos equipos y de sus *software* son de carácter individual e incluso amparados por patentes, por lo que se violarán derechos de la propiedad intelectual del modo establecido.

Finalmente, en este título, el punto 4 vuelve a imponer que se acuerde al funcionario la posibilidad de clausurar un negocio por tres a diez

días si se comprueba que en dos o más oportunidades se incurrió en la infracción formal de no emitir factura o documento equivalente de la venta, locación o prestación de servicio.

La ley inventa la figura de un funcionario que poseerá a ese fin el carácter de juez administrativo, que será otorgado directamente por el director general de la repartición.

Señalé que ambas facultades están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo por el artículo 95 de la Constitución Nacional y que de este modo se viola el derecho a la defensa en juicio que prescribe su artículo 18. Creemos que el acto producido por el administrador que derive en clausuras u otras penalidades sin ningún tipo de sustanciación, además de nulo, provoca consecuencias irreparables para el damnificado, que queda sujeto, por otra parte, al capricho del funcionario actuante, lo que lamentablemente nos lleva a recordar los múltiples antecedentes en todos los órdenes que demuestran la inconveniencia de acordar este tipo de atribuciones a funcionarios destacados en comisión al control callejero de estas infracciones.

La ley debe imponer procedimientos disuasorios de la evasión, pero éstos no pueden quedar librados a la voluntad de un funcionario a quien no se le exige condición especial alguna para acreditar su capacidad de juzgar, y menos para sancionar.

En cuanto al título VI respecto de los quebrantos anteriores al 1° de marzo de 1991 por el cual se dejan sin compensar en lo futuro los existentes, cambiando las reglas de juego, para ser transformados en créditos fiscales a abonar con bonos de cancelación de deuda creados por la ley 23.952 de consolidación de deudas por el Estado, aparece una solución injusta para muchos y una dádiva sin justificación para otros. Es sabido que el quebranto impositivo no tiene calidad jurídica de crédito efectivo, sino que es un mero derecho en expectativa que otorga la posibilidad de reducir las futuras obligaciones tributarias.

Si no hay ganancias futuras sujetas al impuesto los quebrantos carecen de valor. Este supuesto de falta de ganancias puede darse de diferentes formas: por tratarse de una actividad que no las genera, por corresponder a una empresa exenta total o parcialmente de abonar este impuesto por regímenes especiales o por ser el monto determinado —sin su cómputo— inferior al impuesto a los activos del período. Esto último, por cuanto al ser el impuesto a las ganancias imputado a cuenta del impuesto a los activos, el monto real a considerar es el que supera el fijado para este

otro gravamen. Es decir, nos encontraríamos aquí con una donación gratuita del Estado nacional de títulos de la deuda pública que hacen efectivo y real lo que sólo era un derecho en expectativa que tal vez nunca se concretaría sino que quedaría sujeto a las cláusulas de la prescripción.

Al mismo tiempo, fijar en un 20% independientemente de la categoría del contribuyente el monto a reintegrar, constituye otro abuso legal que esta Cámara debe corregir.

Obsérvese que por una parte se propone elevar la tasa del impuesto al 30% para las sociedades de capital y al mismo tiempo se establece en el 20% del quebranto fiscal acumulado la cantidad a fijar como crédito fiscal a consolidar.

Por ello, propongo la modificación de este título en cuanto a que los créditos fiscales se determinen anualmente en función de la comparación de las liquidaciones resultantes del impuesto a las ganancias, considerando o no la deducción del quebranto y en la medida en que el mayor importe no sea considerado como pago a cuenta del impuesto a los activos. De este modo se practicará de manera exacta la fijación del crédito del particular contra el Estado, siendo entonces razonable que corra la misma suerte que este Congreso —con mi oposición— ha brindado a todos los acreedores del Estado al 31 de marzo de 1991, o sea su pago con un título a 10 o más años, con 6 años de gracia.

Con respecto al título VII quiero llamar la atención a lo normado en el artículo 36, que establece: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten procedentes como consecuencia de la sanción de esta ley."

Señor presidente, cuando tratamos el Presupuesto de la Nación de este año elogió calurosamente la actitud distinta que contenía respecto de los años anteriores, en cuanto se prohibía efectuar modificaciones que implicaran transferencia de créditos entre las finalidades establecidas en el artículo 1° de la ley, o transferir erogaciones de capital a erogaciones corrientes dentro de cada finalidad.

La ley de presupuesto aprobada, en su artículo 8°, fijaba el procedimiento a aplicar a la eventual ampliación de los créditos. Consistía en que deberían ser distribuidos al máximo nivel de desagregación previsto en las normas para la confección del presupuesto de la administración central.

Pero la norma que examinamos no fija ningún tipo de restricción respecto del destino del in-

cremento de la recaudación que se espera obtener con estas reformas y que, como dije, sólo por el impuesto a las ganancias representa para el Tesoro nacional unos 450 millones de pesos hasta fines del año 1992. Los 2 puntos adicionales del IVA proporcionarían algo más de 1.000 millones, de los cuales la Nación engrosaría su superávit en otros 450 millones, lo que nos da 900 millones en conjunto para lo que resta del año, o sea 100 millones más por mes.

Ahora bien, me pregunto: ¿qué sentido tiene disponer de un presupuesto aprobado en tiempo y forma, lo que se calificó como hecho extraordinario, lo que fue por cierto, si luego, por este camino, se lo desvirtúa?

Señor presidente: a diario vamos tomando conocimiento de las negociaciones que realiza el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional y con el Comité de Bancos acreedores para refinanciar la deuda pública externa.

Hemos leído la carta de intención enviada al primero apoyando el pedido de crédito denominado "de Facilidades Extendidas" —hoy parece que logrado— y llegamos a la conclusión de que lo allí ofrecido no se compadece con las previsiones presupuestarias.

Vemos cómo el avance de las tratativas con los bancos acreedores va girando en torno a un mayor desembolso a cuenta de los intereses atrasados; en principio la Argentina propuso renegociarlos íntegramente por un plazo de 12 años y ahora va cediendo en el requerimiento del pago contado, siendo factible al parecer que la suma a abonar alcance los 650 millones de dólares, según afirman los medios especializados. También a mediados de enero el ministro afirmaba que el superávit operativo sostenible a largo plazo era de 200 millones de dólares y ha comprometido ahora 250 millones.

Es claro que estos aspectos, al variar las pautas del presupuesto nacional aprobado, debieron haber sido debatidos en este Congreso, por cuanto son atribuciones exclusivas fijar el presupuesto de gastos y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, según lo prescriben los incisos 6° y 7° del artículo 67 de la Constitución Nacional.

Entendemos, y así lo solicitamos, que el señor ministro de Economía debe concurrir a este Senado para informar adecuadamente sobre estos puntos y debe condicionar el cierre de los acuerdos que está negociando a la previa aprobación de este Congreso de la Nación.

Por tal motivo, este artículo 36 no puede ser aprobado por el Senado por cuanto implica volver a la política que creíamos superada del "cheque libre" al Poder Ejecutivo en lo que se refiere a disponer de los fondos de la Nación.

Debo referirme ahora al artículo 40 que introduce una novedosa distribución previa del impuesto de las Ganancias a las normas vigentes en materia de coparticipación federal que establece la ley 23.548.

Hace tiempo que vengo bregando por la actualización de dicha ley por entender que no responde en la actualidad a los legítimos derechos de las provincias y menos todavía cuando existe un accionar permanente de la Nación tendiente a transferir a nuestra órbita provincial los servicios que ella tenía a su cargo, como acaba de suceder con la enseñanza secundaria, con los hospitales y con algunos programas de políticas sociales, comunitarias y nutricionales, sin que ello se vea reflejado en los porcentuales de distribución de la recaudación tributaria.

Se añade que la carta de intención al Fondo Monetario Internacional, a la que aludíamos antes, contiene en su punto 16 el enunciado de que se continuarán transfiriendo otros servicios a las provincias, lo cual se financiaría también con el mayor producido global de la recaudación y no con el aumento de los porcentuales que correspondan a cada provincia en el sistema de coparticipación federal.

Frente a este panorama futuro observamos que por el artículo que examinamos se detrae previamente el 10% del total a percibir por este impuesto con destino a la provincia de Buenos Aires para constituir un fondo de financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense. Se hace lo propio con el 2% para reforzar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, que administra el Ministerio del Interior, y otro 4% para las restantes jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires, conforme con el índice de necesidades básicas insatisfechas, eufemismo que cubre lo que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó como *La pobreza en la Argentina*.

Adelanto mi oposición completa a esta modificación a la ley de coparticipación federal, por cuanto, si bien reconozco la extrema gravedad de las deficiencias que tienen las localidades del Gran Buenos Aires, no creo que ellas sean mayores que las que se verifican en el resto del país, lo que comprobamos a diario y el mapa de la pobreza nacional lo certifica.

Recordemos que este mayor pedido de la provincia bonaerense apareció con el primer dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados relativo al fracasado intento de implantar el denominado "impuesto al excedente primario de las empresas", que suplantaría los aportes patronales destinados al sistema previsional.

La urgencia que se invocó fue la necesidad imperiosa de dotar de servicios de agua corriente y cloacales al altísimo número de poblaciones que rodean la Capital, ante la aparición de la epidemia del cólera en nuestro país.

Por supuesto, apoyo plenamente la realización de todas las obras necesarias para superar el umbral de la miseria que azota tantas villas y nuevos asentamientos que proliferan en esta área.

Pero señalo que no parece el camino apropiado despojar de sus recursos a provincias infinitamente más pobres y más dependientes de la recaudación nacional.

En este aspecto basta recordar que 4 provincias dependen de este ingreso en más del 90% de sus erogaciones, otras 14 entre el 73% y 90% y solamente 4 en menos del 65%. Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Esta última solventa el 56 por ciento de sus gastos con recursos propios.

Por cierto que me disgusta profundamente el plantear esta oposición porque deseo como todos la solución de sus problemas, al igual que los del resto de la población entera del país; pero creo en este caso que estamos desnudando un pobre, que no tiene más que harapos o andrajos para vestir a otro, que tiene mejor indumentaria.

Debemos además tener presente que en la actual legislación el impuesto a las ganancias se computa como pago a cuenta del impuesto a los activos, razón por la cual esta deducción afecta la recaudación distribuible de ambos impuestos.

También manifiesto mi discrepancia con respecto al 2% que se asigna al Ministerio del Interior para Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, por cuanto era más que suficiente el que acuerda la Ley de Coparticipación Federal.

En definitiva, la relación numérica indica que las provincias con mayor índice de necesidades insatisfechas, con mayor pobreza, estarán cercando sus ingresos a favor de la más rica, en todos y cada uno de los órdenes que se mire, en el valor de sus propiedades urbanas y rurales, en los rodados que la cruzan, en la producción de bienes industriales y agropecuarios, en la generación de servicios y en todo cuanto sea un indi-

cativo de referencia, considerados de manera global y por habitante.

Dos apreciaciones más para terminar, señor presidente. La primera referenté al artículo 41, por el cual se libera a los empleadores que se regularicen acorde con las normas de la ley 24.013 de todo tipo de sanción del lado tributario, aspecto que no había sido percibido en ocasión de la apropiación de aquella y que se constituía en un obstáculo para la regularización del personal. Este artículo no se hallaba en la propuesta primitiva y fue adecuadamente fundada en la exposición realizada por el miembro informante de la Cámara de Diputados. No ocurre lo propio con el artículo 35 correspondiente a una exención de impuestos internos, que si bien podemos admitir como legítima, aparece subrepticamente en el articulado de este proyecto, sin que nadie sepa de dónde provino el pedido y quién le hizo lugar. Estimamos que en estos aspectos deben respetarse escrupulosamente los principios del libre juego de las instituciones y no quedar expuestos ante el ojo avizor a la apariencia de un manejo o lobby.

Señor presidente: como lo he precisado en los distintos puntos en debate, este proyecto, a mi criterio, transgrede en diversos aspectos los principios y normas de nuestra Constitución Nacional.

También he puntualizado que la norma en análisis es muy poco se corresponde con las propuestas del Poder Ejecutivo; por el contrario, resulta un parche extemporáneo al solo efecto recaudatorio, sobre cuyo futuro producido se ha efectuado una distribución que repruebo, toda vez que no es el camino adecuado para debatir el sistema de reparto de la recaudación de impuestos nacionales.

Considero improcedente extender los impuestos a las ganancias por las rentas de fuente extranjera como incluir dentro del concepto imponible del impuesto a los activos a aquellos radicados en el exterior, en la inteligencia de que por un lado se manifiesta un sesgo antiexportador y por otra parte se encarecen costos de financiamientos directos del exterior.

He manifestado mi preocupación por el permanente incremento de las facultades punitivas del personal administrativo de la Dirección General Impositiva, al que se le llega a dar carácter de juez en desmedro de los principios constitucionales que he citado.

De igual modo, es sumamente desacertada la solución que se ha buscado a la repatriación de

capitales e irritativa para el principio de igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.

Tampoco es afortunada la resolución del tema de los quebrantos impositivos en el impuesto a las ganancias; la aplicación en la forma propuesta resulta dadvosa en un extremo y notoriamente perjudicial en el opuesto.

Por otra parte, insisto especialmente en rescatar lo que son atribuciones de este Congreso: fijar el presupuesto de gastos y arreglar la deuda interior y exterior de la Nación. De este proyecto resulta a mi entender de modo claro que dichas reglas no se están respetando.

Por tales razones, señor presidente, rechazo la iniciativa en general y en particular.

**Sr. Presidente (Aguirre Lanari).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Gass.** — Señor presidente: confieso que el ámbito de la economía no es en el que modestamente suelo incursionar sintiéndome más cómodo.

Pero tengo un deber de conciencia. El miembro informante de nuestro bloque ya manifestó las principales objeciones a este proyecto de ley y cuáles son a su entender las modificaciones que habría que hacerle.

No sé si el senador Trilla tendrá suerte, a pesar de su brillante exposición y de los argumentos tan sólidos por él esgrimidos. De cualquier modo, como siempre lo hicimos los hombres de la oposición, lo intentamos.

Me referiré, señor presidente, a un solo artículo que me preocupa.

No cabe duda de que el retiro de los dos títulos contenidos en el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados, por los que se creaban el IEPE — es una palabra tan particular — y el impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas — así se lo escuché a mis compañeros — nos llena de satisfacción y ha sido una medida correcta y útil.

No sé qué presiones habrán tenido los diputados oficialistas para desestimar estas dos disposiciones que había publicitado el "eficiente" señor ministro de Economía que tiene la República. Alguna razón existió para dicha supresión: las presiones fueron muy fuertes o realmente los diputados consiguieron convencer al señor ministro de Economía.

De haber seguido con ese plan seguramente hubiésemos defraudado de nuevo a nuestras provincias mediante una política que el gobierno nacional profundizó durante el último tiempo al modificar el régimen de coparticipación federal.

Evidentemente, de haberse puesto en funcionamiento el IEPE, se hubiese profundizado la distorsión que registra el sistema de coparticipación federal.

Soy un hombre de la provincia de Buenos Aires. Nací, me crié, trabajé, vivo y conozco las necesidades que ésta tiene. Estoy acostumbrado a escuchar, señor presidente, que hablen de la provincia rica. Pero generalmente nadie se da cuenta de que existen dos provincias de Buenos Aires: una es el conurbano y la otra la pampa húmeda. Pero en tren de meter todo en la misma bolsa, todo el mundo confunde la pampa húmeda, en la que más o menos la gente puede manejarse y por lo menos come, con el conurbano de Buenos Aires.

La mayoría de los legisladores del Senado de la Nación nos han reprochado más de una vez a los hombres de la provincia a la que represento que tenemos una mayor coparticipación federal. Es justo que así sea porque ésta representa al 44 por ciento de la República y es la que más le da, no porque seamos mejores sino porque Dios ha querido que sea una provincia grande. No tengo la culpa de esto ni tampoco quienes gobiernan. Esta es nuestra provincia y sabemos cuáles son sus necesidades permanentes.

Seguramente en más de una oportunidad el señor presidente me escuchó decir que si en el conurbano tuviésemos solamente a los nacidos en la provincia de Buenos Aires, seguramente no estaríamos mendigando —y ésta es la palabra exacta— cada vez que se vota el presupuesto para que nos aumenten la coparticipación federal.

No sé si lamentable o afortunadamente, a la gente de las provincias les gusta vivir en el conurbano de Buenos Aires, seguramente por necesidades, ya que tienen más posibilidad de conseguir trabajo, pero aunque no gocen una vida muy digna, quizá tengan la posibilidad de conseguir una diversión. Pero esto acarrea grandes problemas y trastornos a todos los gobiernos de la provincia: al anterior, al presente y ojalá que no al próximo, ya que espero que cuente con los recursos suficientes.

Fíjese, señor presidente, que en este momento estamos sufriendo este tremendo flagelo del cólera. Como de costumbre, como somos optimistas y como "Dios es argentino", creíamos que esto se iba a detener en la frontera con Bolivia y que nuestros habitantes no lo iban a padecer, porque somos limpios.

Sr. Romero Feris. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Gass. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Una pequeñísima interrupción, señor presidente.

Como he manifestado en alguna oportunidad sobre el tema de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires —a la que por supuesto respeto—, comparada con el resto, es la más rica si tenemos en cuenta lo que recauda por sí misma más lo que recibe de la Nación en concepto de coparticipación.

Otra cosa a tener en cuenta —y no quiero extenderme en el tema— es que el ingreso per cápita que tiene Buenos Aires, determina que las otras provincias estén muy lejos de tener ese ingreso per cápita.

Le agradezco mucho la interrupción, señor senador.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — No tiene nada que agradecer, señor senador.

Entiendo todo esto, pero vuelvo a señalar el sentido de solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No despreciamos a nadie que venga de otra provincia. Lo acogemos en nuestros brazos y le damos lo que tenemos, pero siempre pretendemos darle mucho más.

Vuelvo al tema del cólera. El vibrón colérico, con la modernidad, se transmite con una velocidad que nadie se imagina. Por eso los médicos, y algunos que no lo son, estábamos convencidos de que no íbamos a quedar indemnes de este tremendo flagelo. Alguien dijo, y se sigue diciendo —alguna razón hay—, que es la enfermedad de la pobreza, pero no porque uno sea pobre y no tenga suficientes alimentos. Es la enfermedad de la pobreza porque los gobiernos no les podemos dar a los habitantes lo que necesitan. Me refiero al agua potable y a obras sanitarias. En el Gran Buenos Aires, si no me equivoco —y temo dar cifras porque tenemos el honor de que está presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex presidente del Senado— hay 1.900.000 personas que no tienen agua potable ni obras sanitarias. Fíjese qué tremendo: toman el agua de la primera napa, que está completamente contaminada. Hasta ahora los pocos casos que hemos tenido no han sido autóctonos sino importados de otras provincias y de otras repúblicas hermanas. Pero si se presentasen casos en el conurbano y hubiera una epi-

demia de cólera, no se salvarían los habitantes de Capital Federal, de Corrientes ni de Santa Fe; todos sufrirían la enfermedad.

Entonces, alguna vez hay que buscar los elementos para poder dar a esa gente la calidad de vida que necesita. Por eso hay un artículo especial en el proyecto de ley, que ha sido criticado por mis compañeros de bancada y que, por supuesto, tengo que apoyar.

Entiendo que de alguna manera tenemos que festejar la aprobación de esta iniciativa porque estamos considerando una modificación al impuesto a las ganancias, que es un tributo que fundamentalmente grava la capacidad productiva y a los que más tienen. En cierto modo, es un proyecto bastante justo —no sé si ésa es la palabra— un impuesto progresivo por excelencia. Y creo que la República Argentina ha marchado o marcha siempre a la cabeza de los índices de la regresividad de los impuestos del sistema impositivo. Entonces con este proyecto estamos dando una solución. También decimos que este aumento en el impuesto a las ganancias viene a resarcir —y discúlpese el término— parte de lo manoteado a las provincias en los últimos meses en función de la transferencia de las escuelas, tema al que ya se ha referido mi compañero de sector y también el senador por Corrientes. Esto implica un gran sacrificio para la provincia de Buenos Aires. Pero además de nuestros recursos genuinos debemos contar con el apoyo de la Nación.

Mucho se habla respecto de la enorme coparticipación federal para la provincia de Buenos Aires, pero todavía estamos muy lejos de llegar al índice histórico de las coparticipaciones que mi provincia recibía.

Cuando hablaba de este tema —lo hice muy poco en la época del gobierno anterior— decían que lo hacía porque era oficialista. Supongo que ahora me van a acusar de opositor, por hablar a favor del gobierno. Yo no hablo a favor del gobierno sino a favor de la provincia, por la población, que es la que necesita de todos estos recursos para poder gozar de la dignidad de vida.

Con respecto al artículo 40, lamento no coincidir con algún "compañero" de mi partido —correligionario diputado, ya me he contagiado—, que se opuso a dicho artículo y es un hombre que vive en el conurbano de Buenos Aires igual que yo.

Sin embargo, por estas razones específicas de que de alguna manera hay que estar en contra de algo —sus razones tendría— se opuso al artículo 40.

No me voy a oponer, señor presidente; voy a votar afirmativamente, si me permite el miembro informante de mi bloque, porque el artículo 40 dice: "La recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá de la siguiente forma: 1. Un diez por ciento (10%) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática". Tengo que aprobar este artículo porque se trata de una suma muy importante. Además, se habla del fin de este proyecto.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sr. Gass. — Es decir, estos millones de pesos —es lo mismo que decir millones de dólares— no van a ir a cualquier parte, porque habrá control por parte de los diputados y senadores provinciales, así como también seguramente por parte de los legisladores nacionales, para que se cumpla efectivamente aquello a que se refiere esta suma tan importante.

Entiendo que se sientan agraviadas las provincias que tienen tantas necesidades y no se les otorgan recursos como a la de Buenos Aires.

Señor presidente: ya dije que estoy convencido de que el conurbano bonaerense es el punto de inmigración de todas las provincias. Y si bien hay que procurar que hombres de otras provincias no se trasladen masivamente al conurbano bonaerense, esto no puede quedar en una expresión de desapego. Nadie deja el lugar en el que ha nacido, se ha criado y tiene sus amigos sólo porque se le ocurre. Me gustaría que algún día —no creo que yo lo pueda ver, por razones cronológicas— todas las provincias sean llamadas ricas, que cada una mantenga su identidad, sus costumbres, su música. Pero realmente en estos momentos me parece que es una utopía.

Señor presidente: no quiero extenderme más. No hablaré acerca de los otros puntos contenidos en el artículo 40, ya que han sido desmenuzados por el miembro informante de mi bancada.

Sólo quiero decir que a conciencia, y siguiendo los principios que esgrimiera ya en 1973 siendo diputado de la Nación por Buenos Aires, y perteneciendo también entonces a la oposición, continuara desde 1983 hasta la fecha, voy a votar afirmativamente el artículo 40, exigiendo al gobierno de mi provincia que una vez que obtenga los recursos comience a hacer las obras que necesita el conurbano bonaerense.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Posleman.** — Señor presidente: nuevamente este cuerpo comienza a tratar otra reforma del sistema de recaudación impositiva del país.

Ha pasado muy poco tiempo desde la reforma que anteriormente realizáramos, en el curso del año pasado. Esto nos hace reflexionar acerca de que el Poder Ejecutivo, a pesar de la situación de crisis que está viviendo, se está manejando con una gran dosis de improvisación. Creo que esto debe ser anotado entre los aspectos negativos de la política tributaria del gobierno nacional.

Pero también voy a hablar de los aspectos positivos. Creo que es importante reconocer que ha habido un significativo aumento de la recaudación, producto de la reforma tributaria que hemos formulado con anterioridad, que ha afectado la elusión y la evasión y que ha incorporado al circuito financiero sectores importantes de la economía informal o de la economía "en negro".

Pienso que esto es positivo para el país y que las reformas que se hicieron anteriormente, en las que dudábamos acerca de facultades que parecían excesivas en favor de la administración tributaria, de alguna manera están dando su resultado. Ojalá nuestro país llegue a tener un sistema tributario mucho más simple, eficiente y con una mayor conciencia tributaria por parte de todos los ciudadanos. Esta es la aspiración final a la que debemos llegar.

Digo esto porque entre las críticas también tenemos que señalar que se mantiene la complejidad del sistema. Aquí se ha dicho que éste es un nuevo parche al sistema y no avanzamos en la reforma de fondo, integral, para que el ciudadano pueda tener la seguridad frente a las leyes penales tributarias, que tienen la pena de prisión, de que dentro del complejo de normas y de los cambios velocísimos que estamos produciendo pueda cumplir acabadamente con sus obligaciones tributarias.

También significa un aumento de presión tributaria. Como acá se ha dicho, no está explicitado cuál será el destino de estos fondos; esperamos que en el presupuesto de 1992 podamos analizar en profundidad cuál será el destino de los mayores recursos que hoy se incorporan al Tesoro Nacional.

Entre los puntos positivos creo que es importante este que se ha dado en llamar blanqueo, que se implementa sobre los capitales sus-  
traídos o enviados al exterior. Me refiero a una

repatriación de capitales, donde se dan ventajas importantes que ojalá permitan el retorno de esos capitales y su incorporación al circuito productivo del país, lo que en definitiva será un aporte al crecimiento y al mejoramiento del nivel de vida de nuestros ciudadanos.

No quiero extenderme mucho más sobre los temas generales porque ya se ha hablado bastante. Los oradores anteriores han desmenuzado los pro y los contra de este proyecto.

Si bien nosotros en el momento de esta votación en general un poco apresurada no votamos, quiero dejar expresado que en general vamos a apoyar el proyecto, pero tenemos que hacer algunas salvedades respecto de este artículo con el que no estamos de acuerdo y que vamos a votar en contra.

Recién hemos escuchado una encendida defensa del artículo 40 de este proyecto de ley por parte del señor senador por Buenos Aires.

Sobre ese artículo también quiero hacer una referencia. Ojalá que las provincias no ataquen judicialmente su vigencia porque llegaríamos al caos en cuanto a la distribución de la coparticipación federal porque en mi opinión ese artículo es inconstitucional, dado que viola un orden natural de jerarquía de las leyes.

Los impuestos coparticipables se reparten en virtud de la ley 23.548, que repito en mi opinión tiene una jerarquía superior a las leyes comunes porque se trata de una ley-convenio para cuya vigencia es necesaria la ratificación o aprobación de las respectivas legislaturas provinciales.

En este caso estamos modificando la distribución de fondos que establece la ley 23.548 por una norma de jerarquía inferior, sin intervención de las legislaturas provinciales. Esto se da a través del artículo 40 de este proyecto, donde se establece que un 10 por ciento se destina al fondo de financiamiento de programas sociales para el conurbano bonaerense. También se establece un 2 por ciento con destino a la cuenta Fondo de Aportes del Tesoro a las Jurisdicciones, que es la cuenta especial 550 del Ministerio del Interior, y un 4 por ciento que se distribuye entre el resto de las provincias.

En términos generales se está disponiendo de un 16 por ciento que corresponde por coparticipación a las provincias, dándole un destino diferente y restando a las posibilidades de recaudación de las provincias recursos que son de su libre disponibilidad.

Quiero hacer mención específica a la defensa y a la fundamentación que se han hecho aquí res-

pecto de la necesidad de la asignación de este diez por ciento a la provincia de Buenos Aires. Creo que los argumentos que se han dado no están respaldados por la realidad. Se dice que la asignación a la provincia de Buenos Aires de ese diez por ciento se produce en virtud de la necesidad que tiene de atender a la población con necesidades básicas insatisfechas. Esto podría ser una razón específica para que este 16 por ciento en el conjunto, es decir, el diez por ciento que va a Buenos Aires, el 2 por ciento al Ministerio del Interior y el 4 por ciento a las provincias para atender las necesidades básicas insatisfechas fuese con ese destino específico. Esta sería una distribución lógica, justa y con un fin específico para atender esta emergencia que estamos viviendo. Pero si hacemos unos simples números veremos que este 16 por ciento está distribuido discriminatoriamente en favor de la provincia de Buenos Aires. Esta tiene el 35 por ciento de la población que padece necesidades básicas insatisfechas; el resto se encuentra en las demás provincias. Si vamos a obrar con justicia, debemos asignarle un 35 por ciento de estos fondos a la provincia de Buenos Aires. Esto determinaría que le correspondería a esa provincia no más de un 5,6 por ciento de la recaudación. Sin embargo, le estamos dando un 10 por ciento.

Se ha dicho aquí que esta asignación no tiene por único objetivo la realización de obras básicas de infraestructura sino que también procura reparar los efectos que trajo sobre la provincia de Buenos Aires la transferencia de los servicios escolares. Pero la situación de esta provincia no es distinta de la que ha sufrido el resto de las provincias. Puedo hablar con cabal conocimiento de lo que ha sucedido en mi provincia, que se ha hecho cargo de toda la educación secundaria y donde más de un 60 por ciento de los establecimientos educacionales que no han sido transferidos carece de edificios propios. Lo que se ha establecido en los convenios de transferencia no va a resolver este problema, porque se prevé la asignación de alrededor de 1.500.000 dólares, que de ninguna manera alcanzan siquiera para un edificio de uno solo de estos colegios. La provincia tendrá que hacerse cargo de una inversión muy importante para ir resolviendo los problemas edilicios ocasionados por la transferencia.

Por esta razones, pensamos que sería más justo que este 16 por ciento del impuesto a las ganancias sea distribuido entre todas las provincias conforme al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. De esta manera, se cumpliría el

objetivo propuesto al asignar estos fondos y se los distribuiría de la manera más justa posible.

Quiero también expresar una preocupación, porque esto no es casual y constituye una repetición de circunstancias que hemos vivido y que fueron consolidadas en leyes. El Poder Ejecutivo nacional está desarrollando una política de ir disminuyendo los fondos de coparticipación federal sin modificar la ley de coparticipación federal. ¿Cómo está logrando este objetivo? No modifica la distribución entre la Nación y las provincias ni los índices de distribución entre las provincias de los fondos de coparticipación, sino que está disminuyendo, al reducir los impuestos, los recursos que deben ir a la masa coparticipable. Así, en la ley de emergencia económica, que contemplaba fondos para la previsión social, se dispuso que el 10 por ciento del IVA, que es un impuesto coparticipable, iba a formar una masa destinada a atender las necesidades de los jubilados. No estamos en contra de los jubilados. Tampoco estamos en contra de los destinos específicos que se les dan a estos fondos. Si estamos en contra de que ellos se constituyan con recursos coparticipables, que corresponden a las provincias.

Indirectamente también, a través de la transferencia de los servicios educativos y de salud, se han disminuido entre un 8 y 10 por ciento los fondos de coparticipación a las provincias. Este es el monto del gasto porque no sólo se le quitan recursos a las provincias restándoles fondos de los montos coparticipables; también se logra ese efecto transfiriéndoles obligaciones y gastos sin la correspondiente asignación de recursos.

Señor presidente: en definitiva, vamos a hacer una contribución más para que el programa económico y la propuesta que está llevando adelante el Poder Ejecutivo siga avanzando, con las salvedades y las preocupaciones que hemos señalado en general.

Cuando se trate en particular el artículo 40, vamos a hacer la propuesta de modificación en el sentido que he expresado hace unos instantes. En el caso de no ser aceptada nuestra propuesta, obviamente vamos a votar en contra porque entendemos que así estamos votando a favor de nuestras provincias.

**Sr. Presidente (Brasesco).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, Partido Liberal, doctor Aguirre Lanari.

**Sr. Aguirre Lanari.** — (Lee) "Señor presidente: todo régimen tributario y cada una de sus leyes en particular pueden ser analizados desde tres puntos de vista. En primer término, desde

el punto de vista fiscal; es decir, en su finalidad de obtener los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones y gastos del Estado. En segundo lugar, desde el punto de vista de la política económica, para cuya ejecución constituye un instrumento de singular eficacia para alcanzar prioritarios objetivos. Finalmente, desde el punto de vista de los tradicionales principios económicos y jurídicos que la doctrina ha consagrado; esto es, neutralidad, certeza, simplicidad, legalidad, equidad y no confiscación en el orden económico-constitucional.

Los tres enfoques han sido considerados por los funcionarios del Poder Ejecutivo, por los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, por las instituciones y las corporaciones cuyos representantes concurren a su seno e incluso por los profesionales, a través de la presentación de memoriales o de los órganos periodísticos y especializados; todos dicen su opinión sobre el proyecto que está en consideración en esta Cámara.

Voy a hacer referencia a alguna de esas opiniones, y expresaré también la mía, dejando constancia de que ella tendrá como telón de fondo los objetivos básicos del programa económico global, que no son en cierta manera diferentes a los perseguidos por planes anteriores; esto es, la estabilidad, el pleno empleo de los recursos materiales y humanos y el mayor bienestar de la población.

Diré en primer término que el Poder Ejecutivo con su proyecto primitivo perseguía prioritariamente, según es bien sabido, un objetivo fiscal, que consiste en obtener mayores recursos del sector privado —alrededor de 2.800 millones de dólares— mediante un aumento de la presión tributaria.

En ese proyecto inicial del Poder Ejecutivo existían dos innovaciones importantes en nuestro sistema impositivo que fueron objeto de sendas críticas por parte de diversos sectores: la sustitución del impuesto a las ganancias devenidas por un proyecto de impuesto a las ganancias percibidas, dispuestas y consumidas y el establecimiento del impuesto al excedente primario de las empresas, conocido bajo la sigla IEPE, cuya finalidad principal era eliminar el déficit del sistema previsional.

Los críticos adujeron que para aumentar la recaudación no hacía falta cambiar toda la estructura tributaria introduciendo impuestos sobre los cuales no existen experiencias en otros países y que provocarían trastornos e inconvenientes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas

que no tienen una organización adecuada de técnicos para hacer frente a las respectivas liquidaciones.

También se dijo que habría sido suficiente eliminar algunos escollos que impidieron alcanzar una satisfactoria recaudación del impuesto a las ganancias. En este sentido, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se preguntaba qué ha pasado con el impuesto a las ganancias, que ha fracasado en forma tal que debe ser sustituido. La respuesta es sencilla: el impuesto fracasó por la deficiente administración tributaria, por la tasa de inflación elevada, por el nulo crecimiento económico, por las reducidas tasas de inversión, por el bajo PBI per cápita, por las bajas remuneraciones y por los altos mínimos no imponibles. Estas circunstancias hicieron que el impuesto a las ganancias en su forma tradicional perdiera importancia relativa dentro de los recursos del sistema tributario argentino, justificando el cambio.

Entiendo que el mayor obstáculo para eliminar esos escollos a que se refiere el Consejo Profesional de Ciencias Económicas es el tiempo, ya que esos escollos requieren soluciones a conseguir en el mediano o el largo plazo, mientras que el aumento de la recaudación es de carácter perentorio. Por ello, por consenso del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, se resolvió retirar del despacho las dos innovaciones a que me he referido, y en vez de pensar en un aumento del impuesto a las ganancias, basado en un aumento de la riqueza a producirse en un futuro no muy cercano en el tiempo, se ha apelado a mecanismos de recaudación más rápidos. En el proyecto en consideración la mayor recaudación se obtiene, en primer lugar, por el aumento de la tasa del actual impuesto a las ganancias del 20 al 30 por ciento y ampliación de la base imponible por la vía que en seguida mencionaré; en segundo término, por alargamiento del plazo de vigencia y algunos cambios en la valuación de bienes en el impuesto a los activos; tercero, por la sanción de un impuesto a la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera y demás bienes en el exterior; finalmente, por la eliminación o reducción de algunas exenciones y deducciones en el impuesto a las ganancias y al valor agregado.

Resultará plausible que el impuesto a las ganancias vuelva a constituirse en uno de los que aporte mayores recursos entre los impuestos participables. De 1,5 del PBI que se recaudaba en 1988 había caído a 0,5 en 1991, debiendo cubrirse tal brecha negativa con impuestos indirectos —como el IVA e impuestos internos—,

convirtiendo al sistema impositivo, como tantas veces lo hemos dicho en este recinto, en un sistema regresivo con mayor peso relativo sobre los sectores de menor capacidad contributiva.

En el proyecto que está a consideración de esta cámara, la ampliación de la base impositiva del impuesto a las ganancias se proyecta obtener mediante la llamada "mundialización" de las ganancias, incorporando las que obtengan los residentes argentinos por actividades o bienes en el exterior; por el ahorro forzoso que se opera por la conversión en crédito fiscal, pagadero en bonos a largo plazo, de los quebrantos de ejercicios anteriores; y con el mayor rigor de las disposiciones de la ley de procedimientos, con el fin de reducir la elevada evasión fiscal.

Sr. Presidente (Brasesco). — Les pido a los señores senadores que hagan silencio a fin de poder escuchar al orador.

Sr. Aguirre Lanari. — Agradezco a la Presidencia que aplique una regla igualitaria.

La consolidación de los créditos fiscales de las empresas propuesta en el proyecto, se limita irrazonablemente a un 20 por ciento y genera desigualdades ante la ley entre los contribuyentes que tienen pérdidas y los que no las tienen. No se advierte razón legítima para limitar el reconocimiento a ese solo 20 por ciento, ya que veda la compensación de la totalidad del crédito fiscal ante cualquiera de los ejercicios futuros que arrojan utilidades. Nos preguntamos cuál es la razón legal para disponer esa limitación y no un porcentaje mayor o la totalidad. Desde un punto de vista legal no hay explicación alguna, y siendo que las normas fiscales deben tener razonabilidad y causalidad la proyectada no se compadece con ninguno de estos principios.

Como lo dije en la sesión del 7 de enero de 1988 al considerarse el mismo tema: "... al impedir la compensación de los quebrantos se vulnera tanto el principio de igualdad como el derecho de propiedad, ya que el gravamen dejará de ser un impuesto sobre las ganancias para convertirse, en ciertos casos, en un impuesto sobre beneficios o ganancias nominales".

Agrego, señor presidente, que en aquella oportunidad también manifesté que "el Estado tiene deberes pero ellos no deben hacer que pretenda solucionar sus urgencias económicas exclusivamente a través de exacciones crecientes desde el punto de vista impositivo sino que, por el contrario, tiene la obligación de dar seguridad jurídica y de respetar los derechos adquiridos de los contribuyentes, lo que lamentablemente no

ocurre con algunas normas que sin duda habrá de sancionar el Senado esta noche".

Me he de referir ahora al segundo de los aspectos que he mencionado al principio de mi exposición; referido al sistema tributario como instrumento de política económica.

Creo que corresponde hacer una reflexión que es aplicable tanto al impuesto a las ganancias, que en este proyecto se restablece, como al postergado impuesto al excedente primario de las empresas, vulgarmente llamado IEPE. Ambos impuestos, de acuerdo a la clasificación tradicional, son encasillados como impuestos directos, es decir, aquellos que no se trasladarían a los precios y quedarían absorbidos por las ganancias de los empresarios. Sin embargo, esa teoría de no traslación de los impuestos directos es considerada a esta altura de los tiempos como una teoría obsoleta. A ese efecto dice Giuliani Fonrouge: "Los autores antiguos basaban la distinción entre impuestos directos e indirectos, en la posibilidad de traslación del gravamen, considerando directo al soportado definitivamente por el contribuyente de iure, e indirecto al que se traslada sobre otra persona; pero los autores modernos han puesto de manifiesto lo incierto de las reglas de incidencia y cómo algunos impuestos (por ejemplo el impuesto a los réditos de las sociedades anónimas) considerados antes como intransferibles resultan en verdad trasladados hacia terceros".

Y sobre el postergado por ahora IEPE, según manifestaciones de algunos representantes de instituciones que concurren a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de estudios efectuados por algunos sectores sobre su efecto sobre los precios, surgiría que alcanzaría entre el 2 y el 8 por ciento sobre las ventas totales, según la actividad. Y agregaron que es evidente que sería trasladado a los precios al consumidor.

También con relación a este aspecto de la relación de los sistemas impositivos con la política económica, señalo que el título III del proyecto en consideración se refiere a la exteriorización de la denuncia de moneda extranjera, divisas y demás bienes del exterior. Nadie puede pensar que las reducidas tasas del 1 y 2 por ciento que impone el artículo 9º del proyecto para quienes ingresen las divisas durante el primero y el segundo año tienen fines recaudatorios. Pero sí se puede afirmar que la obligación de depositar los fondos durante 150 días en una institución bancaria para que ésta los destine a una línea de crédito para la producción convierte a esta disposición en una palanca propicia para aumentar la



oferta de bienes, uno de los requisitos indispensables e impostergables para sentar las bases de la estabilidad pero con crecimiento.

Tal como está redactado el artículo 8° se permite la exteriorización de moneda extranjera y otros bienes en el exterior, sin tope alguno respecto de valores. Por el contrario, en el país, solamente se autoriza la regularización de moneda extranjera hasta 500.000 pesos, sin referencia alguna a otro tipo de bienes. Esto resulta una verdadera inequidad que debería corregirse, puesto que quien posea bienes en el país susceptibles de regularizar no estaría amparado por la franquicia.

Como lo expresa el artículo 13, se requiere una reglamentación que entendemos deberá utilizar un criterio amplio para evitar situaciones injustas, sobre todo para el responsable que necesite regularizar bienes en el país.

Además del efecto negativo no deseado de aumento de los precios a que recién hice referencia, el sistema impositivo puede producir otro efecto negativo no deseado, que es la caída del producto bruto interno y en consecuencia del ingreso de distintos sectores de la población, casi siempre en forma no muy equitativa en su distribución.

En efecto, al disminuir la capacidad adquisitiva por la transferencia de ingresos al sector público por parte del sector privado, que es lo que significa un impuesto, la demanda de bienes por parte de este último, si no tiene respuesta adecuada del lado de la oferta, se contrae y provoca un aumento en la capacidad ociosa del sector industrial, tal como está sucediendo ahora con relación a diciembre según las estadísticas proporcionadas por la Unión Industrial.

Sin embargo, algunos economistas consideran que esto es positivo cuando el recalentamiento de la economía como consecuencia de factores circunstanciales, como cree el ministro Cavallo, o como consecuencia de un exceso de emisión, como lo consideran Roberto Alemann y Alvaro Alsogaray, puede ser atemperado por la acción del sistema impositivo reduciendo los picos inflacionarios como los producidos en enero, febrero y marzo.

Ahora haré algunos comentarios sobre el tercer enfoque que mencioné al comenzar mi exposición, que es el de los tradicionales principios que según la doctrina y la cátedra deben prevalecer en toda estructura tributaria: la neutralidad, la legalidad, la razonabilidad, la igualdad, la certeza, la simplicidad y la no confiscación. La violación de alguno de estos princi-

pios es la que han aducido los sectores privados, que son los sujetos pasivos en estos impuestos con los que se trata de aumentar la presión fiscal.

En primer término, voy a referirme al viejo principio de la neutralidad de los impuestos. Trataré de no extenderme demasiado en mi exposición. Algunos sectores de la actividad privada consiguieron que se excluyeran de este proyecto algunos impuestos que pecaban de falta de neutralidad, puesto que discriminaban en su contra en el proyecto del Poder Ejecutivo. Me limitaré, dada mi condición de representante de la provincia, a señalar de qué manera las últimas reformas impositivas discriminaron en favor de la Nación y en contra de las provincias, partiendo de los porcentajes de distribución fijados por la ley de coparticipación 23.548.

El principio de neutralidad de los impuestos establece que en una economía en la que existe equilibrio general con una equitativa distribución del ingreso entre los empresarios y los asalariados y entre la Nación y las provincias, los impuestos deben ser neutros y no influir para que se destruya ese equilibrio.

Lo expuesto importa decir implícitamente que cuando no existe ese equilibrio, el sistema impositivo como instrumento de política económica debe dejar de ser neutral para discriminar en favor de alguno de los sectores, a efectos de restablecer el equilibrio y no agravar la situación.

Daré a continuación algunas conclusiones contenidas en el informe elevado por la Comisión Federal de Impuestos a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con motivo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En uno de sus párrafos, se expresa: "Debe consignarse la incertidumbre que sobre la magnitud y la regular percepción de los recursos coparticipados por las provincias arrojan las modificaciones que se introducen en la estructura tributaria nacional". Y acompaña una planilla demostrativa de la que surge que además de las distorsiones producidas por las reformas anteriores, en el caso de que se hubiera sancionado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la Nación participaría con el 63,7 por ciento de los recursos coparticipables y las provincias sólo con el 36,3 por ciento, lo que está muy lejos de los porcentajes establecidos por la ley 23.548.

Esto demuestra que el proyecto aludido no hubiera sido nuestro sino que discriminaba en favor de la Nación.

El señor ministro de Economía señaló en la Cámara de Diputados que en 1991 las provincias

recibieron dos mil millones más que en 1988 y que si se anualizaba lo recaudado durante el último trimestre de 1991, en 1992 recibirían alrededor de cinco mil millones más que en dicho año. Pero esas cifras absolutas no invalidan la distorsión de la proporción que debe existir entre ambas jurisdicciones de acuerdo con la ley 23.548.

La distribución que el artículo 40 del proyecto de ley que sancionaremos hace del 16 por ciento del producido del impuesto a las ganancias para ser aplicado a obras de infraestructura básica social, significa una nueva discriminación en contra de todas las provincias, excepto la de Buenos Aires, con lo cual se afecta el principio de neutralidad, ya que en esa carencia de estructura básica social casi todas las provincias tienen bolsones de pobreza similares a los de Buenos Aires, como bien lo han destacado los señores diputados preopinantes. Mientras esta última recibe un 10 por ciento de la asignación destinada al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales, el resto de las provincias recibe sólo un 4 por ciento.

Quiero aclarar mi pensamiento. No es que ignore la situación del cordón que circunda a la ciudad de Buenos Aires sino que, por el contrario, acepto que ella pueda superar la responsabilidad de la propia provincia y afectar al orden nacional debido a la magnitud de la población allí estacionada, con sus consiguientes problemas. Es decir que en alguna forma y en alguna ley pueda admitirse una consideración especial con respecto a la provincia de Buenos Aires en esta materia. Los señores senadores representantes de las provincias no podemos negar de manera absoluta dicha consideración, ya que nos inspira junto a un sentimiento local una responsabilidad nacional como argentinos. Pero lo que estimo es que resulta excesivo ese 10 por ciento para Buenos Aires, que rompe el principio de neutralidad al que ya aludimos, en comparación con el 4 por ciento para el resto de las provincias argentinas, que también pueden aducir una considerable magnitud de población que padece de una real carencia de infraestructura básica social.

El señor senador Posleman, en una exposición que me pareció contundente, también ha expresado objeciones de tipo constitucional, que comparto. Es evidente, como bien destacó, que esta norma tiene una categoría que no puede infringir una ley convenio como es la de coparticipación federal. Por lo tanto, sin dejar de admitir ciertos problemas que existen en la provincia de Buenos Aires e incluso nuestra voluntad de ayu-

darla, no puedo aceptar este camino que sin duda es impugnado desde el punto de vista constitucional.

No quiero entrar en una vieja polémica que tenemos con los señores senadores representantes de Buenos Aires, que cumplen cabalmente con sus funciones, porque si bien es cierto que ellos pueden aducir —y así lo hacen— que tienen en esos conglomerados urbanos que circundan Buenos Aires, el aporte físico de hombres y mujeres provenientes de otras provincias, discutir esto sería volver a insistir en un viejo tema. Me refiero a qué está primero: el huevo o la gallina. Porque si realmente fuéramos a analizar la génesis de ese conglomerado urbano que viene a buscar diversión, pero esencialmente el pan que no pueden obtener de partes más empobrecidas del país, tendríamos que entrar en un estudio más profundo, hasta de raíces históricas y pensar que esos hombres y mujeres no han venido a buscar diversión sino el pan.

Sr. Cass. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Brasero). — Ruego al señor senador que se dirija a la Presidencia.

Sr. Cass. — Con el permiso de la Presidencia, ¿me concede una interrupción?

Sr. Aguirre Lanari. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Brasero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: dije que venían a buscar trabajo, que quizá no tenían una vida digna y tal vez podían conseguir un poco de diversión. Específicamente, no me referí a que venían a buscar diversión sino a que como tal vez no podían conseguir vida digna, un poco de trabajo, entonces tal vez tenían un poco de diversión que no conseguían en sus provincias.

Sr. Aguirre Lanari. — Vuelvo al tema del huevo o la gallina, señor senador. ¿Por qué vienen a buscar trabajo? Porque en sus provincias no lo encuentran. ¿Y por qué no lo encuentran? Porque esas provincias están sufriendo una malformación del país como consecuencia, en buena parte, de muchas circunstancias que han hecho más atractiva la vida en este sector privilegiado del país que es la provincia de Buenos Aires y la pampa húmeda.

Entonces, no insistamos en una hipertrofia de esta cabeza en la República Argentina. Y lo digo con sentimiento argentino; lo acabo de mencionar. Soy senador de la Nación antes que representante de una provincia. En la Nación,

nada hay superior a la Nación misma, como dijera alguna vez Nicolás Avellaneda.

Pero no creamos que debemos olvidar cuál es el origen de esta gran agrupación de gente que viene a vivir a Buenos Aires. Además, digamos otra cosa: que ellos no solamente reciben, sino que aportan su capacidad de trabajo, aportan las fábricas que han hecho la grandeza económica de este cordón de Buenos Aires, (...) maguer los problemas que indiscutiblemente existen.

Una nueva discriminación se hace en favor de la Nación cuando se asigna, de ese porcentaje del impuesto a las ganancias, un 2 por ciento para el refuerzo de la cuenta especial 550 — Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias. Y todos sabemos con qué grado de discrecionalidad ha sido repartido usualmente por parte del Ministerio del Interior el 2 por ciento que se sustrae de la coparticipación federal, de acuerdo con la ley 23.548. Considero injusto que ese 2 por ciento se entregue sin condición ni razón alguna al Ministerio del Interior, órgano que por su naturaleza y conformación es esencialmente político, por lo que es natural que se sienta presionado para responder a situaciones de índole política-partidaria. Alerto sobre esta circunstancia, dado que es vital que los comicios que se realizarán durante el corriente año y los sucesivos tengan real transparencia evitando que presiones económicas sobre el electorado puedan resultar decisivas en el resultado final.

Analizaré ahora otro de los principios anunciados, que es el de legalidad y razonabilidad.

Un sistema democrático y constitucional como el que establece nuestra Ley Fundamental busca la libertad y la dignidad del hombre. Es cierto, que, como decía Alberdi, toda constitución tiene una vocación política y que ella se traduce en una fórmula política por la que se organiza la conveniencia en una estructura social.

Pero esa vocación política y esa fórmula política tiene un contenido esencial que emana de la Constitución y que nos explica el porqué y para qué fue organizada jurídicamente la Nación.

Precisamente, el análisis más elemental de la Ley Fundamental pone de relieve que la finalidad de la Constitución es la libertad y dignidad del hombre, y que todas las cláusulas constitucionales apuntan a ese objetivo, garantizando la libertad mediante la limitación y el control de aquellos que ejercen el poder. Por ello, todas las cláusulas constitucionales responden a ese noble propósito, y por aplicación del artículo 31 todas las leyes reglamentarias de las libertades constitucionales deben estar encaminadas a la concre-

ción de esa finalidad y jamás hacia el cercenamiento arbitrario de los valores y principios que dignifican la condición del ser humano.

Si ésta es la finalidad de la Constitución, todas las leyes que dicte el Congreso deben defender al ciudadano frente a los posibles abusos y concentraciones del poder político. Y en la redacción de esas normas es necesario tener presente que los conflictos entre la libertad y el interés del gobierno siempre deben ser resueltos haciendo prevalecer a la primera porque, como enseña Linares Quintana —cito textualmente—, "no se concibe que la acción estatal manifestada a través de los cauces constitucionales pueda resultar incompatible con la libertad, que es el fin último del Estado".

Tales principios son aplicables en todas las áreas regladas por el derecho y sin excepción alguna tanto en materia penal, como en lo civil, comercial, laboral y por supuesto también en lo fiscal. Las leyes fiscales, por más que apunten a obtener los medios y recursos razonables que necesita el Estado para el cumplimiento de sus fines, jamás pueden llegar al exceso de coartar arbitrariamente las libertades del hombre, desconociendo las garantías básicas que le confiere la Constitución.

Me refiero con estas reflexiones a las modificaciones que en el título V del proyecto se introducen a la Ley de Procedimientos Tributarios, número 11.653, a la que también han hecho referencia oradores que me precedieron.

En dicho título se establecían en el proyecto del Poder Ejecutivo presunciones y ficciones para la determinación de oficio del impuesto y en virtud de las cuales resultaba, por ejemplo, que con los datos de un día se podían establecer conclusiones válidas para cinco años, sin admitir prueba en contrario. Felizmente la Cámara de Diputados ha modificado estas presunciones y ha dispuesto que lo son salvo prueba en contrario y teniendo en cuenta la estacionalidad de la actividad del rubro de que se trata.

Con respecto al contenido del artículo 29 me permitiré recordar lo que expresaba el Colegio Público de Abogados, el cual entiende que —cito textualmente—: "aun haciéndose cargo plenamente de la necesidad fiscal de recursos" todas las presunciones y ficciones que en este capítulo se hacen deben ser rechazadas, y "se atreva a vaticinar que han de ser menos eficaces para alentar la mejor conducta del sector contribuyente que lo que sería una acción eficiente y sostenida de los cuerpos verificadores actuando no en la arbitrariedad sino conforme a derecho".

Termina su presentación el Colegio Público de Abogados diciendo lo siguiente: "es incontestable el derecho del legislador a desatar las manos del organismo fiscalizador y a dotarlo de las atribuciones que le permiten capturar la realidad para, en función y con apego a ella, determinar las obligaciones fiscales de los contribuyentes".

Un adecuado régimen de presunciones puede servir a dicha finalidad tal cual se hace en todos los países del mundo, pero debe tratarse de presunciones *hominis*, que permitan al juzgador, y en su caso al inspector, la utilización de su razonamiento lógico para fijar la medida del hecho imponible, vinculado con las reglas de la sana crítica, y fijando los marcos dentro de los cuales debe moverse el funcionario. Si la autorización va más allá de lo que es razonable se torna arbitraria y se aparta de la realidad, afectando garantías constitucionales sustantivas del afectado. Porque como bien ha dicho Bidart Campos, "todo lo que no es razonable es inconstitucional".

Agrego, señor presidente, que la disposición que se proyecta desconoce las debidas garantías del proceso legal contenidas en el artículo 18 de la Constitución. Esa norma prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales, la aplicación de sanciones sin previo proceso judicial y la intervención de funcionarios con poder jurisdiccional que no integren el Poder Judicial de la Nación.

El concepto de comisiones especiales es amplio, y tal como lo expresaron González Calderón y Segundo Linares Quintana no solamente son comisiones especiales "aquellas que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo designaran para conocer y juzgar en casos determinados, sino también las personas que el Poder Ejecutivo nombra por sí mismo, sin llenar los requisitos constitucionales o legales, para ejercer la función de administrar justicia".

Es cierto que han sido admitidos los llamados tribunales administrativos, pero también es cierto que la validez de sus actos está condicionada y suspendida a su posterior control judicial suficiente.

Ello significa que la ejecución de las sanciones que eventualmente apliquen esos tribunales deben ser susceptibles de revisión judicial y antes de que se hagan efectivas. Porque si la revisión judicial de la sanción se opera después de su cumplimiento, la cuestión se torna abstracta y la libertad particular involucrada en el caso no podrá ser reparada.

La norma que cuestiono faculta a la autoridad administrativa para disponer la clausura de establecimientos desde 3 a 10 días.

Se trata de una sanción que se hace efectiva antes de su control judicial porque la apelación ante la Justicia es concedida con efecto devolutivo y además porque se le prohíbe al juez interviniente disponer su suspensión mientras se sustancia la apelación. En la práctica, aplicada la sanción por la autoridad fiscal, se dispone inmediatamente la clausura del establecimiento a pesar de que la sustanciación del recurso de apelación supera holgadamente el plazo de 10 días, con lo cual si llegara a dictarse una sentencia favorable al recurrente éste será declarado exento de cumplir una pena que ya habrá cumplido. Semejante solución es manifestamente irrazonable y arbitraria y como tal inconstitucional, ya que la Ley Fundamental jamás tutela la arbitrariedad y la irrazonabilidad.

Pero además la norma que impugnamos propicia que los mal llamados "jueces" administrativos no es necesario que reúnan los requisitos exigidos por el segundo párrafo del artículo 10 de la ley 11.653. Ese artículo establece que tales funcionarios deben ser abogados o contadores públicos. En su defecto, y en casos excepcionales, se autoriza al Poder Ejecutivo para designar funcionarios que no tengan aquellos títulos universitarios, siempre que tengan una antigüedad mínima en el organismo de 15 años y que se hayan desempeñado durante los últimos cinco años en áreas técnicas o jurídicas. Además, el artículo 10 exige que en este último caso y previo al dictamen de una resolución, se requiera dictamen del servicio jurídico.

Se trata de garantías que la ley otorga para compensar la intervención de funcionarios ajenos al Poder Judicial, garantías que son irrazonablemente suprimidas por el proyecto en perjuicio del derecho al debido proceso legal que tienen los administrados.

En segundo lugar, aunque no en orden de importancia, la norma que comentamos lesiona el principio de la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 18 de la Constitución.

Dice Segundo V. Linares Quintana que "el principio de la inviolabilidad del domicilio considera a la libertad personal proyectada alrededor de la persona física, para alcanzar a integrarse en el ambiente, con el derecho a disponer de las cosas de inmediata utilidad". El concepto constitucional del domicilio tiene un alcance mayor que el domicilio contemplado en el Código Civil, ya que no abarca solamente la morada o el

hogar de la persona sino, como bien señala Germán Bidart Campos, comprende también el "vehículo que sirve de morada, habitación en un hotel, camarote de un barco o ferrocarril, escritorio profesional, etcétera, sea en su parte principal o en sus accesorias".

Es también, como decía Sebastián Soler con referencia al artículo 150 del Código Penal, todo local "destinado al desarrollo de una actividad determinada, de naturaleza comercial, científica o artística, aunque no sea constantemente ocupada, y su empleo sufra las interrupciones propias de un horario, como ocurre con los escritorios, laboratorios, talleres, fábricas, tiendas, confiterías" y sin que interese que el acceso del público a esos lugares sea libre o relativamente libre".

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Todos esos ámbitos integran el concepto constitucional del domicilio y por ende no pueden ser objeto de clausura sin orden previa de un juez competente del Poder Judicial.

Sin embargo, el artículo que cuestionamos faculta a simples empleados administrativos a disponer la clausura de establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Se trata de una disposición que supera ampliamente el marco de razonabilidad que prescribe el artículo 28 de la Ley Fundamental. Es que si la Constitución, condiciona en su artículo 18 el allanamiento y ocupación del domicilio a una intervención judicial, porque la única autoridad competente para allanar domicilios es la judicial, con mayor razón se impone esa intervención judicial cuando se trata de la clausura de un local sin que existan razones de higiene o salubridad que autoricen a prescindir de esa intervención.

Es cierto que lamentablemente el domicilio y otros derechos del hombre han ido perdiendo el respeto que merecen; pero ello no significa que debamos claudicar frente a los embates que diluyen el debido respeto a la persona humana. Se impone, entonces, el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que luego no les imputemos a ellas las consecuencias vejatorias para la condición humana que son fruto del apartamiento de ellas.

En homenaje a la brevedad, voy a pasar por alto otras citas que tenía preparadas del Colegio Público de Abogados y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que ratifican la impugnación que vengo sosteniendo.

Solicito pues que se inserte el texto correspondiente a esta altura de mi exposición.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción es el siguiente:

**Sr. Aguirre Lanari.** — En resumen, señor presidente —y vuelvo a citar al Colegio Público de Abogados— "lo censurable es que se lo hace a costa del debido proceso formal y sustantivo que la Constitución garantiza. De este modo se pretende enervar la acción de la justicia que hasta ahora, cuando podía actuar antes de que se materializaran las clausuras, en la inmensa mayoría de los casos las invalidó sistemáticamente. Ahora, con la nueva disposición, la sentencia judicial se dictará cuando ya el daño ha sido consumado, y será a lo sumo nada más que una reivindicación póstuma para quien indebidamente haya sido clausurado".

Y termina el Colegio de Abogados diciendo: "los funcionarios en cuyas manos se pone esta verdadera arma mortífera no deberán ser contadores, ni abogados, ni ser designados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y a propuesta del director general, ni tener 15 años de antigüedad ni haberse desempeñado por lo menos durante 5 años en áreas técnicas o jurídicas del organismo, ni requerir dictamen jurídico previo ni nada. Cualquiera podrá ser juez administrativo a estos gravísimos fines, y ello nos parece altamente riesgoso".

Cito ahora al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

"El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su disconformidad y profunda preocupación con motivo del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo propiciando la reforma del procedimiento tributario.

El citado proyecto, al disponer la aplicación por funcionarios administrativos de la pena de clausura a los establecimientos comerciales, industriales o de servicios sin la previa intervención de la autoridad judicial, constituye una flagrante violación de las reglas del debido proceso legal y de la inviolabilidad del domicilio, que conforman la esencia de la estructura jurídica constitucional.

Si bien las leyes impositivas deben agilizar los procedimientos para hacer más efectiva la lucha contra la evasión fiscal y la concreción de los medios y recursos razonables que necesita el Estado para el cumplimiento de sus fines, jamás pueden llegar al extremo de coartar arbitrariamente las libertades del individuo desconociendo las garantías básicas que les confiere la Constitución Nacional.

Por tales razones, el Colegio de Abogados reitera la exhortación pública a las autoridades para que revisen el contenido del proyecto de ley suprimiendo aquellas disposiciones reñidas con las garantías y principios que consolidan la vigencia real del estado de derecho.

"Finalmente en cuanto al principio de equidad diré que resulta violado durante siete años por más por el impuesto a los activos a que se refiere el título II del proyecto de consideración. El artículo 16 de la Constitución Nacional, dice en su última parte que la 'igualdad es la base de los impuestos'. Este principio no significa, según reiterada jurisprudencia de la Corte, que todos los habitantes de la Nación tienen que pagar el mismo impuesto, sino que deben pagar el mismo impuesto todos aquellos que están en igualdad de condiciones, que tienen igual capacidad contributiva. Según el ilustrativo ejemplo que se ha dado en la Cámara de Diputados, pagarían, de acuerdo con este impuesto a los activos, que no considera la deducción de los pasivos, a la misma suma El Hogar Obrero, que está en quiebra, y la Joyería Ricciardi, que podría tener el mismo monto de activo pero ningún pasivo, lo que no sucedería en el caso de haberse mantenido el impuesto al patrimonio neto y el impuesto a los capitales, que fueron derogados en el año 1989."

Señor presidente: consecuente con la posición sustentada por los diputados de mi partido que integran el interbloque de la Cámara de Diputados, voy a votar favorablemente en general este proyecto porque estimo, como lo estimaron ellos, que resulta vital, más que nada por propósitos fiscales, para atender las urgencias económicas del Estado y para evitar que naufrague un programa económico que, con disidencias o no, todos los argentinos tenemos interés en que resulte victorioso, evitando el caos que podría originar su fracaso.

Votaré entonces favorablemente en general, manteniendo las disidencias en particular sobre los aspectos puntuales que acabo de exponer.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro, de la bancada de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Mazzucco.** — Señor presidente: si no fuese porque tengo algunos importantes interrogantes, no haría uso de la palabra dado lo avanzado de la hora y la preocupación por el quórum.

Me pregunto, señor presidente, si el proyecto que discutimos es el mismo que mandó el Poder Ejecutivo nacional, si hay coherencia entre la política explicitada por el gobierno y la que se

instrumenta con esta reforma. ¿Cuál es la relación entre la reforma tributaria y el modelo económico? Aceptada la estabilidad como un bien deseado y adquirido, aunque todavía no consolidado, ¿qué sucederá con la inversión? ¿Mejorarán las posibilidades de crear riqueza y puestos de trabajo con esta reforma? ¿Coincide el espectáculo de la economía formal de la estabilidad con la economía real de la producción? Frente a estos interrogantes nosotros afirmamos que si la economía formal no coincide con la economía real, antes o después la estabilidad se derrumba y eso es lo que no queremos.

Pero uno se pregunta qué pasó con el mensaje y proyecto 2.540 de diciembre pasado, remitido por el Poder Ejecutivo, que introducía modificaciones en el sistema impositivo y en el régimen de procedimientos tributarios. Por un lado, creaba el impuesto a las ganancias distribuidas o consumidas, concentrando la materia imponible con el criterio de promover las inversiones y de otorgar al trabajo personal un mejor tratamiento, con una alícuota general del 20 por ciento, con deducciones, con mínimos no imponibles y cargas de familia, posibilitando computar como pago a cuenta el aporte jubilatorio obligatorio.

Por otro lado, se creaba el IEPE, una novedad tributaria. Veamos qué efectos tenía este nuevo impuesto. Para la Nación, reemplazaba la contribución previsional aportada por los empleadores; para las provincias, reducía el nivel de imposición en ingresos brutos, impuestos inmobiliarios y específicos. Como contrapartida, las provincias recibían el 10 por ciento de lo recaudado para sus cajas de previsión.

El balance para las provincias, excepto para la de Buenos Aires, era negativo. Los sectores que iban a resultar afectados inicialmente eran: la pequeña y mediana empresa, los profesionales, el agro y las industrias con escaso empleo de mano de obra.

Hasta aquí es lo que podemos resumir como contenido de ese proyecto inicial del Poder Ejecutivo. Veamos ahora qué pasa con el trámite que ha seguido este asunto.

Frente al envío en término al Parlamento del Presupuesto Nacional para este año, hecho auspicioso, se remitió de inmediato una propuesta para introducir reformas de fondo al sistema de ingresos. Tomemos en cuenta, por otro lado, que al ser el IEPE un impuesto novedoso tenía cierto grado de imprevisibilidad, cuyo eventual costo recaería sobre el sistema previsional aun en el caso de la reforma que se introdujo y por la que se mantenían los aportes durante 1992.

Sabemos que la experiencia de la eliminación de aportes no ha sido buena. Nos inclinamos por maximizar el actual régimen antes que intentar una nueva e incierta vía.

Advertimos también que en esta reforma se discriminaba contra las empresas de capital intensivo y de nueva tecnología. Por último, el IEPE contradecía la necesidad de unificar sistemas tributarios con vistas al Mercosur.

Lo cierto es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados introdujo al proyecto reformas de tal magnitud que en definitiva el Poder Ejecutivo retiró del proyecto originario los apartados correspondientes al impuesto a las ganancias distribuidas, dispuestas o consumidas y al impuesto sobre el excedente primario de las empresas, el IEPE.

El Poder Ejecutivo dijo que con esta reforma no pretendía más ingresos; sólo buscaba reemplazar el aporte patronal, sosteniendo que la reforma era neutra, que se pretendía bajar los costos laborales, aumentar las inversiones y no continuar con el impuesto a las ganancias tradicional sino con el que gravaba las ganancias distribuidas o consumidas.

En fin, frente a estas contradicciones y considerando que estamos frente a una reforma más de las tantas que hubieron en estos últimos años, es preocupante en términos de seguridad jurídica y de previsibilidad para los posibles inversores esta nueva propuesta de reforma tributaria. Esto tiene el agravante de que se nos dice al oído que en dos o tres meses más el IEPE puede volver.

Es así que mientras la Cámara de Diputados cree estar legislando en materia impositiva, desde el Ministerio de Economía se habla de neutralidad y se termina aumentando en dos puntos la tasa del IVA.

En resumen, lo que se necesita son más recursos para cerrar cuentas fiscales. Entonces, se trata de un problema fiscal y no de una reforma neutra desde lo fiscal y superadora en favor del crecimiento, como se ha dicho.

¿Qué dice al respecto la pequeña empresa? Que se aumenta en dos puntos la tasa del IVA, y también se aumenta la tasa del impuesto a las ganancias.

¿Qué dice el consumidor? Las estadísticas oficiales demuestran cómo se consumió en un trimestre la hipótesis anual de inflación.

Señor presidente: uno puede pensar que frente a estas circunstancias, la política de privatizaciones y la política tributaria tienen solamente una mira fiscal. ¿Qué pasa con el creci-

miento? Sólo hay respuesta para el equilibrio del Tesoro. El resultado se mide en términos de superávit primario mensual y la balanza comercial, el índice de actividad y la ocupación parecieran ser términos secundarios para Economía.

El equilibrio fiscal es necesario pero no suficiente. Sólo se mantiene en el tiempo si se genera la riqueza que permita detraer el impuesto. Lo contrario es espejismo contable.

Este es un punto de filosofía económica que debemos discutir en cada momento. Una reforma fiscal sirve si además de incorporar los recursos necesarios observa la necesidad de invertir, redistribuyendo los fondos para apoyar el esfuerzo exportador, cubriendo la deuda social que la Argentina tiene, que es grande y pesada.

En la secuencia de los hechos alrededor del trámite de este proyecto de ley vemos que cuando el intento reformista fracasó se vuelve al denostado impuesto a las ganancias, que lo lleva al 30 por ciento como tasa unificada y se limita la deducción por quebrantos.

Ya no se habla de reforma neutra, como en diciembre, y el sesgo inversor invocado queda postergado. Ahora el tema es fiscal. Hay que recaudar más.

Se deja en pie el impuesto a los activos, en mi opinión totalmente regresivo. Lo acaba de remarcar el señor senador por Corrientes: los activos no reflejan el estado real de las empresas. Estas, sobre todo las medianas, las del interior, las que no forman el gran conglomerado de grandes empresas nacionales, de holdings, de multinacionales, tienen patrimonios muy reducidos, activos grandes y a veces técnicamente revaluados para que no se les dé vuelta el balance, con pasivos que casi los igualan, y tienen que pagar impuestos sobre esos activos. En mi provincia una planta importante acaba de despedir a trescientos obreros porque aumentó el insumo eléctrico, se está produciendo dumping con las importaciones de su producto terminal, el tipo de cambio no la favorece y ha pagado en el último año 25 millones de dólares de impuesto a los activos.

Este impuesto se establece por diez años y esto agrava la situación porque pensábamos que su vigencia iba a terminar en el año 1993, cuando finalizara la vigencia del impuesto a las ganancias.

Por otra parte, el valor mínimo no imponible de diez mil pesos es en mi opinión absolutamente insuficiente y casi ridículo, porque quienes tienen menos de cien mil pesos de capital prácticamente no existen en lo que hace a

capacidad contributiva y lo que se logra es complicar al productor y a la Dirección General Impositiva.

El impuesto a las ganancias incorpora un impuesto a la renta mundial, respectivamente, que ya se ha hablado y no vamos a insistir ahora. Además se admite un blanqueo, que tampoco vamos a objetar. Pero creemos que aquellos que mal o bien tienen el negro en nuestro país merecerían el mismo trato que aquellos que el negro lo tienen fuera de la Argentina.

Señor presidente: estamos en presencia de un aparato tributario que huele a prehistórico, porque supone una administración que no está tecnológicamente avanzada y recurre a presunciones que imponen una relación fisco-contribuyente inadecuada, incrementando la alícuota del impuesto a las ganancias, prolongando por diez años el impuesto a los activos y evaporando el crédito por quebranto impositivo. Este aparato fiscalista que devora riquezas, que no tiene una sola mirada para contribuir a crearlas, tiene un punto en común, tanto con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo como en el aprobado en Diputados: que se viola la ley de coparticipación, como ocurrió con la transferencia de escuelas a las provincias.

Un punto aparte merece, y no dudamos de la necesidad —por algo está esta noche aquí presente el gobernador de la provincia, trasnochando junto a nosotros—, la cuestión del conurbano bonaerense, que es un problema nacional y lo asumimos como tal. Pero también lo son los conurbanos del Gran Rosario, del Gran Córdoba o el Gran Mendoza, por ejemplo. Y, como representante de una provincia patagónica, quiero decir que también la Patagonia es un problema nacional. La Patagonia tiene pobres, nuevos pobres y los que se están empobreciendo. Y si atacamos las consecuencias pero no las causas el conurbano bonaerense seguirá necesitando recursos especiales cada vez mayores y el interior del país será quien los provea.

Por estas razones, quiero dar mi voto favorable para que la provincia de Buenos Aires tenga sus recursos, pero espero que sea la última vez que tengamos que hacerlo porque lo que necesitamos es crear fuentes de riqueza en las provincias, viviendas, brindar salud y educación para que no venga más gente nuestra a engrosar los cordones de miseria del Gran Buenos Aires. Este es el signo trágico de los países pobres: capitales con centros ricos y conurbanos miserables. Ese es el país que no queremos.

No quiero abundar en más palabras, señor presidente. Simplemente debo decir que esta si-

tuación anómala no debe repetirse, que el país es uno y único y que va desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Vaya la excepción por esta vez, pero por el bien del país procuremos que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Hay que crear fuentes de trabajo y ser un país creíble y confiable para que vengan capitales de adentro y de afuera para invertir aquí y crear riquezas con el fin de que ellas sirvan para un desarrollo armónico de la Argentina.

Debemos terminar con las concentraciones, con las desigualdades, con el centro y la periferia porque nuestra lejana Patagonia está cada vez más lejos. Cada vez mandamos a Buenos Aires más electricidad, más gas y más petróleo, no obstante lo cual estamos peleando para que no se levante una línea ferroviaria que atraviesa la meseta patagónica de la cordillera al mar porque no es rentable. Y ése, señor presidente, también es un problema nacional.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señor presidente: este cuerpo ya ha debatido largamente este proyecto de ley que enmarca una reforma impositiva.

Después de que a fines del año pasado desde altos niveles de la conducción económica se nos dijera que estábamos ante la última reforma impositiva, ahora nos encontramos con una nueva. Luego de que se dijera que el IEPE era el moño que cerraría definitivamente nuestras cuentas, se lo retiró. Después de que se descartara la imposición a las ganancias el impuesto reaparece con más dureza y vigor.

Pareciera que la estrategia fiscal para crecer no aparece y que la inteligencia del impuesto como arma de equilibrio recaudador y distributivo sigue derrotada por nuestras urgencias, compromisos y crisis.

Ya son demasiados los años que llevamos sin marcar un perfil en el campo tributario.

Recuerdo que me tocó hablar por el radicalismo en 1973 cuando se votó aquí en el Senado la primera ley del IVA. Dije que el radicalismo no votaría jamás una ley de ese tipo que fijara un porcentaje superior al 9 por ciento. La crisis y la situación de urgencia por la que atravesamos nos llevó a votar la que estableció dicho impuesto en el 16 por ciento, aun cuando votamos en contra del 18 por ciento.

Es así como podemos estar sancionando leyes respecto de las cuales los técnicos no saben decirnos con certeza cuánto se va a recaudar. ¿Qué significa este tipo de ley desde el punto de vista de la perfección del funcionamiento presupues-

tario? Generalmente un impuesto debe definir dónde queremos apretar y dónde vamos a aflojar; el impuesto debe definir casi una concepción política, pero aparecemos desbordados por las crueles necesidades del momento y se ha insertado en el proceso un laberinto de marchas y contramarchas. Esta es nuestra realidad.

La situación me preocupa porque a veces son enviados proyectos y algunos altos niveles del gobierno manifiestan que si los mismos no son aprobados estaríamos casi conspirando contra el éxito del plan. ¿Quién de nosotros puede no querer el éxito de un plan que sirva a la Nación? En el fondo, todos tenemos un común denominador en nuestra búsqueda, pero a veces se nos quiere hacer aparecer como culpables de no votar en forma afirmativa un determinado proyecto.

Por encima de todas las cosas nosotros queremos, a nuestra Nación y deseamos ser constructivos con nuestra contribución. Pero las improvisaciones o algunas cosas demasiado montadas hacen que se conspire contra nuestra propia actitud republicana.

Se habla siempre de reforma tributaria pero en ciertas ocasiones, ante esta situación, aparece un círculo vicioso en el que pareciera que el ministro sólo piensa y se imagina cómo recaudar más para custodiar nuestros compromisos.

Hoy ya se habló bastante del IEPE y del impuesto proyectado a las ganancias distribuidas, que fueron retirados de la iniciativa originaria por la oposición suscitada fundamentalmente en algunos sectores empresarios. El otro día leí una declaración de APYME, entidad que agrupa a los pequeños empresarios, comentando la sanción de la Cámara de Diputados como un lobby de las grandes empresas en contra de la presión fiscal y proponiendo que el mínimo no imponible en el IEPE sea aumentado de tres mil a veinte mil dólares.

Ahora se anuncia que el IEPE puede volver. Espero que venga montado con un tipo de política que aliente nuestro propio crecimiento.

La recaudación ha aumentado en marzo; los impuestos coparticipados aumentaron y los no coparticipados también. El IVA, impuesto por decreto a partir del 1º de marzo se destaca en este panorama y también avanza el impuesto a las ganancias, como hace un rato lo señaló el señor miembro informante.

Pero a la luz de la calidad y costo de vida se nota que existe una presión inflacionaria.

A nivel oficial se admite por el propio IVA, por las nuevas facturas, etcétera, lo que en al-

guna medida puede conspirar contra las inversiones que el país realmente necesita.

Aquí ya se habló de la estructura del proyecto, que en síntesis — para no seguir repitiendo — es la modificación de la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades, que pasa del 20 al 30 por ciento; para las personas físicas continúa en la actual escala progresiva. También se encuentra el impuesto a los activos, cuya conformación genera interrogantes muy dudosos, pues conspira contra la filosofía de los partidos políticos populares y nacionales que creen que el impuesto debe ser siempre aplicado con un criterio de mejor distribución.

En el proyecto se habla de los que tienen bienes en el país y en el exterior: de la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera y demás bienes en el exterior. En cuanto a ésta, podrán traer hasta 500.000 dólares en cuatro años. Acá tenía anotado que los fondos se podían depositar por lo menos 90 días en un banco que se comprometiere a prestarlos, pero creo que el señor miembro informante habló de un término de 180 días.

Se reafirma la vigencia de la exención a los medios de comunicación y se amplían — aquí tengo un interrogante — las facultades de la Dirección General Impositiva para clausurar comercios. Cuando se dictó el decreto desregulador quedó sin desregularse un artículo en la ley de abastecimientos, que era el referido a la autoridad para cerrar los comercios. Yo también hubiera querido que quedaran otros "artículos" flotando, porque hubieran servido para defender las producciones regionales, que en este momento están bastante deterioradas por la famosa desregulación y algunos de sus colaterales.

Este artículo quedó y es el que se estuvo aplicando para clausurar los comercios. Ahora en alguna medida creamos esa facultad al margen de la ley de abastecimientos, y esto tiene sus riesgos, porque en un país que tiene una corrupción generalizada como el nuestro, quizás en lugar de hacer las cosas bien se hagan mal.

Tengo una preocupación y es que todo lo que sea nuestro desarrollo político crea consecuencias sociales. En el campo de las instrumentaciones de la economía también nosotros creamos consecuencias sociales.

Aquí se ha dicho que del conjunto de medidas se destaca la elevación de la alícuota del impuesto a las ganancias, que apunta a destinar fondos especiales a las provincias de la Tierra del Fuego y de Buenos Aires. No formulo críticas respecto de este objetivo. Sin embargo, no

puede obviarse el hecho de que ese tipo de situaciones se repiten hoy en todo el país, manifestándose muy especialmente en el noroeste y el nordeste. Aquí también hay muchos pobres, más que en la Patagonia; hay un marginamiento que seguramente nos duele a todos.

En una palabra, no debe pensarse que la insensibilidad social puede llevar a negar la necesidad de fondos para el conurbano, pero la aplicación de medidas de la forma en que se lo viene haciendo implica, de algún modo, un desmedro para muchas otras provincias con iguales problemas. Lo que debemos hacer es buscar cómo todos los habitantes, ya sean del conurbano, del norte o del sur, tengan algún tipo de ingreso que les permita salir del marginamiento.

Este hecho aparece tal vez como una paradoja si se piensa que en algunas provincias no existe ningún tipo de acción social institucional con fuentes autónomas que satisfagan algunas necesidades básicas. Y tenemos un Estado algo vacío, prescindiendo a lo mejor, no en su sensibilidad sino en función de nuestra propia crisis, apareciendo con cierta actitud social desactivada por carencia de fondos.

Frente a esto podría recordar la ley 23.767, la famosa ley de políticas sociales comunitarias que fue aprobada en 1990, y concebida con el fin de fomentar la autopromoción social y una gama de planes en donde el rol estatal no era de tipo paternalista, intervencionista, sino orientador de iniciativas grupales. Sin embargo, hasta la fecha esa ley no ha sido cumplida como lo pensábamos. Además, los fondos empleados y los destinatarios reales de ese conjunto aparecen en una nebulosa.

En síntesis, resulta difícil aceptar la espera, por parte de algunos distritos que tienen la misma urgencia que otros. De todas maneras, estamos en el marco de una sociedad con muchos problemas.

Los legisladores tenemos una obligación, tener un mínimo talento para que nuestra legislación sirva a esa concepción: que no votemos con criterio partidario, con actitud vertical. Es decir, miremos nuestra realidad. Este proyecto puede ser definido porque se está ubicando en una problemática con un desafío nacional de inserción internacional, en un ámbito saturado de dificultades.

• Iba a decir que se puso en marcha el IVA, que en alguna medida el incremento al 18 por ciento quita poder adquisitivo a la población. Al adoptar esa medida, las autoridades estimaron que ese mayor porcentual se trasladaría a los

precios; todos sabemos que hay un esfuerzo por parte del sector empresario, pero que hay un traslado a los precios, una inflación que está empujando y creando dificultades.

No voy a hablar mucho, pero quiero recalcar en mi idea original. Este es un proyecto que modifica impuestos y busca recaudación; que se debe insertar en una acción política global. Y esta acción repercute en la confianza, en la flexibilidad, en la propia respuesta de la sociedad.

El presupuesto se nos ha desactualizado frente a esta inflación de que hablaba recién, que aparece cumpliendo ya lo programado para el primer trimestre. El balance comercial está por resultar negativo, después de once años, y entiendo que aparece derrotado por una apertura que estimo salvaje, mirando el marco internacional que muestra el avance del proteccionismo y observando a las grandes naciones que son las que hacen proteccionismo, que cierran más sus puertas y cuidan a veces hasta minúsculos intereses.

En el diario de ayer se anunció que el presidente Bush se niega a impulsar una presión sobre algunos sectores industriales productores de los gases fluorocarbonados que lastiman más el agujero de ozono. Se llenan la boca con la defensa del medio ambiente y la ecología, pero cuando llega el momento privilegian el negocio y la circunstancia electoral por sobre la salud del género humano.

Estamos frente a esta realidad palpable. En la Ronda Uruguay del GATT trabajamos en sociedad con el grupo Cairns reclamando valores comunes. En otras oportunidades hicimos lo propio con los Estados Unidos frente a una Europa cada vez más cerrada que anuncia la posibilidad del negocio pero después lo anula.

Este es el marco internacional que a mí me preocupa. Los pueblos que en alguna medida parecen los socios de la acumulación son siete u ocho grandes naciones que tienen las tres cuartas partes del producto bruto mundial y dejan para los demás países las sobras. Se trata de países donde los tachos de basura de los grandes hoteles contienen manjares para el marginamiento. Pero llegado el momento, cuando hablamos de la posibilidad de un mejor ordenamiento, de una mejor distribución, se encogen y se cierran.

Pareciera que los países en vías de desarrollo no podemos avanzar. Días pasados el Brasil anunció que iba a contratar técnicos nucleares rusos, o sea, pertenecientes a uno de los países más avanzados en este tipo de tecnología. Tres



días después fue publicado en los diarios que los americanos, canadienses, japoneses y europeos habían creado un instituto de "Ciencia y Tecnología" en Bruselas para evitar que los científicos fueran al mundo en desarrollo, quedando contratados por los países ricos.

Es como si nos estuvieran pidiendo que paguemos, que seamos democratas y que podamos crecer pero no nos proporcionan ningún instrumento de los que necesitamos.

Los argentinos estamos buscando de buena fe cubrir algunos déficit. Criticamos aspectos de esta ley, pero ésta es la realidad del país en el que vivimos.

Quiero insistir en el problema social. El otro día escuché decir a un economista, frente a algunos ajustes, que el plan podía estallar si no se frenan las presiones sindicales. El plan siempre estalla cuando reclaman los pobres. Hoy lei en un diario de la mañana que el señor Lescano, nuevo secretario de la CGT unificada, decía que "el ajuste sigue sin equidad estalla el sistema."

Lo que necesitamos es una doctrina de recaudación, de ajuste, que no provoque un estallido ni para arriba ni para abajo y que permita custodiar un tipo de estabilidad que no sirva para enfrentarnos en un terreno de distribución que hoy es evidentemente perverso.

Por eso decía hace instantes que se necesita una política global que no esté basada en apuros de tipo partidario. En el país hay mucha gente que tiene apuro para comer, para estudiar, para producir.

Según la política global adoptada, los argentinos podrán confiar en las instituciones. El 67 por ciento de nuestra población cree que el Poder Judicial no es independiente y el 70 por ciento que hay una extendida corrupción. La sociedad necesita ver juzgados a algunos de los pecadores de nuestro tiempo.

No quiero ofender a nadie, pero en el Senado presenté un proyecto por el que solicito se suspenda la privatización de la Casa de Moneda, por respeto a los hombres. Pero ¡ciudad con las conductas colectivas! No creo que podamos privatizar la Casa de Moneda considerando a quienes están al frente de ella, porque han perdido credibilidad.

Una nación es como un cuerpo humano: tiene células y debe tener equilibrio, sus órganos sanados y en funcionamiento. Cuando algunas células no responden, vienen las inflamaciones.

Les puedo asegurar que el radicalismo quiere la estabilidad, el equilibrio y el vigor nacional pero tiene que haber un funcionamiento ade-

cuado para que no se cometan algunos pecados que creen las inflamaciones, en que alguna medida van a perturbar la estabilidad que estamos buscando. No puede ser que en la Cámara de Diputados la mayoría circunstancial no admita la existencia de una comisión bicameral para controlar el marco regulatorio del gas. Hay que pensar que no estamos legislando para las circunstancias actuales sino para una historia que a lo mejor no vamos a ver nosotros pero quizá nos pueden demandar nuestros hijos.

Recién hablaba en la peluquería con un señor senador que está aquí presente y le decía: "Cuidado, señor senador, Yacimientos Petrolíferos Fiscales es nuestra; es como la bandera; no es de un partido en particular". Ninguna empresa de hidrocarburos en Latinoamérica privatizó el manejo de su energía, en ese campo. Y le decía cordialmente y con todo respeto: "No sea cosa que mañana nuestros hijos nos digan que por culpa nuestra ellos viven con más necesidades que los jóvenes de nuestro tiempo".

He pedido —y termino con esto que está ligado a la recaudación, al déficit fiscal y a los superávits que tenemos que encontrar— que el ministro de Economía, que conoce muy bien el problema, tal vez más que nosotros, venga a este recinto a informar sobre lo que se está haciendo en todas las negociaciones del sector externo. Desde hace meses el país abre los diarios todas las mañanas y ve las ofertas y contraofertas de nuestros acreedores, nuestra propuestas, un ministro que viaja a todos lados y dos negociadores, que yo hubiera preferido que fueran políticos con calidad de estadistas y no banqueros. Un día le dije al presidente Alfonsín que no enviara banqueros a negociar la deuda porque en el fondo son medio primos hermanos.

Además, el artículo 67 de la Constitución dice que el Congreso tiene que controlar todo el problema del manejo de la deuda externa. Queremos saber de qué se trata porque algunas de nuestras inquietudes pueden servir para que el ministro diga, como algunos presidentes: "Tengan cuidado; no me aprieten porque esto no pasa en el Parlamento".

Tenemos que elaborar algún tipo de estrategia que haga al funcionamiento nacional y creo que esto es típico en el manejo de los países estables; me refiero a una relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo en la que se cuiden los intereses de la Nación y no el interés de la victoria del ministro.

Es importante que sepamos cuáles van a ser las circunstancias de la negociación. Ahora es-

tamos por conseguir el crédito de facilidades ampliadas. Esta es la antesala del Plan Brady. Fuimos a Japón a buscar dinero, para conseguir la masa con que pagar el ingreso al Plan Brady. Se tiene la idea de que el Plan Brady es la oxigenación para nuestra economía al disminuir los costos de la deuda externa y crear la posibilidad de crédito. Considero que un proyecto de ley que busca recaudar en una nación que está por comprometerse a pagar una cifra redonda anual de unos 3.500 millones de dólares a partir de su inserción en el Plan Brady necesita asegurarse de que puede pagar o modificar su propia estrategia.

No soy economista pero entiendo que en alguna medida —ésta es mi preocupación— estamos pagando entradas y salidas con más endeudamiento. Nos van a perdonar un porcentaje de la deuda, pero de allí en adelante si no pagamos vamos a la quiebra.

Pareciera que el modelo de nuestro ministro es México. Lo ha nombrado, ha ido a México. Ahora bien, México tiene una actitud geopolítica muy definida. Está asociado con los ricos. Entonces, cuidado. En 1982 México dijo que no pagaba la deuda, que no podía pagarla, y Estados Unidos modificó su política para atender la situación de México. Pero no modifica nada con respecto a nosotros. Nos dice que Ezeiza es inseguro, que no construyamos el misil, que no exportemos determinados productos y que mandemos barcos al Golfo. Nosotros ya mandamos barcos al Golfo, pero están hablando de que lo hagamos nuevamente, cuando esta guerra ya no tiene nada que ver con la Argentina, y cuando ha quedado demostrado que la guerra del Golfo fue para defender a las empresas petroleras y no para echar al dictador de Irak.

Actualmente estamos buscando la manera de arreglar la situación con los bancos del exterior a los que les debemos. Si el ministro está negociando para que paguemos intereses por nuestra deuda, que no se pagó, por un valor de 900 millones, o 700 millones, le pido que se ponga en superdure y no conceda más de 400 millones, porque hay que arreglar también la situación de los bancos provinciales. Estos están fundidos pero son una herramienta de trabajo, de producción y de crecimiento para distintas zonas del país. Entonces, vamos a conseguir miles de millones para los de afuera pero no podremos dar a los de adentro ni siquiera 50 millones para que puedan sembrar, trabajar y producir.

Recién me referí al caso de México. Tengo aquí una revista americana en la que se dice que de cada diez dólares ingresados a México ocho

son invertidos en el área financiera de alta liquidez. Esta es la consecuencia de las escasas inversiones en bienes físicos para poder retirarse apresuradamente del país si las circunstancias cambian.

¿Cómo están los países que ingresaron en el Plan Brady? ¿Qué pasa en Venezuela? Hace un año y medio que está dentro del Plan Brady. Casi existe unanimidad en reconocer que la apertura económica que aconseja el Fondo Monetario ha creado inconvenientes en todos los países. Allí donde se ha otorgado el crédito de facilidades ampliadas —Túnez, Polonia, y en Latinoamérica sólo Venezuela y México— las cosas no andan bien. Todo está ligado a un tipo de política que asegura un Estado que pueda pagar las deudas, pero que no se olvide de las necesidades del pueblo.

Recuerdo que en la reunión sobre deuda externa de Parlamento Latinoamericano dije que como se quiere cobrar no se va a poder pagar.

Lo que quiero es que podamos crear las condiciones para pagar; pero no sea cosa que por pagar a los de afuera sigamos formando esta caravana de empobrecidos en el norte y en el sur del país, a pesar de lo que pide el gobernador de Buenos Aires para el conurbano.

Por más que hagamos esfuerzos, si no hay un cambio estructural en el orden internacional, nos vamos a seguir endeudando porque no nos permiten capitalizarnos. Hay un mundo rico que se hace muy egoísta.

Ya que tenemos el Mercosur, avancemos en la comunidad económica y cuando América pueda sentarse toda junta —esto lo digo siempre porque estoy convencido de que la viabilidad de nuestros países pasa por allí—, vamos a poder definir propuestas planetarias que respeten nuestros intereses.

Si hubiera un Rey Midas que nos regalara todo el dinero que debemos, si se mantuviera esta estructura internacional con este orden casi unilateral que aparece en el mundo, a los pocos años seguramente estaríamos endeudándonos nuevamente.

Vamos a votar este proyecto para que sirva a la recaudación, pero no es justo. Por ejemplo, el impuesto a los activos representa una mala actitud.

Tenemos que conseguir 3.500 o 3.600 millones de dólares para poder pagar y creo que este año necesitamos un poco más de lo previsto. Hablé con el presidente de nuestro bloque y le dije que sería bueno que se nos explicara bien qué es lo que se busca porque el país quiere

saber qué va a pasar en el sector externo. Todo esto está ligado al esfuerzo que debemos hacer dentro de la propia Argentina.

Con la mejor intención y después de muchos años en que no ocurría, vino al Parlamento dentro de los plazos constitucionales el Presupuesto Nacional para este año. Pero resulta que en tres meses ya quedó fuera de programa porque la inflación prevista para todo el año se consumió en el primer trimestre.

Esto también le pasó al gobierno radical: se hizo un presupuesto con una previsión del 16 por ciento anual y al cabo de los primeros cuatro meses ya estábamos en el 40 por ciento. Veamos cómo corregimos esta situación, para que la estabilidad no dependa de factores que no controlamos, como son los factores que nos imponen desde afuera.

Pienso que la mayor recaudación impositiva debe ser la consecuencia del crecimiento de nuestra propia economía. Tenemos que planificar nuestro crecimiento y para distribuir hay que producir. Si no producimos, esto que nos cubre y nos ilusiona, la democracia, puede entrar en crisis porque no damos el pan, no damos los libros, no damos el techo que merecen nuestros propios pueblos.

Esto es lo que pienso acerca de este proyecto de la ley de reforma fiscal, que seguramente ha sido hecho con la mejor intención pero que a mí me llena de interrogantes. Advierto que estamos caminando sobre el mismo camino por el que antes fracasamos.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a proceder a la votación.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Cuando iniciamos este tema, votamos en primer término su tratamiento sobre tablas. Inmediatamente después se lo puso en consideración y se dio por aprobado en general. Pero como tal vez estábamos distraídos en ese momento y para que no quede ninguna duda al respecto, solicito que se vote nuevamente en general, de manera que todo el trámite sea cristalino.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — Como hay asentimiento, se va a votar en general el proyecto de

La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en particular.

Si hay asentimiento de los señores senadores, se va a votar por título. El señor secretario indicará los artículos que comprende cada título y los señores senadores harán las observaciones que deseen formular respecto de cada artículo incluido en el título en consideración.

— Se citan y aprueban los títulos I y II.

— Se cita el título III.

**Sr. Trilla.** — La bancada radical vota negativamente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita y aprueba el título IV.

— Se cita el título V.

**Sr. Trilla.** — Nosotros votamos por la negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita el título VI.

**Sr. Trilla.** — Mi bloque vota por la negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Trilla.** — Además — no sé si estoy a tiempo — solicito que por Secretaría se dé lectura a la propuesta de artículos que oportunamente enviara. Disculpenme, no sé si llegué a tiempo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por la mecánica de la votación, se debe votar primero el artículo tal como figura en el dictamen. Ello implica la negativa para cualquier modificación si el resultado de esa primera votación es positivo.

**Sr. Trilla.** — Lo único que pido es que se lea por Secretaría la propuesta a fin de que quede asentada en el Diario de Sesiones.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se toma nota de lo solicitado por el señor senador, y por razones prácticas se insertará el texto en el Diario de Sesiones.

— El texto propuesto por el señor senador Trilla es el siguiente:

#### TEXTO ALTERNATIVO 2 TÍTULO VI

Quebrantos anteriores al 31 de marzo de 1991

Artículo 31: Déjase sin efecto el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto

ordenado en 1986 y sus modificaciones para los quebrantos que tengan su origen en ejercicios fiscales cerrados hasta el 31 de marzo de 1991, no compensados a la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 32: El aumento de la obligación fiscal que resulte en cada ejercicio como consecuencia de la no deducción de los quebrantos a los que se refiere el artículo anterior, exclusivamente en la medida en que no generara cómputo como pago a cuenta del impuesto sobre los activos, será transformado en crédito fiscal conforme se dispone en el presente título.

Artículo 33: Los sujetos pasivos que tengan derecho a la obtención del crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior podrán solicitar a la Dirección General Impositiva su reconocimiento una vez presentada la declaración jurada y pagado el impuesto respectivo, en cuyo caso se considerarán deudas del Estado nacional al 31 de marzo de 1991.

Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de los Bonos de Cancelación de Deudas en pesos creados por la ley 23.982, siendo de aplicación dicha norma legal y su reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto en este título.

— Se cita el título VII.

**Sr. Trilla.** — Solicito que en este caso se vote artículo por artículo, dado que en algunos de los artículos de este capítulo votaremos afirmativamente y en otros lo haremos negativamente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar por artículo.

— Se cita y aprueba el artículo 34.

— Se cita el artículo 35.

**Sr. Trilla.** — Votaremos negativamente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se citan y aprueban los artículos 36 y 37.

— Se cita el artículo 38.

**Sr. Trilla.** — Votamos por la negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se cita y aprueba el artículo 39.

— Se cita el artículo 40.

**Sr. Romero.** — Pido la palabra.

**Sr. Posleman.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: solicito que se tenga en cuenta el mensaje de la Cámara de Diputados que lleva el número 158, que aclara que en el punto 3 del artículo 40, donde dice "provincias", debe decir "jurisdicciones".

**Sr. Presidente (Menem).** — Se toma debida nota.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Posleman.** — Señor presidente: propongo una modificación conforme a lo que exprese cuando hable en la consideración en general.

De acuerdo con ello, el artículo 40 quedaría redactado de la siguiente manera: "La recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá de la siguiente forma: 1º) El 16 por ciento se distribuirá entre todas las provincias conforme al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas; los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social. 2º) El 84 por ciento restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la ley 23.548".

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer término el artículo 40 tal como figura en el dictamen, con la aclaración formulada por el señor miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Cass.** — Quiero dejar constancia de mi voto afirmativo en este artículo.

**Sr. Brasesco.** — Señor presidente: dejo expresa constancia siendo coherente con la posición de mi gobierno provincial, de mi voto en contra.

**Sra. Malharro de Torres.** — En el mismo sentido, dejo sentado mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se toma nota de lo manifestado por los señores senadores.

— Se citan y aprueban los artículos 41 y 42.

— El artículo 43 es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

39

#### LEY DE PUERTOS

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Obras Públicas, de Transportes, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto sobre ley de puertos.